



UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS

CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES
DE MÉXICO Y CENTROAMÉRICA

T E S I S

ACCIÓN COLECTIVA Y PARTICIPACIÓN POLÍTICA EN COMITÁN, CHIAPAS 1970-2004

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE

MAESTRA EN CIENCIAS SOCIALES CON OPCIÓN EN ESTUDIOS FRONTERIZOS

PRESENTA
FLOR MARÍA PÉREZ ROBLEDO

COMITÉ TUTORIAL

**DIRECTORA DRA. MARÍA DEL CARMEN GARCÍA AGUILAR
DR. MIGUEL LISBONA GUILLÉN
DR. LUIS RODRÍGUEZ CASTILLO**



San Cristóbal de Las Casas, Chiapas

Septiembre de 2005.

2014 Flor María Pérez Robledo

Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas
1ª Avenida Sur Poniente núm. 1460
C.P. 29000, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México
www.unicach.mx

Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica
Calle Bugambilia #30, Fracc. La Buena Esperanza, manzana 17, C.P. 29243
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
www.cesmeca.unicach.mx

ISBN: **978-607-8240-53-1**

REPOSITORIO INSTITUCIONAL DEL CESMECA-UNICACH



Acción colectiva y participación política en Comitán, Chiapas 1970-2004. Por Flor María Pérez Robledo se encuentra depositado en el repositorio institucional del CESMECA-UNICACH bajo una licencia Creative Commons reconocimiento-nocomercial-sinobraderivada 3.0 unported license.

**FORMAS DE ACCIÓN COLECTIVA Y PARTICIPACIÓN
POLÍTICA EN COMITÁN, CHIAPAS
1970-2004**

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	1
CAPÍTULO I. ACCIÓN COLECTIVA Y PARTICIPACIÓN POLÍTICA: UNA PERSPECTIVA DE ANÁLISIS SOCIOLÓGICO.	13
1.1 Los Movimientos sociales: viejas y nuevas formas de acción colectiva.	
1.2 Movimientos sociales, partidos y sistemas políticos	20
1.3 Las dimensiones del conflicto y el cambio en los movimientos sociales.	23
CAPÍTULO II. FORMACIÓN HISTÓRICA Y CONTEMPORÁNEA DEL MUNICIPIO DE COMITÁN: SOCIEDAD, POLÍTICA Y VIDA COTIDIANA	34
2.1 Forjando patria. La construcción histórica de las identidades políticas y sociales en Comitán	34
2.2 Comitán y los desafíos del último tercio del S. XX. Las dimensiones estructurales de la sociedad local	50
CAPITULO III. FORMAS DE ACCION COLECTIVA Y DE PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LA SOCIEDAD COMITECA	64
3.1 La emergencia de las trincheras opositoras en Chiapas	64
3.2 Las primeras organizaciones de oposición en Comitán y en el entorno estatal y regional	70

3.3 Las primeras trincheras de la oposición vinieron del campo, no de la ciudad: el movimiento campesino	75
3.4 El movimiento magisterial: un paso a la ciudad	82
3.5 Entre los intereses de clase y la defensa de las “identidades” restringidas	84
3.6 Las expresiones emergentes de la acción colectiva en el espacio urbano de Comitán	99
3.7. Acción colectiva en una periferia. Una lectura de conjunto.	111

CAPÍTULO IV. DE ALTERNANCIA Y DEMOCRACIA O DE RESISTENCIA AL CAMBIO POLÍTICO EN COMITAN

4.1 La alternancia política en Chiapas	119
4.2 La alternancia de la presidencia municipal de Comitán de Domínguez. ¿triunfo de los partidos políticos, de la sociedad civil o de quién?	123
4.2.1 La historia de una estrategia de coalición partidaria: ¿sacar al PRI del gobierno municipal es la única meta?	125
4.2.2 La historia reciente de las elecciones municipales y el arribo de un gobierno municipal de alternancia en el año 2001	143
4.3 Ciudadanía, sociedad civil y partidos políticos	151
4.4 La elección municipal de 2004. Del encanto al desencanto ciudadano	154
4.5 La lección electoral ¿Qué todo cambie para que todo siga igual?	165

CAPÍTULO V. CONSIDERACIONES Y REFLEXIONES FINALES

5.1 De la teoría y sus articulaciones con una realidad social históricamente dada	171
5.2 Historia, espacio y tiempo de la acción social.	177
5.3 Con todo, la sociedad chiapaneca se mueve	182
5.4 La democracia electoral y sus regresiones	187

BIBLIOGRAFÍA CITADA Y CONSULTADA

GLOSARIO DE SIGLAS

194
203

AGRADECIMIENTOS

Realizar esta tesis significó varias cosas, una de ellas fue decidirse a ser parte de la primera generación de la Maestría en Ciencias Sociales, impulsada por el CESMECA. Esta decisión llevaba sus riesgos, pues sabía que podía resultar particularmente complicado tanto para maestros y directivos como para quienes decidimos inscribirnos en el programa. Se trataba pues, de ‘abrir camino’.

El proceso no fue fácil, menos para quienes no teníamos todo el tiempo para dedicarnos por completo a los estudios. Creo que el esfuerzo valió la pena y el CESMECA tiene ahora la responsabilidad de impulsar la consolidación de la maestría, aprendiendo de los errores para que lo que sigue sea mejor.

El tema de investigación elegido tiene que ver con las propias preguntas y preocupaciones que generan en mí la participación de la gente y mi pasión por las cuestiones de la ‘cosa pública’, en un estado que vive aceleradas transformaciones sociales y políticas, sin perder de vista sus vínculos con lo nacional. Creo que lo menos que podemos hacer quienes queremos seguir aproximándonos a estos temas desde las ciencias sociales es, no simplificar las cosas.

Este trabajo debe mucho a los aportes de quienes conforman mi comité tutorial. Mi directora, la Dra. María del Carmen García Aguilar, compartió conmigo su interés y su pasión por el tema y me proporcionó una bibliografía extensa de su biblioteca personal. De manera generosa me abrió las puertas de su casa para dialogar cuantas veces fuera necesario, orientándome y animándome en todo momento. Lo mismo puedo decir de mis lectores, el Dr. Miguel Lisbona Guillén y el Mtro. Luis Rodríguez Castillo, dispuestos a aportar su tiempo y sus comentarios siempre pertinentes, atinados y sobre todo, muy críticos.

Agradezco el diálogo enriquecedor con mis compañeros de la maestría, tanto durante el período de clases como al compartir las vicisitudes y peripecias de nuestras respectivas investigaciones; asimismo el diálogo con José Luis Escalona y Martín de la Cruz López, quienes realizaron valiosos comentarios a mi trabajo.

Quiero agradecer también la solidaridad de la Mtra. Ana María Rincón, directora de la Facultad de Historia de la UNICACH, de Clodoveo Malo, Gerardo González y Fernando García Flores. Y qué decir de todos aquellos que me dieron su confianza y conversaron conmigo sobre sus esperanzas, utopías y escepticismos: militantes y líderes de organizaciones sociales y partidos políticos, de organismos civiles, personas que dijeron no tener adscripción política alguna, compañeros y amigos, a todos ellos mi gratitud infinita.

Finalmente quiero expresar mi agradecimiento profundo al apoyo incondicional que durante el proceso de investigación me brindaron Mirtha Luz y Kathy, con sus diligentes gestiones, pero sobre todo, agradezco su cariño y comprensión.

Dedico esta tesis con profundo amor a César y Mario, y a la memoria de mi madre, etérea estrella cuya ausencia es presencia.

Balún Canán, Octubre de 2005.

INTRODUCCIÓN

La presente tesis pretende ser un análisis sociológico de las formas actuales de la acción colectiva y de sus expresiones en movilizaciones sociopolíticas que, en un contexto local, me permitan identificar la naturaleza de las transformaciones que están ocurriendo en la sociedad y la política. Como señala Gledhill, el estudio de estos fenómenos en el espacio local posibilita una mejor comprensión de cómo éstos no sólo reflejan otros procesos sociales y políticos mayores y conflictos de escala nacional, sino que pueden contribuir a ellos (Gledhill, 2000).

Este interés no es fruto de la casualidad. Crecer en la localidad de estudio, la ciudad y el municipio de Comitán, me permitió contar con un conocimiento previo de algunos procesos sociopolíticos que ahí han tenido lugar y que, puesto en perspectiva, se tradujo en un interés particular por entenderlos y comprenderlos. Conocer a muchas personas, como individuos y como miembros de colectividades que se movilizan en el entorno local y regional, ha significado una ventana abierta para tener un acercamiento a los procesos sociopolíticos que me interesa estudiar. Conversar y compartir con todos ellos miradas sobre el pasado y el presente, y sus perspectivas hacia el futuro, ha sido una experiencia enriquecedora.

El interés por el tema de investigación tiene que ver con una preocupación intelectual y política. Al reconstruir el itinerario de la acción colectiva y de la participación política de la sociedad local, una de las primeras preguntas que me hago es la siguiente: ¿Qué ha pasado con esos actores colectivos que se asumieron con una identidad política de “izquierda” o de “oposición”? ¿Existe o existió realmente la izquierda como un proyecto político-ideológico del que emanaron estrategias y prácticas reales orientadoras de un movimiento social encaminado a un cambio social radical?

Históricamente, la izquierda y la derecha fueron nociones estructuradoras de la comunicación y acción política. En el caso de México, remontándonos a 1968 como un parteaguas en la historia política nacional, Foweraker ha planteado que desde entonces los antagonismos de clase se desplazan por la lucha *popular-democrática*, reconociendo que las luchas de la sociedad civil se dirigen también a un conjunto más amplio e implícitamente democrático de demandas, y descubren formas de organización y capacidades estratégicas que el Estado encuentra más difíciles de contrarrestar y de contener (Foweraker, 1989: 93). Al mismo tiempo, las respuestas del Estado se han orientado a redefinir los términos de un control más acotado, supeditándose al modelo de representación legal e institucional, como en su momento lo fueron las políticas de apertura y liberalización política (Pereyra y Woldenberg, 1988). En este marco y situándonos en la realidad chiapaneca, ¿cuáles son las expresiones empíricas de este planteamiento analítico de Foweraker y otros analistas partidarios del cambio político después del movimiento del 68?

Al realizar este trabajo de investigación me planteé como objetivo general analizar las formas socio-históricas de la acción colectiva y movilización social en la localidad y sus transformaciones durante las tres últimas décadas, que permitieran no sólo identificar sus potencialidades o limitaciones para obtener reivindicaciones materiales, y de participación política, sino también identificar la naturaleza de los cambios en sus vínculos con la política y sus instituciones, cambios que han hecho posible el ensanchamiento de lo político, es decir, el espacio de los conflictos emanados del sistema de diferencias inherentes a una sociedad (Serrano, 2002: 29).

Dentro de los objetivos más específicos me planteé analizar los procesos de formación, desarrollo y transformación de la acción colectiva y su expresión organizativa local a partir de sus componentes básicos: base social, demandas, principios, liderazgos, formas de protesta y movilización social, alianzas y discurso ideológico; las relaciones y vínculos que se establecen entre las organizaciones y los

líderes de los movimientos y los partidos políticos, que permita inferir la correspondencia o no entre organización social y representación política, como espacio de participación en la toma de decisiones públicas.

Las interrogantes más específicas que guían esta investigación y que pretenden haber sido respondidas son las siguientes: ¿En torno a qué recursos o reivindicaciones se producen formas de acción colectiva en la localidad? ¿Cómo se produjo en la localidad un ámbito político más plural (competencia por preferencias electorales y puestos públicos de autoridad y representación) en los últimos años? ¿De qué manera los partidos políticos y las elecciones son retomados y asumidos por la población? ¿Cuáles son las fuentes de la lealtad electoral y cómo se produce? ¿Las expresiones y formas de acción social y participación política local, constituyen expresiones políticas encaminadas racionalmente a la construcción de la democratización de la vida política local?

Ligado al interés del conflicto y sus actores, el tema de estudio tiene otra justificación también de índole académica y política que está relacionada con la irrupción del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 1994, que mostró la complejidad de un escenario sociopolítico caracterizado por la diversidad de intereses materiales y simbólicos en disputa y propició el desarrollo de una diversidad de diagnósticos centrados en la acción social y la participación política de los actores sociales. En este campo problemático se inscribe mi interés por recuperar los conceptos y sus adscripciones teóricas y metodológicas, pero a la luz del cernidor de las mediaciones de la realidad local. Conceptos como los de sociedad civil, democracia, ciudadanía, movimientos sociales, así como los de clase y luchas sociales, corporativismo, movimiento o lucha popular, pueblo y populismo, exigen ser entendidos dentro del contexto histórico y conceptual en el que se desarrollan.

De esta manera, la categoría de *acción social*, entendida como:

la secuencia intencional de actos con sentido que un sujeto individual o colectivo lleva a cabo con base en un proyecto concebido con el fin de conseguir un objetivo, o transformar un estado de cosas existentes, en presencia de una determinada situación de la que cuenta con información y conocimiento (Gallino, 1995: 1)

y la de *actor social* o colectivo, entendida como:

los grupos humanos estructurados por vínculos, normas, valores e imaginarios propios, grupos que construyen a la sociedad y participan en su producción y reproducción (Zapata, 1992),

son categorías que retomaré a través de una de sus expresiones concretas, la de *movimientos sociales*, en sus tradicionales connotaciones clasista y popular (lucha de clases inherentes al sistema productivo, luchas por el acceso al poder político y luchas por los derechos sociales) y, en lo que se ha dado en llamar *nuevos movimientos sociales* (luchas por marcos alternativos de sentido) que registran demandas múltiples e indiferenciadas, estructuradas a partir del potencial heurístico que algunos teóricos encuentran en el concepto de *sociedad civil*, concepto que da cuenta de la emergencia de “nuevos sujetos o actores” productores de nuevas subjetividades (Calderón, 1987; Olvera, 1999; Melucci, 1999).

Esta tesis se propone indagar sobre las formas de la participación política de los movimientos sociales y sus actores, las organizaciones sociales y los individuos. La participación política involucra una diversidad de esferas y foros de discusión y acción generadas desde el espacio civil, sin necesariamente atravesar el espacio de las instituciones formalmente políticas. Sin embargo, en el México y en el Chiapas

actual, es inevitable no reconocer que una parte importante de la participación política de los actores colectivos está ocurriendo en el campo electoral.

El sustento de dicha participación, el sistema de partidos y el sistema electoral, han experimentado procesos que ciudanizan los procesos electorales y fortalecen la pluralidad de opciones partidarias y alternativas de cambio político. Ello no debe ocultar tampoco, que el campo aún privilegiado por los actores políticos y sociales sigue anclado en el corporativismo, modelo que ante la crisis fiscal deviene en expresiones clientelares de nuevo cuño que caen en el terreno metaconstitucional.

La complejidad que caracteriza el análisis de la dimensión política de los movimientos sociales, es reconocida por los especialistas quienes consideran que requiere de ajustes en el conjunto de los marcos interpretativos y de los conceptos instrumentales clásicos (Tilly, 1998; Cohen y Arato, 2000). Habida cuenta de ello, recupero algunas propuestas teóricas y metodológicas de Melucci (1995), quien encara la relación entre la formación de la acción colectiva y la participación política.

La estrategia metodológica fue asumir como punto de partida un estudio de caso, es decir, el estudio de un municipio, Comitán de Domínguez, y al mismo tiempo reconstruir el campo de interacciones de lo local con el entorno regional, estatal y nacional. La unidad de estudio, como expresión de la acción colectiva y de participación política, son los actores sociales reales, llámense grupos u organizaciones sociales, y sus expresiones de movilización, a las que defino como movimientos sociales. Se trata de acciones de grupos estructurados por vínculos, intereses, valores e imaginarios relacionadas con la vida cotidiana y la contingencia, visibles durante situaciones de crisis material y de coyunturas sociopolíticas.

Como señalé páginas atrás, trasladar estas preocupaciones a un campo de análisis sociológico y político, tiene la finalidad de conceptualizar a los movimientos

sociales reales, mismos que registran una heterogeneidad de actores e intereses que superan con creces las clasificaciones dicotómicas: clasistas o de estratificación social; tradicional o moderno; vertical u horizontal.

Estas preocupaciones están contenidas en el capítulo I, en donde se hace un breve recuento del estado de la cuestión que en términos teóricos han desarrollado ciertas corrientes o escuelas de la sociología, tratando de aterrizar con un marco conceptual y analítico viable para abordar el tema de estudio: los movimientos sociales y en ese marco, las formas de acción social y de participación política.

En el capítulo II presento una síntesis histórica de las particularidades y singularidades internas y externas de los procesos formativos de la sociedad de Comitán. Pese a la aparente simplicidad de la vida cotidiana de los pobladores, centrados todos en satisfacer sus necesidades primarias de reproducción biológica y social, es posible identificar, múltiples procesos de relaciones que definen los campos y límites de la pertenencia, solidaridad y conflicto. Se trata de tensiones que derivan de las relaciones entre los sujetos y determinados *ethos*, como el de la tradición y el de la modernidad (Touraine, 1994 [1992]). Hasta los años setenta, aún frente a las presiones de orden material, los límites del cambio social se dirimen en un campo social dinamizado por estas oposiciones: lo tradicional no termina de irse y lo moderno no acaba de llegar, conviven, se yuxtaponen y, como señala Calderón (1987), gestan procesos relativamente inéditos y procesos sociales con el peso de uno u otro de los vectores.

En este mismo capítulo recupero los desafíos del último tercio del S XX para la sociedad local, destacando las presiones del crecimiento demográfico y las exigencias que ello implica en términos de servicios e infraestructura económica y social; destaca también, una estructura económica fincada en el sector agropecuario incapaz de incorporar a la fuerza laboral local y regional. Desde los años ochenta, la

ciudad de Comitán se ha venido configurando como un espacio urbano que centraliza un número importante de dependencias gubernamentales, tanto federales como estatales, que son las que brindan apoyo administrativo y de servicio a los municipios de la región fronteriza, por lo tanto, en el sector terciario se encuentran empleados un número importante de burócratas, destacando además el personal que se emplea en el ayuntamiento municipal y en los servicios en materia de educación y salud. En fin, podríamos decir que la dinámica económica y poblacional del municipio y de la ciudad, hace referencia a los factores materiales que van a contextualizar y a explicar en parte las formas de acción colectiva y de participación política de la sociedad local durante las últimas tres décadas del siglo XX.

En el capítulo III, asumiendo la mirada estatal de la cual Comitán forma parte, sintetizo la historia social y política del periodo 1970-2000. Se pretende con ello, 1) definir el carácter de las lógicas que, en el tiempo, modulan a las formas de acción colectiva y de participación política local; 2) indagar sobre las generalidades y las particularidades de la acción colectiva; 3) reconocer la composición social de quienes se movilizan; 4) develar las formas de organización y de ejercer el liderazgo 5) identificar el peso que las alianzas y las redes sociales ejercen en la trayectoria temporal y espacial de las movilizaciones, y en las formas de auto-evaluación de los resultados.

A la luz del tiempo, al recorrer el itinerario seguido por los primeros actores sociales y políticos que cuestionaron el orden existente, resulta difícil su encasillamiento en un tipo de acción colectiva y de participación política, expresada en un tipo de movimiento social. Ciertamente hubo un movimiento campesino, iniciado a mediados de los años setenta, como también hubo un movimiento magisterial en los años ochenta, sin embargo, fueron movimientos *populares* que expresaron múltiples tensiones al dar cobijo a una diversidad de intereses y, que entrañaron discursos político-ideológicos que prometían proyectos particulares de

cambio social; tuvieron como espacio común la lucha por la integración al sistema en las mejores condiciones posibles, lucha que Foweraker define como espacios de lucha por una mejor distribución de la riqueza social y una participación política (1989).

En Chiapas, los estudios sobre los movimientos *populares* de esas décadas, invisibilizaron no sólo las tensiones entre una emergente oposición local, que demandaba el reconocimiento de derechos constitucionalmente establecidos, y el papel de las fuerzas nacionales identificadas de izquierda o de oposición surgidas del movimiento estudiantil de 1968, con intereses partidistas o revolucionarios, sino también, invisibilizaron los impactos de un desarrollismo populista (Funes y Saint-Mezard, 1994) que moduló los términos de un proceso de integración económica y de incorporación activa de las masas al régimen de partido único. En este marco, una lectura realista nos arroja el hecho de que en los años setenta las fuerzas de la izquierda llegaron a Chiapas desde el centro del país, con distintos proyectos político-ideológicos, en los que era visible una promesa de sociedad futura anclada en un ideario o imaginario ideológico. Sin embargo, estos discursos no lograron arraigar en la conciencia de la población, al menos no con la intensidad y la dirección con la que pretendían sus promotores.

Comitán, como centro catalizador de las fuerzas políticas y sociales de la región Fronteriza, vivió de manera contradictoria la constitución de diversos actores colectivos. En los años setenta, el movimiento campesino, centrado en la lucha agraria, estuvo prácticamente ausente en el municipio y, salvo excepciones, también en su entorno regional. Lo visible en esos años, fue la adscripción de los distintos sectores de la sociedad local a las organizaciones corporativas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y por las propias políticas gubernamentales que exigían la mediación de las organizaciones para atender las demandas sectoriales. Sin duda alguna, fue la etapa gloriosa del populismo en donde los brazos corporativos del PRI, como la Confederación Nacional Campesina (CNC), la Central de Trabajadores

Mexicanos (CTM) y la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), eran el puente que mediaban entre el elector y el partido.

Pero la estrategia desarrollista populista tuvo una vida muy corta en Chiapas. La crisis petrolera y el ajuste fiscal del Estado mexicano, como estrategia para superar dicha crisis, propició que las lealtades clientelares comprometidas con los gobiernos y el partido de Estado, sufrieran un abrupto revés, como también lo sufrieron el movimiento campesino y el magisterial y otros movimientos aún marginales que cuando se enfrentaban al orden local imperante con un discurso político radical, asimilaban como suyas las luchas por los derechos de ciudadanía, particularmente los derechos sociales, como el acceso a la tierra, a los acervos productivos y a los servicios básicos. La sociedad de Comitán, de algún modo, fue protagonista de estos eventos.

Como se plantea en el capítulo III, lo que registramos ya entrada la década de los ochenta y en los años noventa, es lo que García (2003) define como la dislocación y el fraccionamiento de la acción colectiva, identificando dos principios: el primero está dado por identidades colectivas aún sectorializadas cuyas estrategias de acción y de participación política, ya no reproducen la lealtad clientelar totalizante hacia el sistema político y el partido, sino que inauguran una lealtad clientelar restringida, e incluso personalizada. Desprotegida del patronazgo del Estado mexicano, la creciente población pobre paradójicamente encuentra refugio en líderes que con tintes facciosos están dispuestos a seguir a políticos que les garanticen ventajas y privilegios. Resulta paradójico, porque el centro del conflicto sigue girando en torno al Estado, y porque los líderes siguen reproduciéndose en base al éxito de su gestoría en relación con éste y sus aparatos gubernamentales.

El otro principio ordenador de la acción colectiva local se vincula con el primero en tanto comparte el proceso de fraccionamiento de la acción colectiva y al

igual que el primero recupera las reivindicaciones de los derechos humanos esenciales, pero se separa de éste en la medida en que su estrategia de lucha es más autónoma y autorreferencial, forjando así movimientos sociales o prácticas que rompen o tienden a romper los vínculos con los actores políticos y con las instituciones de naturaleza política. La sociedad comiteca y su entorno regional es un espacio social ilustrativo de ambas experiencias. Así, podemos decir que a la transformación política de Comitán contribuyó la llegada de actores sociales y políticos, que durante los años ochenta se asentaron en el municipio para trabajar en torno a la problemática del refugio guatemalteco. La cabecera municipal también será el espacio para llevar a cabo las diversas movilizaciones campesinas y *populares*, con demandas y exigencias que si bien siguen ancladas en los satisfactores básicos, a ellas se irán incorporando demandas de carácter eminentemente políticas. Cabe destacar que, como en otras regiones del estado, el papel de la diócesis de San Cristóbal en estos procesos organizativos fue de fundamental importancia.

También en el capítulo III, recupero algunas de las expresiones de la acción social y de la participación política de los actores locales, del período 1994 – 2000, particularmente en el ámbito urbano, en donde es visible la influencia del alzamiento armado. En el estado se vive un reavivamiento de iniciativas de confluencia entre las organizaciones sociales de frente a la nueva coyuntura, se multiplican las acciones nuevamente en torno a la tierra, no sólo en el ámbito rural, sino también en espacios urbanos, por lo que se vive un regreso de las organizaciones agrarias, ahora a las ciudades, que se vinculan a sus habitantes para reivindicar acciones de dotación de infraestructura urbana.

El capítulo IV recupera una forma particular de participación política, aquella que está fincada en el sistema de la representación política democrática, que posibilita un marco institucional en la lucha por el poder político y su ejercicio. La importancia de esta forma de participación política en los espacios locales, como Comitán, está

propiciando cambios importantes en la acción social, particularmente cambios en el mundo de las intermediaciones sociales, es decir las organizaciones sociales y sus expresiones movimentalistas. Aquí hago un recuento de los recientes procesos electorales en la localidad y el distrito, identificando probables puntos de inflexión a partir de las elecciones de 1995, con respecto al comportamiento de los procesos electorales pasados.

Lo importante de este capítulo, además de recuperar la dimensión real de las elecciones como espacio de participación política, es que se recupera el comportamiento social y político de las organizaciones sociales. Identifico que éstas, muestran ahora un mayor interés por establecer alianzas y negociaciones con los partidos políticos, ofreciendo los votos de sus bases a cambio de puestos de elección popular, puestos administrativos en el gobierno local y otros beneficios para sus agremiados. Es evidente entonces que los espacios donde se disputan los recursos han cambiado y es el espacio municipal, el gobierno local, donde los actores locales se encuentran. Los riesgos de esto, ahora en un campo de lucha política democrática, es la persistencia e incluso el reforzamiento de las lealtades clientelares hacia líderes que recrean un faccionalismo que no contribuye a un proceso republicano y democrático. Los dos últimos procesos electorales locales nos proporcionan información en ese sentido.

En Chiapas las primeras experiencias de alternancia son recientes, salvo excepciones, ocurren de manera importante a partir de las elecciones locales de 1995; en el 2000 se dio la primera alternancia en la gubernatura, bajo una estrategia de formación de alianzas de partidos políticos. En Comitán, en la elección municipal de 2001 se repitió la estrategia aliancista y tuvo como resultado la primera experiencia de alternancia política en la presidencia municipal. La evaluación de este proceso de cambio político deja muchas interrogantes.

En el capítulo V realizo una lectura global del tema de estudio dejando sentado los hallazgos que considero más importantes, los cuales hacen referencia a los cambios y las continuidades de la acción colectiva y las formas de participación política. La lección conceptual y metodológica que se puede derivar de esta experiencia de investigación es la necesidad de asumir una visión realista del campo social o político que se investiga, pues el pasado material y subjetivo define en mucho la trayectoria de la acción social y las formas de la participación política de la gran mayoría de las organizaciones sociales. Así, las teorías de la acción social cobran sentido reconociendo sus límites y potencialidades en una realidad social dada (Zémelman, 1993; Gunder y Fuentes, 1989).

Finalizo esta introducción con un breve comentario sobre mis informantes. Se realizaron entrevistas a líderes campesinos y sociales, militantes y dirigentes de partidos políticos, ex propietarios de tierras, funcionarios públicos, integrantes y dirigentes de organizaciones urbanas, miembros de organismos no gubernamentales, entre otros. Fueron entrevistas abiertas que posibilitaron que ellos expusieran, además de datos y fechas sobre eventos importantes en la vida social y política del estado, municipio o localidad, sus recuerdos, sus anhelos y utopías, pero también los desengaños y los sentimientos de desesperanza que hoy caracteriza a algunos de ellos y que está propiciando un comportamiento político pragmático. También se realizaron entrevistas y se sostuvieron conversaciones informales con personas que dijeron no tener adscripción política, quienes accedieron a proporcionar información y compartir su punto de vista respecto a ciertas coyunturas tanto del pasado como de la historia más reciente. La mayoría de los entrevistados prefirió que omitiera sus nombres, decisión que me pareció ético considerar, no obstante esta restricción, quiero señalar que mis entrevistados tienen una trayectoria activa en la historia social y política contemporánea de Comitán y su entorno regional.

CAPITULO I

ACCIÓN COLECTIVA Y PARTICIPACIÓN POLÍTICA: UNA PERSPECTIVA DE ANÁLISIS SOCIOLÓGICO

1. 1. Los Movimientos sociales: viejas y nuevas formas de la acción colectiva.

Ha sido preciso realizar un breve recuento de los planteamientos teóricos de diversas escuelas de la sociología, que me permitieran construir un marco conceptual analítico viable para abordar el tema de los movimientos sociales y, en ese marco, las formas de acción social y de participación política. Así, estoy situándome en un plano que pretende articular las propuestas conceptuales con una realidad social que de alguna manera le plantea problemas a la teoría y le exige un desarrollo analítico y conceptual en esa dirección.

El estudio de la acción colectiva, expresada en los movimientos sociales, ha sido un campo analítico privilegiado por la sociología. Alberto Melucci (1999) plantea que en los años setenta en las sociedades complejas se dio un punto de inflexión en las principales orientaciones de los movimientos sociales que dominaron el escenario sociopolítico. De esta manera, se pasó de un modelo que hace del Estado el campo de conflicto histórico por excelencia, a otro dominado por la creciente independencia de las formas no institucionales de acción colectiva, en donde el espacio social de los movimientos sociales representa un área diferenciada del sistema y ha dejado de coincidir con las formas tradicionales de organizaciones de la solidaridad o con los canales convencionales de la representación política.

Más cercanos a nosotros, este mismo fenómeno ocurre en América Latina en los años ochenta y noventa. En el caso de nuestro país, y América Latina en su conjunto, la reflexión analítica inicial de estos movimientos, en particular los de carácter urbano, estuvieron articulados a los procesos de industrialización y sus

impactos en las estructuras laborales, cuya movilidad y complejidad implicó la formación, las más de las veces anárquica, de las urbes y la complejización de la vida social. El modelo analítico de la modernización estuvo afianzado por las políticas distributivas e integradoras de los Estados nacionales que parecían caminar en paralelo con los procesos de industrialización, particularmente en países como México, Brasil, Argentina y Chile (Cardoso y Faletto, 1969 y 1978). El modelo de la modernización, y su sistema de acción colectiva, expuso así a una sociedad tradicional que inevitablemente transitaría hacia la modernización y la modernidad¹. Desarrollo, crecimiento económico, distribución y seguridad, fueron temas clave que, sobre el marco de la soberanía e ideología nacional, afianzaron el marco analítico de las relaciones entre la sociedad y el Estado (Córdova, 1976; Zapata, 2001).

La dimensión social y organizativa de este modelo, estructurada por las asociaciones voluntarias y las organizaciones gremiales y corporativas, mantuvo una fuerte dependencia hacia el Estado, restándole autonomía a la sociedad civil para moderar la tendencia inherente del sistema político a los excesos en el uso del poder. Con todo, si bien el modelo formal contemplaba una forma de democracia política de tipo representativo, y mediatizada formalmente por la competencia entre partidos, en la práctica se desarrolló una estructura corporativa que Schmitter (1992) define como de tipo estatalista, que limitó el alcance de los conflictos desde la esfera de la sociedad al terreno de la política.

¹ Cardoso y Faletto (1969 y 1978), señalan que esta perspectiva de análisis “sostiene que las sociedades latinoamericanas pertenecerían a un tipo estructural denominado generalmente “sociedad tradicional” y que se está produciendo el paso a otro tipo de sociedad llamada “moderna”. En el curso del proceso de cambio social parecería que antes de constituirse la sociedad moderna se forma un patrón intermedio híbrido, el cual caracteriza a las sociedades “en desarrollo”. Se invoca entonces la noción de dualismo estructural”. Esta perspectiva de análisis, señalan Cardoso y Faletto, se registran en los trabajos teóricos de Talcott Parsons (1951), de Daniel Lerner (1958), Albert O. Hirschman (1958) y en los trabajos empíricos, formulados desde esta perspectiva, de Redfield (1940), Hoselitz (1969), y Gino Germani (1962).

En los años ochenta y noventa, frente a una crisis económica de enormes proporciones y frente a la naturaleza neoliberal de su salida, es visible la erosión del poder estatal, en tanto que el ajuste fiscal prácticamente va a despojar al Estado de sus poderes distributivos e integradores, o al menos lo deja en una posición vulnerable para mantener, en el marco institucional y en el de la negociación, el control y la regulación de los conflictos sociales y la cada vez más inevitable politización de éstos.

Las ciencias sociales, en una de sus vertientes, procesará estas nuevas realidades reconociendo que las transformaciones de la estructura económica están generando procesos agudos de exclusión y diferenciación sociales. En este marco, las luchas sociales se ven ampliadas y complejizadas por la presión del desempleo, la desinformalización del trabajo y la erosión del papel del Estado como prestador de servicios públicos. A este respecto, Calderón (1987) ilustra el complejo viejo-nuevo repertorio de las luchas sociales.

En síntesis, se han originado formas organizativas de características sumamente heterogéneas y disímiles: luchas en los asentamientos por vivienda y legalización de la tenencia de la tierra; luchas por el suministro de servicios sanitarios; agua, cloacas; lucha contra la carestía de la vida o por evitar el pago de impuestos excesivos; caceroleos; luchas por la obtención de servicios de transporte, ollas populares, paros cívicos, cooperativas de consumo para lograr el abastecimiento básico de alimentos; movimientos de pobladores; agrupaciones femeninas por el suministro del “vaso de leche” a los niños o de servicios de salud populares; movimientos ecologistas contra la contaminación del medio ambiente y contra el despilfarro de recursos no renovables, etcétera (Calderón, 1987: 79 y 80).

Sobre este complejo repertorio de las luchas sociales se desarrolla una tendencia teórico-analítica que intenta pensar la historicidad de la región, y a sus actores centrales. Las tensiones de este nuevo paradigma se establecen sobre todo con la teoría del conflicto estructurada por el marxismo, particularmente con la teoría de la dependencia que había cobrado fuerza explicativa en América Latina (Guido y

Fernández, 1989; Osorio, 1999). En síntesis, la nueva propuesta se estructura a partir del potencial heurístico del concepto de *sociedad civil*, reconociéndose en el terreno de la realidad social la emergencia de “nuevos sujetos” con formas inéditas de activación, movilización y capacidad de organización. Sobre el origen de estos “nuevos sujetos”, los críticos de este paradigma señalan que se trata de fuerzas sociales originadas y constituidas en las *coyunturas*, en tanto espacios de formación de una nueva subjetividad contingente en los actores (Guido y Fernández, 1989: 45).

Así, esta propuesta analítica tiene su punto de partida en el reconocimiento de que las propias transformaciones de las sociedades están generando procesos de modernización en las relaciones sociales y en la sociedad civil. Se trata de demandas múltiples de participación que no encuentran reconocimiento en el sistema de partidos y en el conjunto del sistema político institucional (Calderón, 1987: 80). De este planteamiento deriva la centralidad que asumen los movimientos sociales y el carácter de sus demandas.

En este marco, el estudio y el debate analítico de los movimientos sociales cobra importancia en tanto existe el imperativo de inquirir sobre el carácter y la naturaleza de su vinculación y relación con las dimensiones más complejas del cambio social, y con el sistema político y su marco institucional. Desentrañar las dimensiones de la acción colectiva y las formas de participación política se convierte así, en un imperativo que rebasa tanto las teorías evolutivas de la modernización como la teoría del conflicto centrado en la lucha de clases.

El programa teórico y metodológico para encarar tal desafío tiene su espacio en las tradiciones teóricas y metodológicas interpretativas, que sostienen que el objeto de las ciencias sociales es el estudio del sujeto que crea significados sociales y culturales en su relación con los otros, por lo que el quehacer de la teoría social es comprender los significados de la acción y de las relaciones sociales en sociedad.

Como un clásico de esta tradición interpretativa y comprensiva destaca Max Weber, cuyo aporte tipológico de la acción social ha derivado en categorías analíticas utilizables para, a través de la construcción de los “tipos ideales”, comprender todo tipo de acción social².

Por ‘acción’ debe entenderse una conducta humana (bien consista en un hacer externo o interno), ya en un omitir o permitir siempre que el sujeto o los sujetos de la acción enlacen a ella un sentido subjetivo. La ‘acción social’, por tanto, es una acción en donde el sentido mentado por su sujeto está referido a la conducta de otros, orientándose por ésta en su desarrollo” (Weber, 1983:5).

Al igual que el concepto de acción social, el otro concepto central que estructura el paradigma de los nuevos movimientos sociales, es el de sociedad civil, este último concepto estrechamente articulado a la teoría democrática y a los procesos contemporáneos de democratización política, cuyo espacio rebasa al de las instituciones políticas (Cohen y Arato, 2000). La centralidad del concepto de sociedad civil es que éste

indica un terreno de Occidente que se ve amenazado por la lógica de los mecanismos administrativos y económicos, pero que también es el principal espacio para la expansión potencial de la democracia bajo los regímenes democrático-liberales ‘que realmente existen’ (Cohen y Arato, 2000: 7)

² Acción social es la “secuencia intencional de actos con sentido que un sujeto individual o colectivo (a menudo designado como “actor” o “agente”) lleva a cabo escogiendo entre varias alternativas posibles, con base en un proyecto concebido anteriormente pero que puede evolucionar en el transcurso de la misma acción con el fin de conseguir un objetivo, o bien de transformar un estado de cosas existente en otro estado, más agradable, en presencia de una determinada situación [...] la cual es tenida en cuenta conscientemente por el sujeto en la medida en que dispone de información y conocimientos al respecto” (Gallino, 1995: 1). Weber habla de “determinantes” (o motivos, en el lenguaje contemporáneo) de la acción social y basándose en ellos distingue cuatro tipos fundamentales de acción: a) determinada de modo racional respecto de un fin; b) determinada de modo racional respecto de un valor, cualesquiera que sean las consecuencias; c) determinada por la afectividad, o sea por el predominio del sentimiento inmediato; d) determinada por la tradición, o sea por los hábitos adquiridos” (Gallino, 1995:2).

Ambos conceptos estructuran los distintos enfoques sobre los nuevos movimientos sociales, cuyo despliegue en las sociedades concretas implica identificar las complejas mediaciones que limitan o potencializan su valor analítico.

Según Melucci, los análisis actuales de la acción colectiva centran su interés en las formas visibles y organizadas de la acción colectiva, es decir, parten de la visibilidad de los actores políticos institucionales y no institucionales, subvaluando la dimensión subterránea y profunda de esta acción que se forma en el ámbito social, antes de expresarse como acción política. Plantea que este riesgo solo se supera definiendo los componentes analíticos del sistema político, su dependencia y su autonomía. Al sistema político hacen referencia los partidos, y hacia su interior suceden la mediación de los intereses, pero existen demandas y conflictos sociales que se escapan al menos en parte a esta competencia regulada. Así se constituyen otras formas de acción colectiva, los movimientos, cuyas raíces se buscan en las relaciones anteriores a la acción política (Melucci, 1995:229).

Este campo analítico ha privilegiado entonces las relaciones entre las experiencias de la vida cotidiana y la acción colectiva, las relaciones entre las redes ocultas en las que la gente trata de hallar sentido a su propia existencia y las manifestaciones públicas en las que expresa sus reclamos, demandas y quejas, frente a las autoridades (Melucci, 1999: 9). Se trata, pues, de un ángulo analítico que implica detenerse en las prácticas cotidianas para poder comprender las nuevas formas de acción colectiva. Metodológicamente implica establecer un vínculo entre las movilizaciones colectivas visibles y las formas menos evidentes de acción que realizan los individuos en sus esferas más íntimas de experiencia.

En suma, la dimensión empírica que privilegia esta propuesta, recae en los actores sociales, los partidos políticos y los intereses en su interior, las demandas y conflictos que competen a la esfera de la política institucional, las demandas y

conflictos previos a la acción; los momentos de transformación del movimiento en organización política, que implican procesos de movilización, formación de liderazgos y de ideología, estructura organizativa, etc.

Considerar a la acción colectiva como construcción social, cuestiona el supuesto de dicha acción colectiva como un fenómeno empírico unitario, pues el autor afirma que si existe unidad debería ser abordada como un resultado y no como punto de partida, no como evidencia, sino como hecho que debe ser explicado. Considera que la tarea del análisis sociológico debería ser cuestionar este dato, con el fin de indagar la unidad empírica para descubrir la pluralidad de elementos analíticos –orientaciones, significados y relaciones– que convergen en el mismo fenómeno (Melucci, 1999).

Siguiendo la tradición weberiana, define a la acción social como resultado de intenciones, recursos y límites, con una orientación construida por medio de relaciones sociales dentro de un sistema de oportunidades y restricciones. Por lo tanto, no puede ser entendida como el simple efecto de precondiciones estructurales, o de expresiones de valores y creencias. Los individuos, actuando conjuntamente construyen su acción mediante inversiones ‘organizadas’; esto es, definen en términos cognoscitivos, afectivos y relacionales el campo de posibilidades y límites que perciben, mientras que, al mismo tiempo, activan sus relaciones para darle sentido al “estar juntos” y a los fines que persiguen.

Los actores colectivos “producen” así, la acción colectiva porque son capaces de definirse a sí mismos y al campo de su acción (relaciones con otros actores, disponibilidad de recursos, oportunidades y limitaciones). Los individuos crean un “nosotros” colectivo compartiendo y ajustando por lo menos tres clases de orientaciones: las relacionadas con los fines de la acción (el sentido que tiene la acción para el actor); las vinculadas con los medios (las posibilidades y límites de la

acción) y las referidas a las relaciones con el ambiente (el campo en que tiene lugar la acción) (Melucci, 1999:43).

1.2. Movimientos sociales, partidos políticos y sistemas políticos

Como ya se ha señalado, diversos teóricos de los movimientos sociales reconocen que el ámbito conceptual de la dimensión política de los movimientos sociales, requiere de ajustes en el conjunto de los marcos interpretativos y de los conceptos instrumentales clásicos (Tilly, 1998; Cohen y Arato, 2000). Este reconocimiento obedece en buena medida a que la mayoría de las reflexiones sobre la dimensión política de los movimientos gira en tono a la teoría de la elección racional, particularmente la teoría de los juegos estratégicos, cuyo intento es alcanzar los niveles individual y colectivo y establecer interacciones entre ellos, que permitan la comprensión de la participación del individuo en acciones colectivas, como la participación en los campos de las elecciones y en la toma de decisiones públicas.

Melucci (1995) encara la relación entre la formación de la acción colectiva y la participación política e indaga sobre el proceso a través del cual se pasa de la acción colectiva a la organización política, tanto en la esfera de la política institucional –sistema político y partidos políticos-, como en las esferas autónomas que desafían el modelo tradicional de organización política. Se parte del presupuesto que los movimientos sociales y los partidos políticos son dos formas de la acción que desarrollan los sistemas contemporáneos. No obstante, debe reconocerse que los conflictos afloran más allá de los límites institucionalizados que regulan la competencia política y que permiten a un sistema producir las decisiones (1995:225).

Con respecto al sistema político, Melucci plantea que el análisis no puede ser realizado sin referirse a las relaciones sociales dentro de las cuales son producidos los

recursos fundamentales de una sociedad. Es de la distribución de estos recursos de lo que se ocupa el sistema político, y es respecto a los mismos, que se forman conflictos de naturaleza antagónica y nacen ciertas formas de acción colectiva. Empero, el análisis del sistema político exige también una consideración específica sobre los mecanismos y los actores políticos. Esta intención teórica pone a prueba dos temas, por una parte, la relación entre la formación de la acción colectiva y la participación institucional, y por la otra, el proceso a través del cual se pasa de la acción colectiva a la organización política (ibid: 228-229).

Recuperando la perspectiva de sistema político, propio de la sociología política, una propuesta desde la perspectiva del paradigma de la movilización de recursos, es aquella que centra su atención al problema de las interacciones entre movimiento social y sistema político, generando el modelo de *procesos políticos* (Tilly, 1995 y 1998 y McAdam, 1998), cuyas premisas hacen referencia al reconocimiento de que el conflicto político y el cambio social se influyen mutuamente. En esta propuesta destacan la recuperación del enfoque del “nuevo institucionalismo” y las variables de la llamada “estructura de oportunidades políticas”. Este último concepto se revela entonces como un complemento al arsenal analítico de los estudiosos de los movimientos sociales

Los defensores del modelo de *procesos políticos* vieron el ritmo y el destino de los movimientos como dependientes en gran medida de las oportunidades ofrecidas por la cambiante estructura institucional y la disposición ideológica de los detentadores del poder. McAdam afirma que, en un esfuerzo por traer más claridad analítica al concepto, autores como Brockett (1991); Kriesi (1992); Dieter Rucht (1996) y Sydney Tarrow (1994), han buscado especificar lo que consideran las dimensiones relevantes de la “estructura de oportunidades políticas” de un determinado sistema. Los cuatro autores, señala, han buscado diferenciar la estructura institucional o legal formal de un determinado sistema político de la estructura más

informal de relaciones de poder que caracterizan al sistema en un momento dado, resultando una lista consensuada de las dimensiones de la oportunidad política: la apertura o cierre relativos del sistema político institucionalizado; la estabilidad o inestabilidad de ese grupo amplio de alineamientos de la elite que típicamente subyacen a la política; la presencia o ausencia de elites aliadas y la capacidad y la propensión del Estado a la represión.

La primera dimensión enfatiza la importancia atribuida a la estructura legal, formal e institucional de un determinado sistema político por parte de todos los autores. De igual manera, los puntos dos y tres se refieren a la importancia concedida por los mismos, a la estructura informal de relaciones de poder característico de un determinado sistema (McAdam, 1998:94). El autor reconoce que la mayoría de los estudiosos de los movimientos consideran a éstos una poderosa fuerza para el cambio en la sociedad, pero que no ha sido importante la contribución para evaluar el efecto de pasados movimientos sobre las diversas dimensiones de las oportunidades políticas.

McAdam, consciente del atractivo de este concepto y de la necesidad de clarificar la naturaleza conceptual de éste y sus límites, propone restringirlo a factores políticos propiamente; especificar las dimensiones de la “estructura de oportunidades políticas” de un determinado sistema; y, especificar la variable dependiente relevante³.

³ Para McAdam, por ejemplo, los tipos de cambios estructurales y cambios de poder que de manera más clara son concebidos como oportunidades políticas no deben confundirse con los procesos colectivos por medio de los cuales son estos cambios interpretados y enmarcados (ibid: 92). La estructura de oportunidades políticas hace referencia no sólo a dimensiones y factores formales, de continuidad y territorialmente definidos, sino también a las dimensiones y factores informales en términos de espacio y tiempo. Se diferencia así, la estructura institucional o legal formal de un determinado sistema político de la estructura más informal de relaciones de poder que caracterizan al sistema en un momento dado (ibid: 93). Los cambios en una determinada estructura de oportunidades políticas que favorecen o afectan la acción de un movimiento, son así, sistémicos, relacionales y temporales. En lo que se refiere a la variable dependiente relevante, es enfático al señalar que se debe ser explícito acerca de qué variable dependiente buscamos explicar y qué dimensiones de la oportunidad política están relacionadas con tal explicación. El autor identifica dos variables

1.3 Las dimensiones del conflicto y el cambio en los movimientos sociales.

En las sociedades latinoamericanas las dimensiones del conflicto, que entrañan el problema del poder político y social, están estructuradas al menos en tres proyectos que definen las orientaciones del cambio social: el conflicto clasista, el conflicto en torno a los derechos de ciudadanía, y el conflicto en torno a los derechos de las identidades restringidas, que pueden o no estar articuladas a los derechos de ciudadanía. Estos conflictos, como la expresión más acabada de la acción social y de la participación política, son los referentes básicos de los viejos y nuevos movimientos sociales.

Siguiendo a Gledhill (2000:291) debe reconocerse que las teorías que encaran el análisis de los nuevos movimientos sociales, como expresión de la relación entre acción colectiva y sociedad civil, son propias del pensamiento social de los países desarrollados, tienen su nicho en el pensamiento post-estructuralista europeo, y entre sus impulsores destacan, Touraine (1986 [1984] y 1997) y Melucci (1995). A este respecto reconoce que los nuevos movimientos sociales en Europa surgen en un período en que los partidos comunistas europeos se erosionan, y la política tradicional basada en las clases se mostró incapaz de cambiar la sociedad. Pronto, la fuente de optimismo político se encontró en la amplia variedad de movimientos independientes que desde el seno de la sociedad civil y los entornos de población marginales, movilizaban a la gente en torno a cuestiones medio ambientales, antinucleares y feministas. Este marco contextual recupera la centralidad que las dimensiones identitarias y culturales juegan en el análisis.

dependientes principales: el desarrollo temporal de la acción colectiva y los resultados de la actividad del movimiento, a la que suma otra variable: *la forma del movimiento* que “aparecería como otra variable que es debida, en parte, a las diferencias en la naturaleza de las oportunidades que ponen los movimientos en funcionamiento” (ibid: 96).

Aunque el pensamiento social latinoamericano ha intentado recuperar estas perspectivas teóricas, es inevitable no reconocer las limitaciones históricas y contextuales de las sociedades y las individualidades periféricas, hecho que se registra en los procesos reales de construcción de un “nosotros”. Los fines de la acción colectiva están aún restringidos a la satisfacción de las necesidades más elementales de reproducción biológica y social, aún cuando ello no niegue el sentido clasista o identitario de los mismos; de igual manera, las posibilidades y limitaciones en las que se desarrolla la acción colectiva, hacen referencia al peso omniabarcativo de la institución estatal, que históricamente gestó y desarrolló sociedades estado-céntricas, es decir, nuestras sociedades y sus sectores mayoritarios, son aún organizativa y culturalmente débiles y dependientes del Estado y sus instituciones. Las posibilidades están dadas ahora, no por las potencialidades reales de la sociedad civil, sino por la crisis de los Estados, los procesos de globalización y el impulso de la democracia representativa como el sistema de gobierno hegemónico del mundo (Zermeño, 1996).

Con todo, como señala Calderón, las sociedades latinoamericanas son extremadamente complejas, en tanto que los movimientos sociales como expresión de la acción colectiva son, a final de cuentas, las expresiones de una “particular yuxtaposición de diferentes tiempos socioculturales”. El pasado no muere pero se recompone; igual ocurre con la modernización o lo “posmoderno” que vienen de fuera. Se internalizan a trozos en el comportamiento de las individualidades y colectividades, no las matan pero no lo incorporan a sus cotidianidades privada o colectiva tal cual. Por ello, señala nuestro autor, las acciones sociales están cargadas ellas mismas de una diversidad mutante de sentidos. Esta dinámica de yuxtaposiciones, pero también de continuidades y de cambios, se explica por una situación económica y material cuyos rasgos básicos son la escasez de los recursos materiales y la lucha abierta por el control de los mismos. Por ello, en los países periféricos:

Los sistemas de conflicto y oposición no son duales ni permanentes, pues están adscritos a diversas formas de dominio y los mismos impulsos hacia el cambio político, la transformación social y el desarrollo económico, muy a menudo obedecen a historicidades distintas pero yuxtapuestas. Posiblemente por esto, cuando los antropólogos estudian historias de vida se encuentran con individuos, familias o grupos que no tienen rutinas preestablecidas. La sociedad y sus actores se están haciendo y rehaciendo constantemente (Calderón 1987: 117).

Sí, la sociedad y sus actores se están haciendo y rehaciendo constantemente pero, como señala Melucci, la acción colectiva está definida por el alcance de los medios y su contexto sociohistórico. En este sentido su estudio si bien no debe enfocarse de manera exclusiva al análisis de la estructura y la racionalidad que ésta entraña, tampoco debe enfocarse al actor y sus proyectos de liberación cultural en sí mismo, despojados de un marco histórico y contextual. El equilibrio analítico de las dimensiones sociales materiales y subjetivas, es una exigencia. Como señala el propio Calderón, recuperar analíticamente el complejo de las relaciones sociales y sus mutuas interacciones, para poder establecer las capacidades de la acción de la sociedad sobre sí misma, es una tarea compleja.

En los movimientos nacional y popular sustentados en los proyectos de modernización, industrialización y en la autonomía nacional, era posible identificar el carácter del conflicto social y particularmente el de las relaciones de la sociedad con el Estado. Esta claridad ya no lo es tanto en una sociedad que no sólo atraviesa crisis recurrentes en el ámbito material y cultural, sino también que ha vivido la erosión de un Estado que no cumplió con la tarea esencial de garantizar el despliegue, en espacio y contenido, de los derechos básicos de la sociedad; estos rezagos de índole material no se resolverán con el hecho de anunciar el retiro del Estado para dar libertad a los ciudadanos o a una sociedad civil que exige no ser tratada como menor de edad. Las tensiones mayores que hoy enfrentan los movimientos sociales en América Latina y en particular en México y Chiapas, es ciertamente esta yuxtaposición de tiempos culturales.

El movimiento creado por el EZLN es quizás el ejemplo más drástico de lo que menciono, en tanto coexisten distintas aspiraciones, pero están también los movimientos que hoy se generan en diversas regiones de la entidad, con mujeres que aspiran a ser tratadas con equidad pero que, ante el asombro de integrantes de organismos no gubernamentales o funcionarios públicos que son responsables de algún organismo *ad hoc*, exigen antes que el “curso sobre los derechos de género”, la despensa de alimentos, la entrega de algunos utensilios para la casa, o lo más esencial de su hábitat, los servicios: luz, agua potable, drenaje, transporte, una clínica, un centro educativo. Otro ejemplo es el de la población indígena asentada en las periferias de la ciudad por diferentes circunstancias (expulsión de sus lugares de origen por disidencia política o intolerancia religiosa, migración hacia la ciudad), que si bien tiene como “capital político” precisamente el hecho de ser indígena y al cual debe corresponder el derecho a su diferencia cultural, política o religiosa, se registra que sus demandas visibles e inmediatas se dan en torno a los recursos escasos: terrenos para establecer sus viviendas y los servicios. Las organizaciones creadas por estos grupos y las movilizaciones sociopolíticas que emprenden tienen el propósito de satisfacer estas demandas, aunque ello signifique entrar a las redes corporativas y clientelares, que implica la adscripción política, o negociar el voto en tiempos electorales con los partidos políticos y las propias instituciones gubernamentales.

Se habla hoy de la crisis de los modelos de industrialización y del sistema cultural que estos entrañan, pero en el caso de Chiapas, y en Comitán, espacio local de esta investigación, no puede haber una crisis de lo que nunca existió. Es cierto que la sociedad chiapaneca no está al margen de las crisis que ocurren en el entorno nacional, tampoco de las transformaciones sufridas por la sociedad y el Estado. Pero si intentamos analizar el campo de la acción social de los propios sujetos y actores para entender el sentido de estas transformaciones, el reto será definir y comprender los mecanismos que posibilitan el paso de la acción social a formas de participación

política, entendiendo además los vínculos que articulan lo viejo y lo nuevo de los movimientos sociales.

Este breve recuento teórico e histórico del estado de la cuestión, tiene la intención de trazar *grosso modo* una propuesta más modesta sobre los supuestos teóricos y metodológicos que sustentan el análisis de la presente tesis. El punto de partida es el reconocimiento del conflicto como la dimensión que define y modula el tránsito de la acción colectiva a formas definidas de participación política. Los sistemas de conflicto y oposición, como señala Calderón, no son duales ni permanentes, están adscritos a diversas formas de dominio y sus impulsos al cambio político pueden estar definidas por historicidades diversas y yuxtapuestas. Los movimientos sociales, en sus distintas vertientes y mutaciones, son las expresiones manifiestas de las tensiones que producen estas yuxtaposiciones. En su expresión popular, desafían el orden existente de la sociedad y sus instituciones, pero también apelan a ellas y luchan no sólo por una mayor distribución de la riqueza nacional que le permita superar sus condiciones de marginación y pobreza, sino también por abrir canales de participación democráticos; en su expresión actual, a los movimientos sociales o populares se incorporan las dimensiones culturales que definen las prácticas sociales y se erosionan las dimensiones de la lucha clasista.

Siguiendo el vector del conflicto social, me suscribo al planteamiento de Melucci, en el sentido de que el desarrollo, la negociación, la administración o la resolución del mismo, operan en primera instancia en los marcos disponibles por la organización política, es decir, instituciones que regulan la competencia política y permiten al sistema producir decisiones (Melucci, 1995:225). En otros términos, los movimientos sociales, como expresiones de la acción social y política, encaran la relación con el poder estatal a través de dos sistemas tradicionales de representación formalmente instituidos. En efecto, propio de la sociedad capitalista liberal, la participación política tiene lugar bajo el marco de la representación política

democrática, cuya centralidad lo ocupan los partidos políticos; también, en el de la representación de intereses, formalizada en los organismos corporativos. Un tercer modelo de representación no instituido formalmente, pero de gran peso en la vida pública de la sociedad actual, es la representación territorial, que alude a una forma de representación autónoma que desafía el modelo tradicional de organización política.

El primer modelo de competencia política y de participación en la toma de decisiones públicas, la representación democrática, es definido como un sistema institucionalizado de responsabilidad política, como un conjunto de relaciones de representación instaladas entre los representantes y sus circunscripciones electorales, pero cuya complejización contemporánea terminan definiéndola como un proceso más complejo e interdependiente con el sistema político en su conjunto (Cotta, 1988). Tiene su concreción en los procedimientos electorales, que define a la elección competitiva como el método esencial con respecto a la participación directa, y se sustenta en una compleja estructura institucional (sistema electoral, partidos políticos, sistema de partidos)⁴.

El carácter estratégico de los partidos políticos deriva, según Bobbio, en que son quienes reciben de los electores una “autorización” para actuar. Son los partidos quienes se interponen entre el cuerpo electoral y el Parlamento, desplazando así la relación directa entre electores y elegidos, creando dos relaciones distintas: entre los electores y el partido y entre el partido y los elegidos. El partido es actor respecto al elector y autor respecto al elegido (Bobbio, 1996: 291 - 292). Los sistemas de partido, que hacen referencia a las formas y las modalidades de coexistencia de varios partidos en un mismo país (Duverger, 1992), se clasifican en función de criterios

⁴ “El mecanismo del que brota la representación es un proceso “grande” de competición entre las organizaciones partidistas por la conquista o la conservación de las sedes parlamentarias y gubernativas, una competición reglamentada y que se desarrolla frente a un público en función de juez” (Cotta, 1988: 1431)

como: número de partidos, tamaño, distancia ideológica, pautas de interacción, grados de polarización, entre otros. Se habla así de sistemas bipartidistas, multipartidistas, pluripartidista, y de sistema de partido único, de partido hegemónico, de partido dominantes, bipartidista, pluralista moderado y pluralista polarizado.

El sistema de representación de intereses, es el otro modelo tradicional de participación política que, aunque contrario a la representación política democrática, define también los términos de la competencia política y la toma de decisiones. De acuerdo a Norberto Bobbio, la vigencia de la representación de intereses, obedece a la formación y al constante crecimiento de los partidos políticos. En la relación partido-electores, el mandato libre perdió parte de su eficacia a causa de la irrupción de los intereses particulares de todo partido, en un sistema de mercado político competitivo y cada vez más fragmentado. El partido se ve obligado a acrecentar su poder, que depende del mayor o menor número de votos, de ahí la presión de los intereses particulares en los partidos (Bobbio, 1996:291-293). La representación de intereses tiene su expresión fáctica en las organizaciones corporativas. En la definición de Schmitter:

El corporativismo puede ser definido como un sistema particular moderno de representación de intereses en el cual las unidades constitutivas se organizan en un número limitado de categorías singulares, compulsorias, no recurrentes, ordenadas jerárquicamente y diferenciadas funcionalmente, reconocidas y autorizadas (si no es que creadas) por el Estado, y a las que se les concede un explícito monopolio de la representación dentro de sus respectivas categorías a cambio de observar ciertos controles en la selección de sus líderes y en la articulación de sus demandas”(Schmitter, 1992: 46).

En el marco de este modelo, el término de “representación” es desplazado o suplantado por la noción de “intermediación”, porque permite incluir dentro del análisis “la inducción de los miembros a los intereses que las asociaciones “deben tener”, así como la capacidad de las asociaciones de transformarse en elementos de

presión en la instrumentación de la política gubernamental. –a través de la concertación con el Estado”. Es decir:

[...] la intermediación connota, por un lado, la función por medio de la cual los miembros de las asociaciones transfieren, agregan y articulan sus intereses con los cuerpos de decisiones de las asociaciones (representación); por otro lado, constituye la función por medio de la cual los intereses son enseñados, transmitidos e impuestos por las asociaciones a sus miembros (control social) (Schmitter, 1982: 295, citado por Ocampo, 1992: 11).

Señala Ocampo, compilador de la obra de Schmitter, que las categorías “unidades constitutivas” y “número limitado”, sostienen la idea de que la representación no es necesariamente monopolio de una asociación, pero la representatividad sí se limita a las asociaciones de grupos de interés y deja de lado la posibilidad de representaciones individuales. En este marco, la noción de “obligatorias” intenta incrementar la fuerza colectiva de las asociaciones y protegerlas de la actividad de agentes libres (acciones individuales). “No competitivas” y “ordenadas jerárquicamente”, son dimensiones del modelo que tienen que ver con la posibilidad de concertación que tienen las asociaciones para participar en la determinación de políticas públicas (Ocampo, 1992: 12). Finalmente, “reconocimiento y legalización por el Estado”, es una dimensión que hace referencia al reconocimiento como una necesidad política del Estado, pero también como condición para asegurar la continuidad de la formación y operación de las asociaciones. La idea de un Estado-reconocedor de las “asociaciones” de grupos de interés es la base para entender el doble intercambio de influencias del modelo neocorporatista o corporatista. Es decir, del Estado hacia las asociaciones, a través del reconocimiento del monopolio representativo y de la instrumentación de mecanismos de control en la selección de dirigentes y en la articulación de peticiones de ayudas, y de las asociaciones hacia el Estado, a través del control del comportamiento y conducta de los miembros y de la aceptación de la coordinación del Estado en la formulación de las política de gobierno (Ocampo, 1992: 12 y 13).

El modelo de la representación de intereses se expresa en dos tipos de corporativismos: el social (asociabilidad) propio de sistemas políticos caracterizados por “unidades territoriales relativamente autónomas y polivalentes, por procesos electorales y sistemas de partidos políticos abiertos y competitivos; por diversidades ideológicas en las coaliciones de las autoridades ejecutivas”; y, el estatal, asociado con “sistemas políticos en los cuales las sub-unidades territoriales están fuertemente ligadas a poderes burocráticos centralizados; las elecciones son inexistentes o plebiscitarias; el sistema de partidos políticos está dominado o monopolizado por un débil partido único; las autoridades del poder son ideológicamente restrictivas y con un cerrado proceso de reclutamiento, tanto que reprimen subculturas políticas basadas en condiciones de clase, etnicidad, lengua o regionalismo” (Ocampo, 1992: 12).

Como señala Ocampo, el modelo de la representación de intereses, manifiesto en el corporativismo estatal, ha sido privativo del Estado y la sociedad mexicana, no obstante que, como el modelo de la representación política democrática, no detenta la exclusividad, sí es perceptible su carácter hegemónico en momentos definitorios de la historia política y social del país.

La representación territorial nos coloca en el modelo que viene siendo privativo para el análisis de los llamados nuevos movimientos sociales en las sociedades complejas. Está demarcada por dos orientaciones: aquella que privilegia el campo de la sociedad civil y exige el desarrollo de las democracias adjetivadas, con planteamientos que definen la incorporación de los derechos de las diferencias al marco normativo o legal democrático, y aquella que, bajo un sustento radical, se opone a los formatos tradicionales de representación política y a las expresiones económicas de la globalización. Su emergencia, responde, de acuerdo a los analistas, al deterioro progresivo de los actores políticos tradicionales, particularmente los partidos políticos, los sindicatos y las organizaciones corporativas en su dimensión civil o estatal.

Estos movimientos por la territorialidad son definidos como nuevos movimientos sociales, cuyos actores emergentes construyen un nuevo formato de acción social, sustentado en las dimensiones culturales, generando una “nueva política”. De acuerdo a Claus Offe, las cuestiones que se politizan no pueden ser fácilmente “codificadas” con el código binario (público y privado) del universo de la acción social que subyace a la teoría liberal. Reivindican para sí mismos un tipo de contenido que son:

los resultados y los efectos colaterales colectivamente <relevantes> de actuaciones privadas o político-institucionales o legales disponibles a sus actores. El campo de acción de los nuevos movimientos es un espacio de política no institucional, cuya existencia no está prevista en las doctrinas ni en la práctica de la democracia liberal y del Estado de bienestar (Offe, 1988: 174).

El elemento central que define a los nuevos movimientos sociales es su naturaleza política, esto es, a diferencia de los viejos movimientos sociales que participan en formatos ya establecidos, definidos desde fuera, los nuevos movimientos exigen el reconocimiento legítimo de sus medios de acción y que sus objetivos de acción sean asumidos por la comunidad más amplia. A este respecto, Offe señala:

[...] pueden definirse los nuevos movimientos sociales políticamente relevantes como los movimientos que reivindican ser reconocidos como actores políticos por la comunidad más amplia –aunque sus formas de acción no disfruten de una legitimación conferida por instituciones sociales establecidas-, y que apuntan a objetivos cuya consecuencia tendría efectos que afectarían la sociedad en su conjunto más que al mismo grupo solamente (Offe, 1988: 176).

En suma, los elementos que caracterizan a los nuevos movimientos sociales son: como contenido dominante, figura el *interés por un territorio* (físico), un espacio de actividades o “mundos de vida”; los valores más importantes son la *autonomía* y la *identidad*; los modos de actuar que, en lo interno, rompen con las reglas de una organización formal en tanto no hay un principio organizado de diferenciación ni una

dimensión horizontal ni vertical, en lo externo, asumen las tácticas de las manifestaciones y acciones que recurren a la presencia física de la gente. El grupo de actores movilizados se conciben asimismo como una alianza de veto, *ad hoc* y a menudo monotemática. Finalmente, sus exigencias son de principios, por tanto, no son negociables (Offe, 1988: 178-179).

La estructura de oportunidades políticas que abre el sistema político moderno a la acción colectiva estaría marcada por las dos primeras formas de representación, y si bien en algún momento de la historia de la sociedad moderna una asume el carácter hegemónico, no significa necesariamente la cancelación de la otra. Sin embargo, como señalan McAdam (1998), debe registrarse el hecho de que paralelo a la estructura institucional de un determinado sistema político, existen también estructuras más informales de relaciones de poder que ofrece un campo de oportunidades políticas, enfatizando la necesidad analítica de sus diferencias.

Este último planteamiento es importante cuando analizamos las relaciones de poder entre la sociedad y el Estado de las sociedades periféricas, particularmente las relaciones entre la acción de los movimientos y el sistema político. En el caso del sistema político mexicano, las dimensiones metaconstitucionales que entraña dicha relación, crea prácticamente un sistema de oportunidades políticas fuera de los marcos formalmente instituidos o dentro de éstos pero distorsionando las normativas institucionales de los mismos. Debemos reconocer que los espacios más propicios para esta trama de relaciones entre la sociedad y el poder político, son indudablemente las entidades federativas periféricas, sus regiones, municipios y localidades. Ello significa que el análisis de la acción colectiva y las formas de participación política en el espacio local debe reconocer las múltiples mediaciones que encaran las fórmulas teóricas y prácticas en la construcción y reconstrucción de las relaciones entre el poder político y la sociedad.

CAPÍTULO II

FORMACIÓN HISTÓRICA Y CONTEMPORÁNEA DEL MUNICIPIO DE COMITÁN: SOCIEDAD, POLÍTICA Y VIDA COTIDIANA.

2.1. Forjando Patria. La construcción histórica de las identidades políticas y sociales en Comitán

Para recuperar el sentido de la Conquista, la historia regional registra que hasta el periodo posclásico maya, el poblado donde hoy se asienta la ciudad de Comitán se llamaba Balún Canán, “nueve estrellas”. Entre 1492 y 1498 cambia al nombre de Comitlán, “lugar de alfareros”, pues sus moradores se especializaban en la fabricación de utensilios de barro. Con la Conquista, Comitán se definió como pueblo de indios y se convirtió, en el lenguaje militar, en una “base” para los conquistadores, cuya misión era extender su dominio a las áreas tojolabal y tzeltal (Alfonzo, 1996 [1978]).

La historia de los primeros españoles que llegaron a Comitán a partir del siglo XVII, es una historia de conquista, con anterioridad éstos habían residido en Ciudad Real, pero llegaron a Comitán ante las facilidades de las leyes de “composición”⁵, y la existencia de mejores tierras y mayores posibilidades de establecer grandes estancias de ganado y sembradíos. Así llegaron los Gordillo, Farfán, Alfaro, Gómez Coronado, Villatoro, Guillén, Argüello, Solórzano, entre otros.

⁵ Urgida de dinero e incapaz de terminar con la posesión ilegal, la monarquía había optado, desde 1591, por permitir a sus vasallos pagar para legalizar la ocupación indebida de tierra realenga, mecanismo conocido como “composición”. Posteriormente se reguló por reales cédulas y acabó por ser de lo más común, pues la posibilidad de “componerse” más tarde acrecentó las usurpaciones. En 1692 se incluyó a la iglesia entre los sujetos de “composición” y a partir de 1735, época durante la cual ya se perfila el regalismo borbónico, se intensificó la investigación de los terrenos en manos de los indios, la iglesia y las asociaciones (civiles o religiosas), y se obligó a las comunidades que no poseían títulos previos, a pagar por “componer” sus propiedades (Ruz, 1992: 54 - 55).

Como una expresión del cambio en las relaciones sociales, para el siglo XVIII los nativos “tojolabales”⁶ no sólo habían dejado de ser considerados vecinos de Comitán; sus tierras comunales se habían reducido de manera dramática, en contraste con las fincas privadas y eclesiales que fueron en aumento. El endeudamiento, por el pago de tributo, los fue convirtiendo en sirvientes y mozos de las casas y fincas. Sin embargo, jurídicamente, Comitán, seguía siendo pueblo de indios y los miembros del cabildo comiteco seguían siendo tojolabales (Coneculta, 1999). Los indios que aún se encontraban en la cabecera del departamento se veían numéricamente avasallados por el universo de mestizos que derivó del encuentro entre los nativos y los conquistadores, una tercera república cuyos actores dominantes, los mestizos, se habían ido apoderando de espacios y funciones de gobierno (Ruz, 1992).

En el crepúsculo de la Colonia, Comitán había dejado de ser considerado un pueblo indio e ingresaría al periodo independiente estrenando su título de Ciudad, otorgado por las Cortes de Cádiz en 1813, a la que llamaron Santa María de Comitán (Ruz, 1992). Además, la carta política de Cádiz promulgada el 19 de marzo de 1812, logró superar las antiguas diferencias legales entre españoles, negros, mulatos, castas e indígenas, declarando a todos los ciudadanos españoles y con derechos iguales, en particular, el derecho de votar o ser votado en las elecciones municipales, aunque éstas en adelante se hicieron en forma indirecta. Sin embargo, el ejercicio de estos derechos se suspendía “por el estado de deudor quebrado” o “por estado de sirviente doméstico”, precisamente, las dos situaciones en que se encontraban los comitecos tojolabales (Coneculta, 1999).

Cuando a fines de 1820 la audiencia de Guatemala exigió elegir los ayuntamientos conforme a la Constitución, los ladinos finalmente pudieron

⁶ Gudrun Lenkersdorf (1986: 13) sostiene que el grupo tojolabal vivió en la misma región durante toda la época colonial; hipótesis que implica que los términos coxoh, chanabal y tojolabal, que se han aplicado durante varios siglos a los habitantes de la zona, se refieren a la misma etnia.

apropiarse de la representación política de Comitán. El 21 de febrero de 1821, la audiencia de Guatemala ordenó al intendente de Ciudad Real que procediese de inmediato a disolver el cabildo de indios y quedó sólo el Ayuntamiento Constitucional, mismo que impulsó, junto con el fraile dominico Matías de Córdova, la independencia de España. Para el siglo XIX los comitecos hicieron suyas las ideas de progreso y “liberalismo”. Con las leyes de reforma la orden de los dominicos fue expulsada y sus fincas vendidas, los últimos reductos de la propiedad comunal de Comitán también. Los sirvientes, luego “baldíos”,⁷ trabajaban los campos y alimentaban a Comitán⁸ (Ruz, 1992; Coneculta, 1999).

La expulsión de las órdenes religiosas, ocurrida en 1859, y la incautación de sus bienes, vinieron a modificar la estructura agraria. A ello, se sumó el desahogo que significó para los terratenientes civiles el librarse, en gran medida, del pago de los réditos cada vez más crecidos que entregaban a las instituciones religiosas con las cuales se hallaban endeudados. Las leyes de desamortización que afectaban a las corporaciones eclesiales, beneficiaron también a los civiles, pues con el pretexto falso de tratarse de bienes de la iglesia, se adueñaron aquellos de las cofradías, instituciones que además de coadyuvar en la organización social, habían servido

⁷La voz “baldío” fue en un principio sinónimo de vagabundo como de inútil, íntimamente emparentada con el término “vago”, utilizada así a principios del S. XIX.... cuarenta años después el término había experimentado un radical giro semántico, nombrando exactamente lo contrario: indios que desposeídos de tierras por las arbitrarias leyes chiapanecas de 1847, se vieron obligados a vivir permanentemente en las fincas, como baldíos, entregando su trabajo a los patrones por un jornal miserable, por eso en la memoria tojolabal el término tiende sus raíces, más que hacia aquellos antiguos jornaleros que iban de hacienda en hacienda empleándose como mano de obra temporal, a la idea de que se era baldío porque se trabajaba “de balde” (Ruz, 1992: 348 y 352).

⁸Según Ruz (1992:17), el “baldío” se refiere a la época de servidumbre cuando los antiguos señores de la tierra fueron desposeídos no solo del señorío sino de la tierra misma. La memoria oral parece circunscribir dicho período a las últimas décadas del S. XIX y las primeras del S. XX, los documentos de archivo dan testimonio de una extensión temporal mucho mayor pues los antecedentes primarios del despojo y el sometimiento pueden rastrearse sin dificultad hasta el S. XVI, aunque su consolidación definitiva deba acaso situarse en las últimas décadas del S. XVIII cuando se acentúa el regalismo borbónico y sobre todo, en plena época decimonónica, cuando la naciente república mexicana privó a los pueblos indios del status jurídico particular en el cual los colocaba la legislación colonial.

muchas veces a los pueblos indígenas como eficaz barrera para resguardar sus propiedades de la codicia ladina, civil o eclesiástica (Ruz, 1992:137 y 143).

En 1873, mientras el Congreso estatal debatía si los ejidos de los pueblos indios debían declararse o no denunciados, los miembros de la élite local continuaban apoderándose de las tierras comitecas, que denunciaban como “baldías”. En esta empresa destacan familias pioneras cuyos apellidos son aún importantes en la Ciudad de Comitán: Castellanos, Culebro Argüello, Rovelo, Quirino Domínguez, Alfonso Pinto y el entonces gobernador José Pantaleón Domínguez. Entre 1876 y 1880 los Castellanos y otros continuaron “denunciando” las “demasías” de la zona. Desde 1870 el gobierno federal había insistido en la supresión de las tierras colectivas: “los ejidos indios debían ser parcelados y adjudicados en plena propiedad a sus antiguos usufructuarios”. Pero en Chiapas, por presiones de los latifundistas de San Cristóbal, encabezados por Manuel Pineda, el 9 de abril de 1893 se “completó” dicha ley con otro decreto: en lugar de distribuirse entre los derechohabientes indígenas, los ejidos serían “adjudicados y vendidos al mejor postor en subasta pública”. Así, el despojo tuvo abierta la puerta hasta los últimos reductos indios (Ruz, 1992: 150-152).

El despojo del antiguo centro rector de los tojolabales, significó su desplazamiento a las áreas periféricas, cinturón indio que comenzaba en los barrios marginales de la centenaria Balún Canán, para continuar en algunos poblados circunvecinos y, sobre todo, en la constelación de fincas y algunas “milperías” que articulaban el espacio regional (Ruz, 1992). Comitán era entonces una vasta región, misma que hoy ocupan los municipios de Las Margaritas, La Trinitaria, Tzimol, en donde florecieron varias fincas que fueron de gran importancia, dedicadas a la agricultura y a la ganadería, entre las que destacan: Santo Tomás, El Retiro, Guadalupe, San Joaquín, la Floresta, Rosario Bajá, El Quis, la Soledad, Bajucú y El Vergel, todas ellas en lo que hoy es el municipio de Las Margaritas, y las fincas de

Sacchaná, Campumá, Santo Tomás, El Rincón, Juncaná y Santa María, en el municipio de La Trinitaria (Coneculta, 1999:91).

Hasta el porfiriato, la sociedad local la formaban un reducidísimo grupo de españoles y criollos, un sector amplio de mestizos o ladinos y una población indígena de habla tojolabal mayoritaria. Esta diferenciación racial, diluida formalmente por el principio de ciudadanía del marco político-jurídico liberal, estructuró por largo tiempo a la sociedad civil y sus mínimas expresiones de acción colectiva y de participación política. La organización social y normativa de los indígenas tojolabales distaba, desde el periodo colonial, de contar con estructuras sociales y espacios autónomos. Sus espacios vitales y normativos y el marco de relaciones con los diferentes, mestizos y ladinos, estaban íntimamente modulados por las leyes, los valores y las costumbres del orden colonial, primero, y porfirista después.

La colonia, la etapa liberal y la porfirista, modularon en ese orden, un paisaje que definió a una ciudad estructurada socialmente por una forma específica de dominio de larga duración, la de las oligarquías provincianas, que sin embargo, lentamente se transformaba del modelo original. Puede decirse que muchos de los rasgos materiales, pero sobre todo, subjetivos, de la forma oligárquica de dominio, persistieron, aunque evidentemente sufrió transformaciones en el tránsito del período colonial al período independiente, hasta culminar en el porfiriato. Idealmente podemos establecer una imagen del paisaje de Comitán y su estructura social y cultural que cambia, pero que pareciera que no lo hace.

Como ciudad provinciana, Comitán fue estructurando su espacio urbano en estrecha relación con su estructura social: en el centro, la clase privilegiada; en su entorno inmediato, un reducidísimo sector medio sometido a las reglas y valores de la primera, aunque presionando hacia la escala superior, no siempre posible. En la periferia, las clases pobres, formadas por trabajadores de las casas y de las fincas de

la clase dominante. Las subjetividades de esa sociedad “tradicional” estaban marcadas por la definición del espacio y la diferencia cuyos elementos eran la síntesis de una larga historia social.

En ese sentido, recordemos que desde la fundación de Comitán, surgieron los barrios con sus respectivas iglesias, los llamados “originales”: San Sebastián (1535), Santo Domingo de Guzmán (1678), ubicado en el centro histórico, Jesusito (1793), El Calvario (1832), San Caralampio o “La Pila” (1852); y Yalchivol, la Cruz Grande, San José y Guadalupe, fueron fundados ya entrado el siglo XIX (Ramos, 2000). Desde el siglo XIX la ciudad había comenzado a crecer y abundaron los oficios en los diversos barrios y en las escuelas se enseñaba castellano a los niños (Coneculta, 1999). La platería y la sombrerería a base de palma se trabajaba en San Sebastián; rumbo a San Sebastián y la iglesia de “Jesusito” continúan aún los establecimientos de quienes se dedican a la talabartería: hacen productos de cuero, como cinturones, morrales, etc. De las curtidorías en el barrio de “los sabinos” y en la ranchería “Los riegos” salían las pieles para los trabajos de talabartería; en San Sebastián y La Pila se hacían fustes para las monturas; en Yalchivol, tejas y ladrillos a base de barro; en el barrio La Pila, San Sebastián y Yalchivol se podían encontrar los hojalateros y los sastres. Los carpinteros, albañiles y fabricantes de papel picado estaban por toda la ciudad.

La distribución de aguardiente se llevaba a cabo por toda la ciudad y de ahí a todo el estado y más allá de éste (Coneculta, 1999). En los barrios se realizaban celebraciones, como rezos, “entradas de flores” para festejar a una virgen o a un determinado santo, y las ferias, mismas que aún persisten, aunque con ciertas variaciones.

Al paso del tiempo todo se transforma, hasta los años setenta las calles aún eran empedradas o de tierra, las casas eran construidas con madera, adobe, piedra o

lodo, los techos con tejas de barro, cada una con sus respectivo huerto o “sitio”, las aceras o banquetas de laja.

Señala Ramos que Comitán es “la ciudad que la necesidad de agua condenó a treparse por laderas empinadas en lugar de ocupar los vastos llanos vecinos. [...] los llanos comitecos se abren con una amplitud solamente interrumpida por algunas colinas cónicas y beneficiados por un clima moderado. Varias pequeñas depresiones los salpican formando ciénagas y lagunas temporales y la vegetación ha cedido paso a los cultivos” (2004:42). La topografía de la ciudad y el carácter estratégico del agua, líquido vital para los comitecos que ocupaban el centro, fue definitivo en la estructuración de una de las actividades adscritas a los pobladores de la periferia: la venta de barriles de agua, transportada por animales de carga y entregados prácticamente casa por casa (en la localidad quienes se dedicaban a esta actividad eran conocidos como “burreros”). Ello ocurrió con prácticamente otros productos de consumo doméstico, como la leña, el carbón y los productos agrícolas y pecuarios, aunque estos últimos, además de ser ofrecidos casa por casa, eran ofertados en los pequeños mercados.

Este orden provinciano de la sociedad local, reforzado por la relativa ausencia de marcos de referencia sociopolíticos y culturales más allá del entorno inmediato, tuvo su correlato con el sistema de dominio que se ha definido como oligárquico. Hasta el porfiriato, fue visible, como en las distintas regiones del país, el registro de una clase privilegiada que indistintamente participaba en el aparato político y en la economía, dotándose así de un amplio poder para definir u orientar al conjunto de las áreas estratégicas en la vida de la ciudad, el municipio, e incluso en la del estado de Chiapas⁹.

⁹ Francisco Suárez Farías, haciendo referencia al periodo del porfiriato y al contexto nacional, habla de una endogamia de clase o de un sistema cerrado de élites intercerradas, definidas como “aquel en el que una misma clase de personas produce líderes en la política, la economía, y el ejército. Esta clase de

Sin embargo, la estructura de las sociedades locales no es impermeable al tiempo, a sus tensiones internas y a las presiones externas. Estas últimas, haciendo referencia al proceso revolucionario, provocaron un cambio drástico en la correlación de fuerzas nacionales, capaz de trastocar el viejo régimen e impulsar un nuevo proyecto de nación, y terminarán también impactando a la sociedad estatal y local.

En efecto, la primera subversión, en los albores del siglo XX, llegó a Chiapas y a Comitán con la Revolución mexicana y trajo consigo una constitución nacional que contenía reformas sociales que exigían cambios radicales, como acabar con la estructura agraria latifundista y el orden social impuesto por ésta. Sin embargo, los cambios no fueron radicales ni inmediatos, sino paulatinos y casi imperceptibles. La instauración de un régimen político fincado en un partido de Estado y un poder ejecutivo fuerte, permitió que el poder del centro entrara en negociaciones políticas con los caudillos y caciques de las entidades federativas y con ello, el impulso que el gobierno federal le dará a la nueva constitución, tendrá ritmos diferenciados en el territorio nacional. El aletargamiento de las reformas sociales tiene ese origen.

Como señala García (2003), aunque en términos prácticos se trató de la subordinación y de la pérdida de autonomía de las fuerzas políticas de las entidades federativas, el margen de poder discrecional dadas a estas fuerzas fue, al menos durante las primeras décadas del México posrevolucionario, bastante amplio como para que los grupos de poder regional modularan los ritmos de las reformas sociales y se recreara, ahora en términos revolucionarios, el sentido patrimonialista del poder político estatal, sin que ello significara la continuidad de autonomía del poder político regional.

personas es típicamente hereditaria, de tal suerte que la familia se convierte en el sistema mayor de transmisión para el reclutamiento de varias élites. [...] la endogamia de clase crea, por un conjunto de actividades heterogéneas de las élites, un grupo defensivo con normas y sanciones conjuntas” (Domhoff, G.W., 1976, citado por Suárez, 1991: 102).

Volviendo a Comitán, y de alguna manera a Chiapas como entidad federativa, los efectos e impactos de la Revolución mexicana, van a provocar un proceso lento de recomposición y acomodo de los grupos de poder local y regional, proceso que por dialéctica de continuidad y cambio relativo, ocultó el hecho real, que fue el cambio en la forma de dominio político. Es ahora el Estado mexicano, a través del gobierno federal, pero sobre todo de su partido político, quien tiene ante sí la responsabilidad de regular las tendencias y también las presiones del cambio social, marcando la dirección del país, pues como señala Arnaldo Córdova (1972), el Estado se convirtió en el principal promotor, si no es que en el único, del desarrollo económico y particularmente social. Ello se dio a través de las disposiciones de los artículos 27 y 123 de la constitución mexicana, que de haberse llevado a cabo en lo inmediato hubiese tenido consecuencias drásticas para los grupos de poder de Chiapas.. El primero, como señala Córdova, constituyó un arma poderosísima para desmantelar el sistema propietario fundamental del porfirismo (Córdova, 1972: 19).

Sin embargo, en Chiapas, en sus regiones y localidades, entre ellas Comitán y su entorno regional, el proyecto nacional de desarrollo surgido de la Revolución no tuvo una traducción práctica inmediata, no al menos en las dimensiones estructurales que exigía el desarrollo económico y social que demandaba la aplicación urgente de las reformas sustantivas de la Constitución nacional. Hasta fines de la década de los sesenta, como lo documentan algunos historiadores (García de León, 1994; Benjamin, 1990), el artículo 27 Constitucional fue aplicado a cuenta gotas, trayendo consigo el mantenimiento y la recreación de las relaciones sociales “tradicionales” aunque, como señala García (2003), después de la primera mitad del S. XX, ya no estamos hablando de la continuidad de la “gran propiedad” como el vértice del conjunto de las relaciones y representaciones sociales como ocurría en el tiempo pre-revolucionario.

La persistencia de propiedades consideradas como latifundios, se explica por varios factores: la concentración de la actividad económica en la agricultura y la ganadería, la debilidad de las relaciones económicas modernas, las exigencias mismas del mercado nacional que signó una división regional del trabajo, y el carácter flexible de la aplicación del 27 constitucional por el propio gobierno federal. Además, en atención a su necesidad de hegemonía en los espacios regionales, en el caso de Chiapas, el gobierno federal va a echar mano de los llamados terrenos nacionales, con amplia flexibilidad pues en ese entonces no se registraba tanto el peso de la presión demográfica sobre el recurso, hecho que también explica la escasa demanda y movilización de los campesinos en torno a la lucha por la tierra. Otros factores que inhibieron la política agraria del gobierno federal, hacen referencia a la distancia geográfica y a la escasa importancia política de la entidad en la construcción del Estado nacional posrevolucionario (García, 2003).

En este juego de cambios en la continuidad, la sociedad local posrevolucionaria poco a poco se fue embarneciendo con los tintes modernos impulsados por el Estado posrevolucionario; su estructura social, si bien registraba a una sociedad civil todavía atada a relaciones, valores y percepciones de un orden “tradicional”, lentamente empieza a sufrir una metamorfosis nucleada cada vez más por el Estado mexicano y sus instituciones. Es evidente que la forma hegemónica de dominio político, es un proceso mediado por las instancias de gobierno y del sistema de instituciones, pero el rasgo distintivo, es la mediación del partido oficial, que terminará por modular una sociedad definida por Zermeño (1994) como “estado-céntrica”, en la medida en que las iniciativas de organización social se supeditan a los aparatos corporativos del partido.

En el marco del municipio y la ciudad de Comitán, Escalante (1991), apunta en el mismo sentido, que es en los años cuarenta del S. XX cuando se marcan desde el centro las reglas del juego político, mismas que se irán asimilando por las

sociedades regionales y locales, en particular por la clase que había sido privilegiada. Se aceptó así la vía de la organización corporativa propuesta por el Estado: la afiliación al partido oficial y a sus brazos corporativos, la Confederación Nacional Campesina (CNC), la Central de Trabajadores Mexicanos (CTM) y la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP).

El paisaje y la estructura social de Comitán en las décadas de los años cuarenta, cincuenta y sesenta, no es diferente a la bosquejada para otras ciudades de Chiapas, como San Cristóbal de Las Casas y Tuxtla Gutiérrez. La ciudad pareciera ser y no ser la misma, el cambio en el paisaje urbano es prácticamente imperceptible, pero hay desarrollos en la estructura social que poco a poco van transformando el orden civil y su espacio social y político.

La clase privilegiada, pese a ver reducida su capacidad de control social, sobre todo con el cardenismo, período en el que se inicia el reparto agrario, cambia sus marcos de referencia: se vuelve estado-céntrica, se acomoda a las bondades del nuevo Estado mexicano y se perfila una diferenciación entre quienes se vuelcan a la política como actividad profesional, traspasando el espacio local y estatal y quienes se dedican a las actividades agroproductivas y comerciales; se deja un espacio, aunque estrecho todavía, para que otras personas con categorías ocupacionales y clases sociales no privilegiadas por la herencia y el dinero, ingresen al campo de la política local, promovida, claro está, por el entonces partido de Estado cuya naturaleza es revolucionaria; la emergente clase media tenderá a fincar su desarrollo y a ampliar sus expectativas ya no en los “ricos” de Comitán y en las magras dependencias del gobierno del estado, sino en las promesas, muchas veces hechas realidad, del proyecto de desarrollo revolucionario del Estado mexicano, impulsado por el gobierno federal y sus agencias.

El sector público (particularmente las delegaciones estatales de las agencias gubernamentales del gobierno federal, pero también del gobierno estatal) se convierte así en el principal empleador de los grupos medios. La educación se convierte en la “llave mágica” para salir de la pobreza y poco a poco los jóvenes podrán aspirar a alcanzar una carrera profesional con la idea de articularse a las actividades del dicho sector. La clase media provinciana que aprovecha todos los espacios para su desarrollo material y simbólico, se ensancha; así mismo, se registran las primeras migraciones hacia la ciudad de Comitán de familias más o menos acomodadas como de escasos recursos, provenientes de municipios aledaños. Estamos en presencia de un proceso mayor de diferenciación social.

Para la mayoría de los trabajadores situados en la periferia de la ciudad, el cambio mayor se daba en la ampliación del mercado de trabajo. Como espacio rector de la región fronteriza, en Comitán se dieron las posibilidades para incrementar la producción de bienes artesanales y de ampliar los oficios; la demanda de mano de obra en las obras públicas y privadas posibilitó la incorporación de una población adulta y joven hasta entonces sub-ocupada. El factor quizás más importante para la población trabajadora rural, fue la separación laboral con las fincas, pues éstas venían siendo afectadas por la política federal del reparto agrario. Ya desde el cardenismo, que impulsó el reparto agrario, había emergido una población campesina que, liberada de las fincas, pasó a constituirse en la base social del partido emanado de la Revolución y del sistema de organizaciones corporativas articuladas al partido y al Estado.

Desde ese entonces, la sociedad comiteca se venía organizando en torno al Partido Revolucionario Institucional (PRI), cuyo primer presidente nacional fue el exgobernador chiapaneco Rafael Pascacio Gamboa. La sociedad local y regional se vio obligada, bajo una discursividad ideológica revolucionaria, a definir sus formas de participación política en función de la estructura corporativa del PRI. Las

narraciones de algunos miembros de los sectores medios de la ciudad de Comitán son ilustrativos de este proceso.

Ya estoy un poco viejo pero me acuerdo que muchos comitecos en el tiempo del presidente Cárdenas, nos empezamos a organizar como productores ganaderos en una organización de cobertura nacional; después, como pequeños propietarios, también como una asociación que dependía de una organización nacional. La primera era –lo sigue siendo- la Confederación Nacional Ganadera, la CNG, y la segunda la Confederación de la Pequeña Propiedad, que ya cambió de nombre. Se suponía que estas agrupaciones eran las que nos defenderían de la reforma agraria y del robo del ganado, pero me acuerdo que yo y mis compañeros de ese entonces éramos priístas, entonces, también éramos revolucionarios. Esos gobiernos eran contradictorios, porque por un lado decían que debíamos producir porque el país nos necesitaba pero luego nos daban *atole con el dedo*, pues la reforma agraria se hacía más dura con nosotros. Bueno, todos queríamos el progreso, creo que de eso se trataba y el Estado mexicano tenía como objetivo integrar a todos los sectores de la sociedad en el partido (Entrevista anónima, mayo de 1994).

La sociedad de Comitán siempre fue una sociedad muy organizada, todos estábamos donde teníamos que estar. Mi abuelo era ingeniero y arquitecto, mi padre siguió el ejemplo y ahora yo tengo la misma profesión. Nuestra relación con la política es desde siempre, nuestros amigos son políticos, muchos de nivel nacional. Que yo recuerde mi abuelo y mi padre fueron miembros importantes del gremio y eran parte de uno de los sectores del partido, el PRI. Además tenían sus propias organizaciones, el Club de Leones y el Club Rotario, que agrupaba a las familias comitecas más distinguidas. Yo, también estoy afiliado a muchas organizaciones, privadas y del partido (Entrevista anónima, mayo de 1994).

Para los trabajadores urbanos y del campo, los recuerdos de las vivencias entre el porfiriato y las primeras seis décadas del siglo XX, son diversos y mucho depende de su trayectoria personal. No obstante los recuerdos son más inmediatos, parten de 1940 o de 1950, y no establecen diferencias entre las acciones públicas y privadas, pues sus vivencias están mezcladas de ambas esferas: es vida cotidiana y vida política vivida o transmitida.

Despuécito de la Revolución no se exactamente qué pasó, si Comitán cambió o no. Pero me acuerdo de un gobernador en el año cuarenta, que dijo que él y el Presidente de México nos iban a ayudar para que dejáramos de tener problemas con el agua. Efectivamente, Comitán por fin tuvo agua potable. Para los que vivíamos acá arriba, eso fue bueno, pero la gente que vivía de vender agua no lo

fue, pues dejaron de ganarse un dinerito que les servía para vivir. Se acabó *la burrada*, o por lo menos, disminuyó. Ya en esos años, me acuerdo que todos los comitecos estábamos con el gobierno. Cuando venía un candidato la gente ya organizada por el partido y los sindicatos, la CTM y la CNC, invitaban a la gente a hacer grandes vallas para esperarlo. Hasta los maestros sacaban a los niños de la clase para el recibimiento. Se esperaba mucho del gobierno, pues casi todos querían escuelas, luz, agua, carreteras caminos, sobre todo los que vivían en la orillada y en otros municipios cercanos. Sí, me acuerdo del alboroto con el PRI, antes tenía otro nombre, estaba nuevecito y tenían ganas de trabajar, casi todos éramos del partido (Entrevista anónima, abril, 2004).

Por esos años, Comitán no había cambiado mucho. La gente y sus oficios seguían en su mismo barrio. Tal vez, lo que producían había aumentado porque vendían sus productos no sólo en Comitán sino también en otros lugares. Gente de Comalapa o Las Margaritas venían a encargarse ladrillo, tejas, azulejos o cualquier otro producto. Yo viví en La Pila, mi papá fue albañil y varios de mis hermanos también aprendieron ese oficio. Yo lo aprendí, pero era un trabajo muy duro, como era el más chico, me dejaron que fuera a aprender sastrería. Luego me fui a vivir a otro municipio, ahí me casé y me hice maestro de obra, porque también entré a trabajar en la construcción de la carretera y aprendí mucho con los ingenieros. Para esos años se abrieron muchas oportunidades, la construcción de la carretera que llegó hasta Ciudad Cuauhtémoc generó mucho trabajo, imagínese uno que nunca había rayado por semana. Yo prosperé, me llegué a codear con los ricos de Comitán, algunos fueron mis compadres. El partido también dio oportunidades, yo me hice socio del Club de Leones, y el partido siempre nos pedía que le echáramos la mano (Entrevista anónima, abril de 2004).

Para los habitantes de Comitán, fue muy importante en esos años la construcción de la carretera, fue el parteaguas que les transformó la vida. En efecto, llegaron las compañías constructoras de caminos “El Aguila” y “La Azteca”, venían a construir la carretera Panamericana, el extremo sur de un camino que debía atravesar al país de una frontera a otra. Para fines de 1950 ya estaba terminada la carretera hasta el Ocotil, hoy ciudad Cuauhtémoc (Coneculta, 1999). El impacto de esta obra pública y los servicios básicos como la luz eléctrica, el agua potable, salud y educación se hizo perceptible de manera inmediata. Los efectos multiplicadores se dieron en cadena y en el imaginario colectivo estaba la idea que el Estado de la Revolución y su partido le estaban cumpliendo a la gente, había progreso.

Imagínese usted, yo vivía en Frontera Comalapa. Cada vez que alguno de mis hijos se enfermaba había que llevarlo a Comitán porque sólo ahí estaba el médico. Contratábamos una carreta que era jalada por bueyes, que era de uno de mis compadres y a veces en la noche y con lluvia nos íbamos a Comitán. De repente la carreta se atascaba y los bueyes se quedaban quietos, teníamos que quitar el lodo para poder continuar el camino. Ya no sólo era un enfermo sino también el carretero y yo. Lo mismo ocurría con las mercancías, era muy duro ir a comprar o vender, no había modo porque el camino era muy malo. *Dirán misa* pero la carretera sí fue progreso y eso lo hizo el gobierno, claro, era su obligación, pero uno tan lejos de la capital cómo exigirle. En eso nos ayudó el partido, el PRI. La luz eléctrica, creo que Comitán ya tenía, pero nosotros todavía en 1955 no la teníamos, imagínese el gastadero de gasolina para la lámpara o de velas para que los que no podían comprar una lamparita de gas (Entrevista anónima, mayo, 2004).

Para los años sesenta el cambio era notorio. El mercado se amplió y se diversificó. Se creó la primera gasolinera, y para los sectores económicos más favorecidos, los refrigeradores y las estufas dejaron atrás los fogones de leña y hornillas. Los materiales de construcción como la varilla, el cemento y los mosaicos, sustituyeron al adobe, los ladrillos y las tejas (Coneculta, 1999). Comitán, como decía uno de los entrevistados “empezaba a mostrarse como una ciudad, no se parecía a ningún pueblo de la región fronteriza” (entrevista anónima, mayo 2004).

El crecimiento de la población, consecuencia del incremento de la actividad económica, consecuencia a su vez de la fácil comunicación con el resto del país por la carretera panamericana, provocó, entre otras muchas cosas, la escasez de vivienda. Las amplias casonas comitecas se fraccionaron en dos, tres, cuatro y más secciones; se recortaron los aleros y se sustituyeron por cornisas; los zaguanes se transformaron en “porches” (*garages*), los hermosos patios con sabor castellano se volvieron azotehuelas con lavaderos[...] y los enormes sitios sirvieron para fincar minúsculos y utilitarios departamentos, desaparecieron las banquetas de laja, las calles empedradas con lustrosas piedras blancas, los ladrillos[.....] Proliferaron los pisos de cemento, aparecieron los “mosaicos”. (Alfonzo 1996 [1978]).

La gente reconoce otros impactos no tan positivos. El alza en el precio de los productos locales fue inevitable, lo que se producía localmente se llevaba a vender a la ciudad de San Cristóbal y a Tuxtla Gutiérrez, encareciéndose los productos básicos. De otras partes del país llegaron nuevas mercancías, algunas apenas se conocían: detergentes, fibras, productos de belleza, plástico, y otros tantos productos, que para mucha gente era difícil adquirir. La carretera partió por la mitad muchos magueyales y sitios de árboles frutales, los dueños vendieron a bajo precio lo que les quedó de ambos lados y otros los dejaron en el olvido. Disminuyó así la cosecha de limas, naranjas, aguacate y bajó la producción de pulque, materia prima para la elaboración del aguardiente “comiteco”, que se elaboraba desde el siglo XIX y actualmente se elabora a partir del jugo de caña o de otras frutas que suplen al pulque (Conecultura, 1999: 134-135).

Para la década de los sesenta la estructura social de Comitán, sobre todo en relación con los municipios aledaños, era mucho más diferenciada y compleja. La solidez del Estado mexicano, los gobiernos y sus instituciones, como las instancias rectoras de la vida política y social era incuestionable. La acción colectiva y las formas de participación política local estaban demarcadas por el Estado y sus instituciones. Las movilizaciones y las demandas subyacentes, de los sectores *populares*, difícilmente transgredían el espacio institucional y de las transacciones clientelares de los apoyos gubernamentales definidos por el régimen. Este espacio, no era otro que el corporativismo estatal¹⁰, que en paralelo se nutría de una ideología y

¹⁰ En contraposición al corporativismo social, el corporativismo estatal está asociado con sistemas políticos, en los cuales las sub-unidades territoriales están fuertemente ligadas a los poderes burocráticos centralizados; en tanto dependiente y penetrado, es el resultado de una intervención positiva del Estado para implementar los canales de representación de los grupos de interés; y está relacionado con un régimen antiliberal, capitalista atrasado, autoritario y con un Estado neomercantilista (Schmitter, 1992: 11-14).

una práctica política que garantizaba la incorporación activa de las masas: el populismo¹¹ (Schmitter, 1992; Funes y Saint-Mezard, 1994).

2.2. Comitán y los desafíos del último tercio del siglo XX. Las dimensiones materiales y subjetivas de la sociedad local.

Al iniciarse la década de los setenta, los gérmenes del descontento de la población local más desfavorecida esperaban una oportunidad para reproducirse en su dimensión social por excelencia: el conflicto. No es que el conflicto hubiese estado ausente de la sociedad, sino que había mayor control por parte de los gobiernos en la administración o resolución de los mismos. El conflicto al que me estoy refiriendo no vendría de los sectores urbanos, sino de las localidades y municipios rurales que conforman la región Fronteriza.

Por varias décadas, el gobierno federal emprendió una política agraria bastante laxa. La gran mayoría de las fincas en los municipios de Las Margaritas, La Trinitaria, la Independencia y Tzimol, seguían siendo, aunque con una extensión menor, propiedad de la clase dominante de Comitán (ex propietarios de fincas), aunque a ella se habían incorporado propietarios de origen más diverso. Aunque la información oficial registra que desde los años treinta el reparto agrario era una acción del gobierno revolucionario, con la subsecuente afectación de las fincas, en los años setenta éstas todavía mantenían una parte importante de tierra y ante la solicitudes de ampliación de los primeros ejidos, sus propietarios se habían amparado o negociado con las autoridades agrarias, lo que retrasaba las resoluciones de afectación o prácticamente eran negadas. Al problema agrario, se sumaban las

¹¹ Para Funes y Saint-Mezard, el populismo “es el modo de hacer política más representativo de América Latina”. Lo definen como “un fenómeno político e ideológico que incorpora al <pueblo> en una alianza hegemónica, junto a otros grupos sociales, como la burguesía, a los que un líder consigue amalgamar a pesar del antagonismo existente entre dichos grupos, pero en una situación tal que el surgimiento mismo del <pueblo> implica un cambio social (1994: 350).

rigideces estructurales y el inevitable crecimiento demográfico con la subsecuente movilidad poblacional y las exigencias que en materia de infraestructura y servicios trae consigo.

En este marco, ya en el último tercio del siglo XX, el segundo intento de subordinar el orden provinciano de sociedad civil vino de múltiples fuentes. En lo interno, destacaron las presiones del crecimiento demográfico y las exigencias que ello implicaba en términos de servicios e infraestructura económica y social; destaca también, una estructura económica fincada en el sector agropecuario incapaz de incorporar a la fuerza laboral local y regional.

La dinámica económica y poblacional del municipio y de la ciudad, hace referencia a los factores materiales que van a contextualizar y a explicar en parte las formas de acción colectiva y de participación política de la sociedad local durante las últimas tres décadas del siglo XX. Este marco estructural me lleva de alguna manera a reconocer uno de los principales problemas que hasta hoy siguen explicando la precariedad de la democracia: la no resolución de los conflictos de naturaleza y carácter estructural y distributivo, conflicto que el sistema político mexicano, en sus distintas vertientes sexenales prometió resolver.

En Chiapas y en sus diversas regiones, el modelo de sustitución de importaciones formulado como política económica nacional, no se tradujo en un cambio en la estructura productiva que garantizara el empleo de una población en crecimiento. En atención a este modelo la división nacional del trabajo siguió considerando a Chiapas, su economía, población y mano de obra, sujeta a la producción primaria, fundamentalmente en el sector agropecuario y forestal; en torno a este sector, el mercado laboral seguía reproduciendo condiciones de trabajo que no tenían correspondencia alguna con los estados del centro o norte del país; el gobierno federal y el de la entidad, por su parte, siguieron reforzando el control social y

político de los sectores mayoritarios a través de las organizaciones partidarias y burocráticas. El modelo estabilizador que se propondrá en los años setenta como una estrategia de política económica para romper con las asimetrías inter e intra-regionales, tampoco, salvo unos cuantos años, tuvo una traducción material en una realidad social en donde era apremiante el desarrollo. La economía regional siguió supeditada al sector primario y la fragilidad de los sectores asalariados en la ciudad se hacía evidente en un sector terciario sujeto a la dinámica de la inversión y gasto público. Sin embargo, si bien la política fincada en el modelo de desarrollo estabilizador fue efímera, no lo fueron sus impactos (García, 2003).

La sociedad comiteca del último tercio del S. XX no se entiende sin la comprensión de las transformaciones de los contextos sociohistóricos que la enmarcan y definen. Su entorno inmediato, la región III Fronteriza,¹² presiona social y políticamente al municipio de Comitán, y también al municipio de Las Margaritas, particularmente las cabeceras de ambas municipalidades, lo que posibilita que sus territorios se constituyan en cajas de resonancia de los complejos problemas sociales que encaran.

La centralidad del municipio de Comitán, particularmente la cabecera municipal, obedece, como punto de partida, a su ubicación a 163 kilómetros de Tuxtla Gutiérrez, la capital, y apenas a 90 kilómetros de la frontera con Guatemala, lo que la define como el centro más importante de la región Fronteriza.¹³ La Carretera Panamericana

¹² La región III fronteriza está integrada, además de Comitán, por los municipios de Las Margaritas, La Trinitaria, Frontera, Comalapa, La Independencia, Chicomuselo, Socoltenango Tzimol y Maravilla Tenejapa, éste último municipio creado en 1999, mediante decreto del entonces gobernador, Roberto Albores Guillén..

¹³ Comitán se localiza en los límites del Altiplano Central y de la Depresión Central, su relieve es semiplano con algunas elevaciones sobresalientes en el norte y en el sur. Limita al norte con los municipios de Amatenango del Valle y de Chanal, al este con Las Margaritas y La Independencia, al sur con La Trinitaria y Tzimol y al oeste con Socoltenango y Las Rosas. Predomina el clima templado subhúmedo con lluvias en verano, siendo ligeramente más cálido hacia la Depresión central (SEPLAFIN, 2004. Perfil Demográfico y Socioeconómico. Gobierno del Estado de Chiapas).

atraviesa la región y es el punto de partida de la *Carretera Fronteriza del Sur* que se interna en la Selva Lacandona (Ramos, 2000).

De acuerdo a un estudio de la Comisión Nacional de Población (CONAPO), el sistema de ciudades de Chiapas en su conjunto, se estructuró bajo las condiciones de atraso que caracterizan a la entidad y su contexto regional amplio, el sureste mexicano. La dinámica de crecimiento de las ciudades de Chiapas, responde a varios factores, entre los que destacan: un proceso lento de modernización y un estancamiento del desarrollo capitalista de la agricultura, cuyo efecto más inmediato era la inmigración de una población rural en crecimiento hacia las pequeñas y medianas urbes en busca de empleo y de un horizonte más promisorio. El crecimiento poblacional urbano también responde a la dinámica propia de los mercados regionales: personas que llegan a dichos espacios para ofertar sus excedentes agrícolas y a la vez abastecerse de bienes manufacturados de consumo productivo. Esta dinámica termina posibilitando el establecimiento de vínculos comerciales que estructuran la relación entre la ciudad y el campo, entre productores y consumidores. Clasificada como ciudad intermedia, Comitán forma parte del primer grupo de ocho ciudades mayores de 15,000 habitantes y, atendiendo a su disposición espacial, la localidad de Comitán se encuentra en el área del centro del sistema, junto con Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal y Villaflores (Villafuerte, et. al., 1999a: 176).

La dinámica poblacional de la localidad de Comitán es parte de las transformaciones de la esfera demográfica del conjunto de municipios de la región Fronteriza, particularmente la dinámica de crecimiento y de movilización laboral y espacial. Entre 1980 y 1987 la población de la región pasó de 208,381 a 267,958 habitantes¹⁴. En este último año, la población urbana fue estimada en 51,129 habitantes, esto es, el 24.55% de la población total; la población rural se estimó en

¹⁴ Agenda Estadística 2002. Secretaría de Planeación, Gobierno de Chiapas, 2003.

157,152 habitantes, el 75.45% de la población regional total, con lo que se tiene una relación urbano - rural de aproximadamente 1-5 en cada uno de los municipios, excepto en el municipio de Comitán que presenta una relación de 1-1, colocándose como ya señalamos, en la cuarta localidad urbana más importante del estado de Chiapas.

En 1980 la ciudad de Comitán albergó a 27, 374 habitantes, la mitad de la población municipal, una década más tarde, en 1990, la población de la cabecera ascendía a 48, 858 habitantes y en 1995 a 62, 292 habitantes. Este crecimiento poblacional sostenido, que va más allá de un crecimiento natural, permite que la ciudad de Comitán sea clasificada, desde 1990, con una categoría migratoria de “atracción” (Villafuerte, 1999a: 176). Actualmente la cabecera municipal mantiene el 65.3% de la población y el resto habita en la zona rural. Cuenta con 259 asentamientos rurales, los que mantienen el rango de 500 a 2,500 hablantes y retienen el 90% de la población rural, denotando así una gran dispersión poblacional.¹⁵

En los años sesenta y setenta a Comitán llegaron primero migrantes de varios estados de la República, y a partir de 1980 la migración de centroamericanos fue muy importante, dada la situación de guerra que vivió el vecino país de Guatemala. En los años noventa y en 2000 la migración de los municipios rurales de la región se ha incrementado no sólo por la crisis agrícola, sino debido también a conflictos religiosos y a la situación generada por el levantamiento zapatista a partir de 1994.

Aún cuando gran parte de las transformaciones en Comitán se genera por la dinámica de los mercados y de las personas, debe reconocerse que en este último tramo, las últimas tres décadas del siglo XX, el Estado mexicano a través de los gobiernos federal y estatales, jugó un papel importante. Desde los años ochenta, la

¹⁵ Plan de Desarrollo Municipal 2002-2004, Ayuntamiento constitucional de Comitán.

ciudad de Comitán se ha venido configurando como un espacio urbano que centraliza un número importante de dependencias gubernamentales, tanto federales como estatales, que son las que brindan apoyo administrativo y de servicio a los municipios de la región fronteriza. Se trata de la regionalización de las funciones político administrativas y de la incorporación de la región a los planes estratégicos de nivel estatal y federal, para lo que se ha hecho necesaria la ampliación de la burocracia. El ayuntamiento municipal es un importante espacio en donde se emplean un buen número de burócratas, el ayuntamiento del período 2004 – 2007 reporta 787 plazas de servicio.

Los servicios en materia de educación y salud, la infraestructura y el recurso humano calificado en dichos campos, también se concentran en la localidad y operan prácticamente para toda la población de la región. Los servicios de salud se ofrecen en instituciones públicas como el Hospital general, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Chiapas (ISSSTECH) y el Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS), pero también se ofrecen en clínicas privadas que gozan de cierto prestigio en la región y en el estado.

En el caso de los servicios de educación estatal, en los niveles de preescolar y primaria, se registran 404 docentes, 145 en secundarias y 286 en telesecundarias, lo que da un total de 835 docentes y en el nivel federal, en el nivel preescolar y primaria se registran a 2,298 docentes.¹⁶ También hay que considerar que un buen número de ellos se emplean en el nivel medio superior y que durante los últimos años se han abierto opciones de educación superior en la Universidad Autónoma de Chiapas, el Instituto Tecnológico de Comitán, la Universidad Valle del Grijalva y la Universidad Pedagógica Nacional.

¹⁶ Datos proporcionados por personal de los Servicios educativos para Chiapas y Coordinación de Educación Estatal. Comitán, Chiapas, 2005.

Pese a ser un centro urbano, en Comitán las actividades industriales son aún incipientes y las existentes se concentran fundamentalmente en la rama de alimentos, con baja capacidad de absorción de empleos. La localidad es un centro de importancia comercial y de abasto hacia donde converge la población periférica. En la ciudad se concentran y se distribuyen diversos productos que provienen del centro del país, y de otras áreas del sistema. Es el centro urbano que capta la producción de la zona y la distribuye hacia sus entornos, a otras localidades urbanas y fuera de la entidad (Villafuerte, et. al, 1999a:180). Sin embargo, en esta actividad también se registra un bajo nivel de captación de personal y de valor agregado, en tanto la mayoría de los comercios son de tipo familiar, aunque se registra cierta especialización. La mayoría de los establecimientos venden alimentos y bebidas, seguidos de los que se dedican a la venta de prendas de vestir.

Los datos del municipio son ilustrativos, en 1980 de la población económicamente activa (PEA) total, correspondió 10% a la actividad industrial; 7.5% a la construcción, 10.6% al comercio y 16.4% a los servicios comunales. (Ibidem: 180-181). Estos indicadores cuantitativos que corresponden a los censos económicos de 1980, revelan las características, poblacional y socioeconómica de los espacios urbanos, en este caso de la ciudad de Comitán. Ciertamente, la ciudad forma parte del conjunto de centros urbanos cuyo tamaño es grande comparado con el resto de las localidades en su mayoría pequeñas y dispersas, y sobresale por el tamaño de su población; por la cantidad de infraestructura de servicios que se concentra en ella y por constituir los mercados de productos y de trabajo para amplios espacios que engloban a poblados urbanos de menor tamaño y a asentamientos rurales.

Según datos del INEGI (2004), actualmente la PEA de la ciudad de Comitán es de 27,596 personas, frente al total municipal de 38,908. De esta PEA de la ciudad, 1,032 personas se ocupan en el sector primario, 6229 en el sector secundario y 19,623 en el sector terciario. En el municipio 7,062 personas se encuentran ocupadas en el

sector primario, 9,143 en el sector secundario y 27,788 en el sector terciario. Estos datos nos indican la concentración de las actividades de la ciudad en este último sector.

De acuerdo al criterio de micro regionalización del municipio planteada por el ayuntamiento municipal 2002-2004, la micro región urbana corresponde a la mancha urbana y conurbada de Comitán y cuenta con las mejores condiciones de atención a la salud en el municipio y la región económica III Fronteriza, mantiene un sistema educativo en todos los niveles, medios de comunicación y transporte, y un aeropuerto con potencial como factor de desarrollo. Sin embargo, la micro-región presenta problemas estructurales como la necesidad de reordenamiento territorial y planeación del desarrollo urbano, de abastecimiento de agua potable, de solución a la alta contaminación de los mantos freáticos por envejecimiento del sistema de alcantarillado y drenaje, así como de la insuficiente cobertura de los servicios públicos en barrios y colonias pobres.

Esta micro-región cuenta con 121 espacios diferenciados entre barrios, colonias y fraccionamientos y una población superior a los cien mil habitantes y un estimado de al menos 20 mil personas como población flotante, que acude a este centro urbano para abastecerse de productos de las comunidades del municipio y de la región. El nivel de pobreza en la micro región urbana en promedio es bajo, salvo en los asentamientos irregulares ocupados por población campesina e indígena tojolabal, misma que se ha venido incrementando particularmente por conflictos intercomunitarios de índole religiosa y a raíz del conflicto armado de 1994, de índole política. Así, numerosos grupos humanos se asientan en barrios o fraccionamientos irregulares con poca o nula cobertura de servicios, como agua entubada, drenaje, pavimentación, alumbrado público, y que buscan una alternativa en el mercado laboral informal.

Estos procesos de poblamiento urbano se dan como una respuesta anárquica a los desequilibrios y tensiones del sector rural y tiende a incrementarse, pues Comitán sigue representando la alternativa primaria para una población rural que por razones económicas, religiosas o políticas tiene que emigrar. Ocupan los espacios periféricos de la ciudad, y ante la falta de los servicios básicos reproducen, no obstante las exigencias urbanas, las condiciones de vida rural. Sin embargo, la articulación a un mercado laboral caracterizado por actividades poco valoradas como el empleo doméstico, el empleo de peones y albañiles de la construcción, choferes, trabajadores de limpia municipal, cargadores y pequeños distribuidores de productos agrícolas en los mercados, va generando un sentido de pertenencia a los “sectores populares” y con ello se abren posibilidades de formas de acción colectiva, particularmente la expresada en un emergente movimiento social urbano.

No se trata de la presencia de actores urbanos sólidos en la escena pública y del total desplazamiento de la matriz agraria como eje articulador de la realidad social. Sin embargo, estos actores urbanos emergentes enfrentan la transición de sus modos de vida material y subjetivo, y como tal conjugan y yuxtaponen diversas estrategias de acción colectiva y de participación política con tal de ver satisfechas sus demandas y necesidades primarias, forjando a la larga un modo de vida acorde a su nuevo contexto urbano.

La transformación política de Comitán también se va a dar con la llegada de actores sociales y políticos, que durante los años ochenta se asentarán en la cabecera municipal, misma que será el espacio para llevar a cabo las diversas movilizaciones campesinas y *populares*, con demandas y exigencias que si bien siguen ancladas en los satisfactores básicos, a ellas se irán incorporando demandas de carácter eminentemente políticas.

He de reconocer que el descontento social manifiesto en el conflicto que convoca movilizaciones a la cabecera municipal, a la capital del estado y del país, sigue recreada por las insuficiencias del desarrollo material del municipio y entorno regional. El Estado mexicano se va a mostrar incapaz de romper con la situación de subdesarrollo de sus periferias como lo es Chiapas y sus municipios. Esta incapacidad institucional, hasta los años sesenta, había sido sorteada por la población a través de una diversidad de estrategias familiares de sobrevivencia y reproducción social y biológica, en la que no había tenido lugar el reclamo abierto y la confrontación. El conflicto se situaba en la dimensión distributiva pero, los reclamos aún se reducían, pacíficamente, a invocar los propios contenidos sociales del discurso oficial del Estado revolucionario que prometió la justicia social para todos los mexicanos. Sólo pedían que se cumplieran las promesas sociales y los gobiernos y sus élites políticas no lo hicieron. Se tejerá así otro tramo complejo y simple a la vez.

Cuadro 1.
Superficie, altitud y número de localidades de los municipios de la Región Fronteriza

Municipio	Superficie (Km2).	Altitud (msnm)	Número de Localidades
Comitán	1,043.30	1,600	251
Chicomuselo	958.90	600	230
Frontera Comalapa	717.90	700	205
Independencia, La	1,704.10	1,300	109
Margaritas, Las	5,307.8	1,500	489
Socoltenango	775	880	95
Trinitaria, La	1,840.70	1,700	550
Tzimol	32.3	1,600	80
M. Tenejapa	411.32	600	30
Total Región	12,791.32		2,039
CHIAPAS	75,364.4		18,476

Cuadro 2
Población y densidad de población de los municipios de la Región Fronteriza 1980-2000

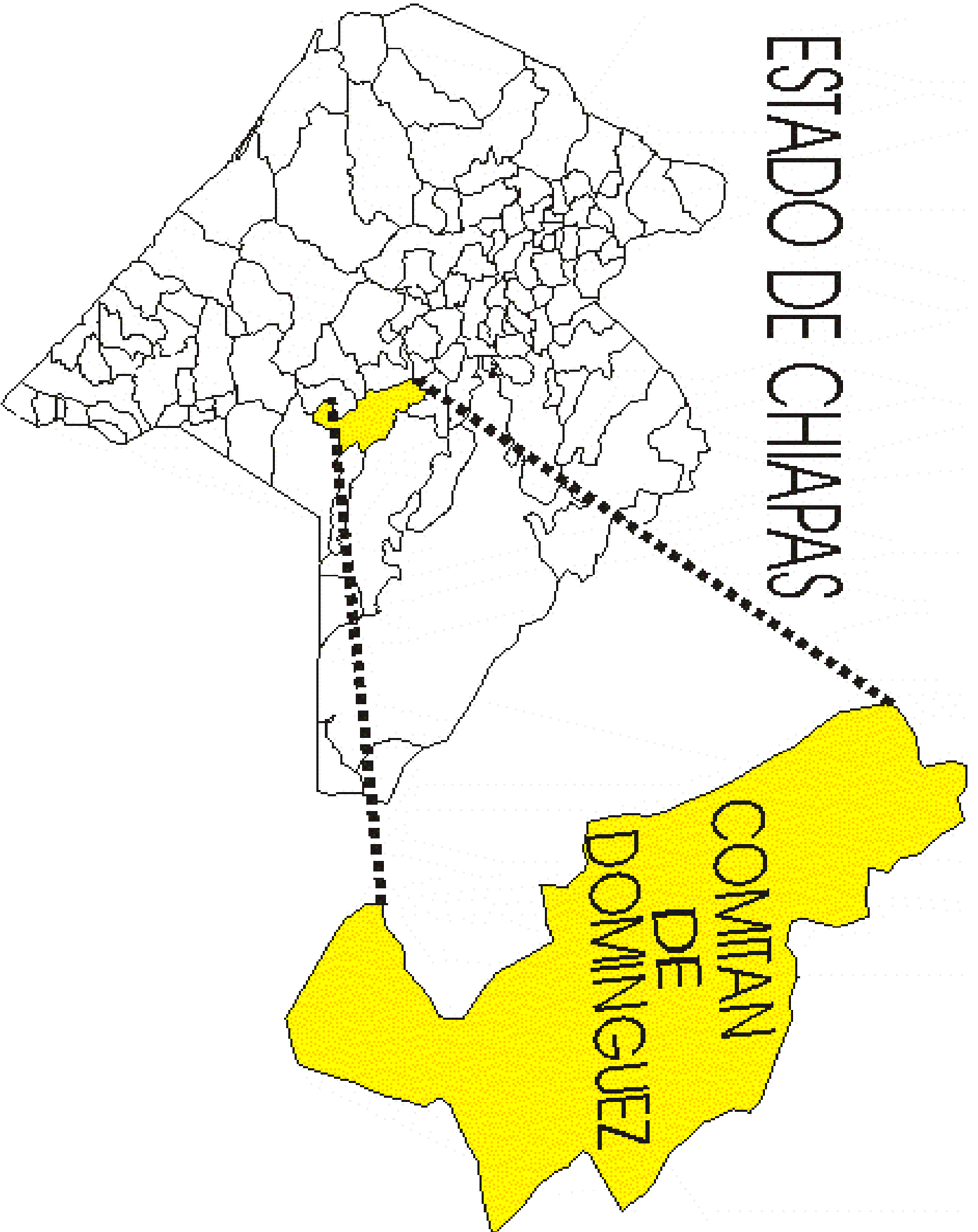
Municipio	1980	Hab/km2	1990	Hab/km2	2000	Hab/km2
Comitán	54,733	52	78,668	75	105,210	101
Chicomuselo	17,210	18	24,725	26	24,994	26
Comalapa	26,914	37	44,085	26	52,168	73
Independencia.	17,613	10	27,075	16	32,245	19
Margaritas Las	42,443	7	86,365	15	87,034	16
Socoltenango	7,827	10	11,231	14	15,171	20
Trinitaria la	35,272	19	57,780	31	59,686	32
Tzimol	6,269	194	9,980	309	11,925	369
M Tenejapa	-	-	-	-	10,526	26
Región	208,281	10	339,909	27	398,959	31
Chiapas	2'084,717	36	3'203,915	42	3'920,892	52

Fuentes:

Agenda Estadística Chiapas, 1991. Secretaría de Programación y Presupuesto, Gobierno del Estado de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, páginas 304-305.

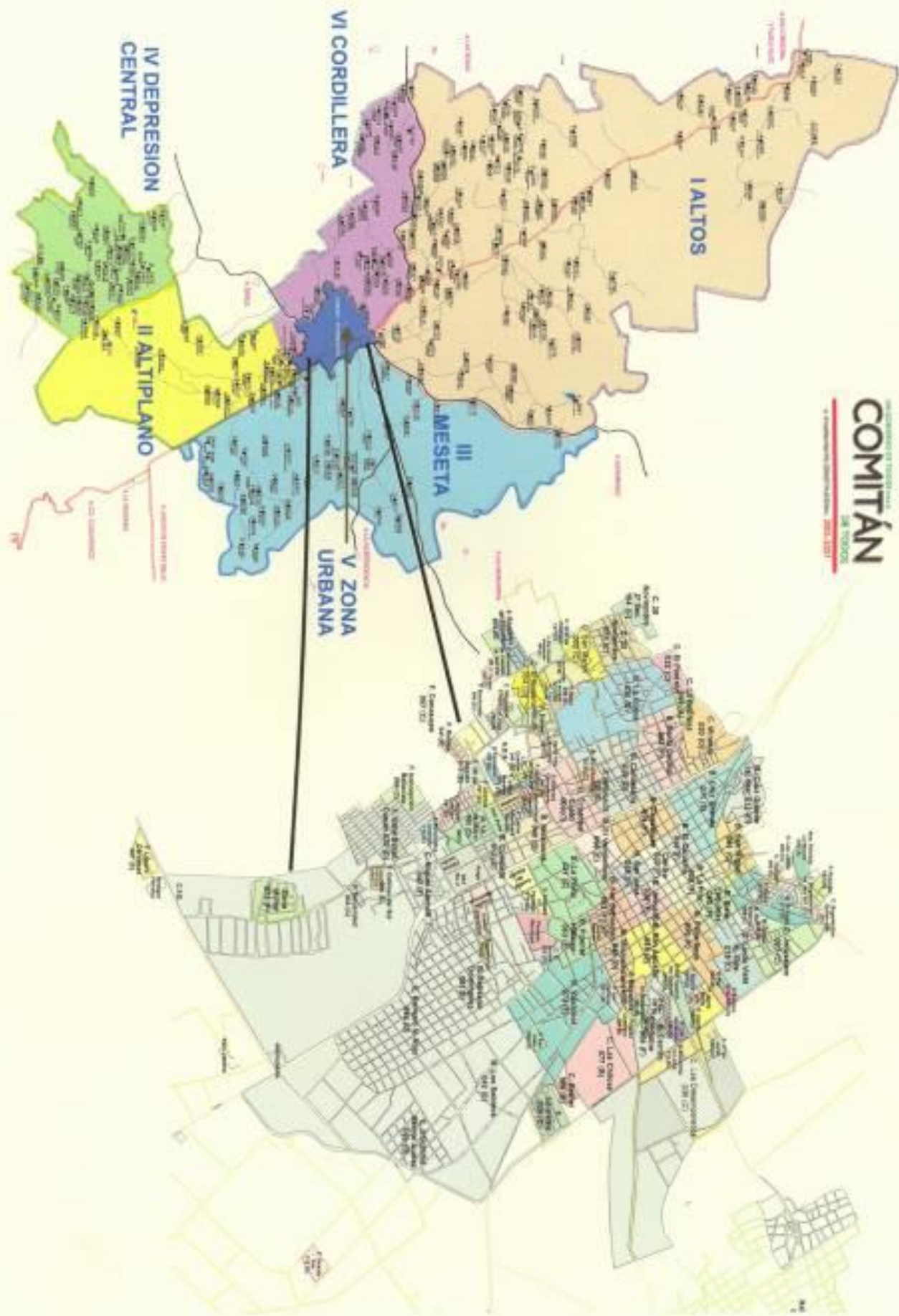
Secretaría de Planeación y Finanzas, 2004. Perfiles Demográficos y Socioeconómicos. Gobierno del Estado de Chiapas.

ESTADO DE CHIAPAS



UN GOBIERNO DE TODOS PARA EL
COMITÁN
DE TODOS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2005-2007





CAPÍTULO III

FORMAS DE ACCIÓN COLECTIVA Y DE PARTICIPACIÓN POLÍTICA EN LA SOCIEDAD COMITECA

3. 1. La emergencia de las trincheras opositoras en Chiapas

Fue por los años setenta cuando el presidente era don Luis Echeverría y el gobernador el doctor Manuel Velasco Suárez, que todo empezó a cambiar. Unos nos fuimos con los opositores del gobierno porque ahí la lucha era no sólo por la tierra, sino por el cambio total, por la educación, la salud, el mejoramiento de nuestras condiciones de vida en el campo, iba a haber socialismo. Me acuerdo que cuando salíamos a las marchas gritábamos: “hoy luchamos por la tierra, y también por el poder”. Pero todo nos confundíamos, porque el gobierno, el de México y el de Chiapas, empezaron también a formar muchas organizaciones que daban créditos y apoyos, y decían que como eran gobierno de la Revolución, ahora le tocaba a los chiapanecos. Íbamos a tener caminos, carreteras, agua potable, luz, salud y escuela para nuestros hijos. Tal vez por eso unos tomamos un camino y otros pues el camino del gobierno y del PRI que eran lo mismo. Ahí comenzó la desunión, aunque a veces nos juntábamos todos para ‘chingar’ a los que tenían la tierra. Dirá usted que no, pero pienso que había un camino, teníamos una esperanza, ahora no tenemos nada (Entrevista a un viejo agrarista originario de Las Margaritas radicado en un barrio de Comitán, mayo de 2003).

La década de los setenta se significa en Chiapas por la emergencia de las primeras trincheras de la oposición, una oposición que intenta, en el espacio regional y local, sustentarse en un ideario ideológico-político marxista. Como ocurrió en muchas regiones del país, a la entidad chiapaneca llegaron las primeras fuerzas nacionales de la oposición representadas por luchadores y líderes sociales e intelectuales del centro del país, quienes trataron de hacer de los “muchos marxismos” y de la lucha de clases el ideario y el productor de sentido de los movimientos “populares”, expresadas en la confrontación de intereses entre los trabajadores rurales y las masas campesinas e indígenas, y los propietarios de la tierras, ganaderos y finqueros.

Como se recordará, ante las presiones de la sociedad civil nacional, el Estado mexicano instituyó las reformas de apertura y de liberalización política con impactos relevantes en la configuración futura de las fuerzas nacionales de oposición. Sin embargo, en muchas entidades federativas, es el caso de Chiapas, estas iniciativas van a ser contrarrestadas con el regreso de un neopopulismo que formalmente se proponía romper con los desequilibrios inter e intra regionales. Al calor de la explotación de los recursos estratégicos de Chiapas, los hidrocarburos y el agua para la generación de energía hidroeléctrica, la entidad va a vivir el impulso retardado del corporativismo e inmediatamente después el último aliento del mismo. Se anuncia así, que con el “desarrollo estabilizador” afianzado por una estrategia de integración a la nación, arropada de un discurso populista, el Estado mexicano pagaría su deuda histórica con esta entidad federativa (Funes y Saint-Mezard, 1994: 325-326). La democratización del sistema político en la entidad quedaba para mejores tiempos. Y la incorporación activa de las masas al régimen político de partido único, no era un fenómeno nuevo, pero ahora se reforzaría con proyectos reales de desarrollo.

Vale decir que a diferencia de otras entidades y regiones en donde la presencia del Estado nacional ocurre intensamente desde los años treinta, modificando las estructuras regionales de poder, en Chiapas, el gobierno federal intentará que ello ocurra en los años setenta. Sin embargo, ahora el Estado y los órganos corporativos del Partido Revolucionario Institucional no estaban solos, en paralelo a la llegada de organismos gubernamentales de orden federal, llegaba también una diversidad de fuerzas políticas y sociales con proyectos políticos que iban más allá de las reformas políticas formales, con propósitos de movilización de las masas locales que redituará en la legitimidad de alternativas distintas al proyecto oficial.

García (2003), retomando la metáfora de Domínguez, “Batalla por la tierra baldía”, señala que en Chiapas, al igual que muchas otras periferias del país, se convirtió en espacio de disputa por parte de una diversidad de fuerzas políticas cuyos

intereses cruzaban el territorio y la sociedad estatal. No obstante, en los idearios y en las prácticas de los actores locales, siempre estarán incorporadas las dimensiones de orden material y sociocultural que refieren a códigos internos propios que marcan las diferencias regionales, diferencias que definen oportunidades y limitaciones en la acción colectiva y en las formas concretas de participación política por parte de los sujetos y actores sociales.

Las múltiples fuerzas sociopolíticas que llegaron “desde el centro” a dinamizar la acción colectiva y la participación política de los actores locales, tienen su fuente básica en varios hechos un tanto lejanos a la periferia chiapaneca: el movimiento estudiantil nacional de 1968, que desencadenó una diversidad de tendencias políticas; las reformas políticas de apertura y liberalización que legitimaron la entrada de las fuerzas de oposición a las contiendas electorales (Pereyra y Woldenberg, 1988); y, como ya se ha señalado, en el papel activo del Estado mexicano, que a través del gobierno federal incorpora a Chiapas en las estrategias económicas y de acumulación de capital nacional e impulsa una política populista que mientras persistió y, pese a los conflictos con las fuerzas opositoras, contaba con cierto consenso y legitimidad (García, 2003).

La historia sociopolítica de Chiapas y sus regiones en este último tercio del siglo XX ha sido ampliamente analizada por estudiosos locales, nacionales e internacionales, por lo que sería inútil repetir las cronologías particulares de los procesos que tienen que ver con la acción colectiva y con las relaciones entre el Estado y las organizaciones sociales, los partidos de oposición y otros corporativos como las iglesias, de las que emanan formas particulares de participación y comportamiento político de la sociedad. Sin embargo, de la revisión de esta diversidad de estudios, me interesa rescatar las acciones impulsadas por las organizaciones sociales y políticas autodefinidas de izquierda u oposición, expresadas empíricamente en los movimientos campesino e indígena, el movimiento magisterial

y movimientos sociales más restringidos, para extraer algunas ideas que me permitan problematizar el campo de estudio, y después aterrizar en el estudio de la acción colectiva y las formas de participación política en el municipio elegido.

En la década de los ochenta la mayor parte de la producción académica e intelectual sobre la sociedad chiapaneca y sus formas de acción colectiva y de participación política se caracterizaron por estar sustentados en una perspectiva conceptual marxista en su versión latinoamericana, como fue la teoría de la dependencia¹⁷. La mayoría de los diagnósticos hacen referencia, en el marco de una relación de subordinación del campo a la ciudad, a una relación de explotación de clase, de la que se deriva que los movimientos campesinos son movimientos clasistas. Los sujetos sociales, los campesinos y los adversarios, los propietarios en sus distintas versiones, lo son en tanto sujetos de clase. *“Hoy luchamos por la tierra y también por el poder”* resume la reorientación política que, en atención al contexto sociohistórico, las élites de la oposición tuvieron que maniobrar para darle continuidad al proyecto político que se esperaba aterrizar en la sociedad regional.

Los estudios sobre los movimientos campesinos de esos años, no logran identificar las diferencias entre las plataformas político-ideológicas de las distintas fuerzas de la izquierda u oposición que llegaron a Chiapas para impulsar el cambio radical. Aún cuando se señalan las tensiones político-ideológicas, particularmente con una institución eclesial, la diócesis de San Cristóbal de Las Casas, no se dio una evaluación de conjunto que permitiera establecer por un lado, las tensiones entre las distintas plataformas político-ideológicas y entre éstas y los sujetos sociales en su entorno sociopolítico y cultural y por otro, los grados de hegemonía alcanzados por

¹⁷ Aunque los estudios con la perspectiva de la teoría de la dependencia, registra diversas posiciones, tienen como sustento común la relación centro-periferia. Una corriente, fuerte en México, es la que desarrolló Ruy Mauro Marini en su obra ya clásica “la teoría de la Dependencia”, en donde sostiene que las economías subdesarrolladas se articulan con el sistema económico mundial mediante la transferencia de recursos de la periferia al centro, lo que da lugar a distorsiones en la economía periférica y a bloqueos que impiden su desarrollo (Véase, Zapata, 2001: 232-234).

determinadas plataformas y su capacidad para flexibilizar y readaptar sus estrategias y aplazar ciertos objetivos primarios de los sujetos sociales. Tampoco se reflexiona sobre la trayectoria del comportamiento de la diócesis y sus impactos en las mediaciones, en el nivel de la acción colectiva y en el de las relaciones con el poder institucional; a la diócesis se le registra en un ámbito muy restringido: como instancia defensora de los derechos humanos de su feligresía mayoritariamente pobre.

Una lectura del conjunto de los resultados de las investigaciones de casos específicos, me lleva a sostener, por ejemplo, que frente a las organizaciones y liderazgos políticos, es el liderazgo de la diócesis de San Cristóbal el que, en una porción importante del territorio chiapaneco, sanciona en positivo o negativo la presencia activa de otras mediaciones políticas.

Por el énfasis en la dimensión estructural y clasista, en los estudios sobre el movimiento campesino en Chiapas, entre la década de los setenta y ochenta, no se percibieron las transformaciones que estaba sufriendo el Estado mexicano y sus instituciones y el carácter de su impacto en el nivel de la acción colectiva. Señala García (2003) que la crisis económica manifiesta ya al finalizar el sexenio de José López Portillo le significó a Chiapas no sólo la cancelación de las promesas de desarrollo y bienestar hechas por el Estado mexicano, sino también la reactivación de la conflictividad, en la que es visible la explosión del conflicto agrario, pero también de otros conflictos producto de una mayor diferenciación entre campo-ciudad. La acción colectiva social y política de esos años, tiende a exacerbar su confrontación con el Estado mexicano a quien le exige cumpla con el mandato constitucional, pero ya no con un comportamiento pasivo o defensivo, como continuar con el trámite agrario, sino con acciones que derivan en movilizaciones y confrontaciones violentas, algunas históricas en la entidad. El carácter beligerante de los conflictos y el ideario clasista que intentó dar sentido a las movilizaciones, no es totalmente visible en el desarrollo de los hechos. Los liderazgos, sobre todo nacionales, intentaron llevar

adelante un proyecto distinto al del sistema, pero la realidad les impuso límites a sus aspiraciones.

En un trabajo clásico publicado en 1989, por la Revista Mexicana de Sociología de la UNAM, Foweraker¹⁸ reconoce que los movimientos populares en México que tienen su matriz en el movimiento de 1968, son movimientos que se orientan a la democratización de sus espacios laborales y con ello a la democratización del país. Específicamente, recupera para Chiapas el caso del movimiento magisterial y lo caracteriza como un movimiento cuyo objetivo es la democratización de los espacios laboral y sindical. En 1990 una publicación de López Mojardín enfatiza en el análisis de los campesinos como “nuevos actores políticos”; en igual sentido, Neil Harvey, también en el mismo año, publica un artículo sobre el movimiento campesino independiente, mostrando el comportamiento de tres experiencias organizativas que lo llevan a identificar las diferencias de las relaciones que las organizaciones establecen con el Estado mexicano, concretamente con el gobierno federal y el gobierno estatal, y a reconocer que los movimientos sociales “han obligado al Estado a ampliar los espacios políticos en los cuales ahora se expresa una pluralidad de demandas y proyectos” (Harvey, 1990: 190). Se trata en suma de complejizar la dinámica de la acción colectiva y de los comportamientos políticos de los actores y sujetos sociales, cuestión que en un primer momento se consideró poco útil para el análisis y también para la acción.

¹⁸ Nos referimos a “Los movimientos populares y las transformación del sistema político mexicano”, en donde plantea: “... antes de 1968, la sociedad civil mexicana encontraba expresión política principalmente mediante los conflictos de clase, los cuales en su mayor parte eran mediados a través de organizaciones sindicales sectoriales de los partidos gobernantes (o eran reprimidos); pero después de 1968, las luchas de la sociedad civil se dirigen también a un conjunto más amplio e implícitamente democrático de demandas, y descubren formas de organización y capacidades estratégicas que el Estado encuentra más difíciles de contrarrestar y de contener” (Foweraker, 1989: 93).

3.2. Las primeras organizaciones de oposición en Comitán y en el entorno regional y estatal

En la memoria de los pobladores de Comitán, entre ellos maestros, burócratas y algunos dirigentes de organizaciones sociales y partidistas, resalta una imagen y un discurso sobre la historia política de Comitán que recrea la tensión entre “PRI-gobierno” y las primeras experiencias de una oposición política, que al principio tuvo poco impacto en la cabecera municipal. Las percepciones son diversas: unos insisten que como en Comitán han nacido muchos políticos “encumbrados”, de renombre nacional y estatal, los comitecos creen estar ligados y comprometidos con el PRI. Otros, que terminaron incorporándose políticamente a las fuerzas opositoras o de izquierda, han construido un discurso que recrea la explotación oligárquica y finquero, de la que son copartícipes los políticos, que va a legitimar la lucha agraria y después una lucha de mayor alcance. Los más jóvenes, más incrédulos, comentan que la sociedad comiteca de los años setenta y buena parte de los ochenta, era la de una sociedad “tradicional”, e incluso hoy reconocen que buena parte de los comitecos mantienen el mismo comportamiento. Para ellos, la opción es salir de Comitán y buscar “nuevos aires”.

Comentan que los mejores años del gobierno mexicano y de su partido, el PRI, fueron los años setenta y parte de los ochenta. Comentan otros, que esto es cierto, pero no tanto, porque también en esos años llegaron a Comitán otros partidos políticos y organizaciones sociales. Pero el hecho más significativo que resaltan es la presencia de la diócesis de San Cristóbal, con una pastoral que incomodaba a muchos comitecos. A la diócesis se sumarán después, las llamadas Organizaciones No Gubernamentales, nacionales e internacionales, para atender a los refugiados guatemaltecos, mismas que terminaron quedándose en Comitán para trabajar en las localidades rurales, con población preferentemente indígena.

Estas percepciones de la población local hacen referencia a un planteamiento ampliamente consensuado en la sociología latinoamericana, en el que se reconoce que la diversidad mutante de sentidos que caracteriza a la acción social, que enriquece y complejiza la historia contemporánea de los movimientos sociales, es, en palabras de Calderón:

[...] la expresión de la particular yuxtaposición de diferentes tiempos socioculturales; el pasado no muere y muy a menudo se compone de extrañas formas, lo “posmoderno” que puede venir de “afuera”, como vino la misma modernización, se incorpora complejizando las experiencias y vivencias históricas, casi nunca las mata (Calderón, 1995: 117).

Esta yuxtaposición de diferentes tiempos socioculturales y, digamos, políticos, ocurre en las sociedades locales, como es el caso de Comitán. Aun cuando la estructura material se descompone, visible en el declive de la gran propiedad y el impulso del reparto agrario, el dominio sociocultural del orden provinciano de la sociedad civil si bien pierde su carácter hegemónico, persiste, no muere totalmente. El orden estatalista de sociedad civil, que intenta absorber las contradicciones estructurales manifiestas en las relaciones sociales, se yuxtaponen y hasta se complementan con los comportamientos socioculturales “tradicionales”.

La yuxtaposición de estas formas de sociabilidad y dominio político, tienen su primer contrincante en los proyectos ofrecidos por las fuerzas políticas y sociales que ofrecen una alternativa “de oposición”. Es importante reconocer que estos proyectos no son homogéneos, por lo que los marcos de conflicto y oposición social y político no son, siguiendo a Calderón, duales ni permanentes (1995: 117).

He insistido en el peso que las fuerzas externas han jugado en el proceso de formación de las fuerzas de la oposición local y regional. Sin embargo, hay que reconocer que éstas son también producto de dinámicas locales, como una emergente diferenciación social, de la que surgen sujetos sociales inconformes e inquietos que,

al resistirse a las coacciones estructurales y subjetivas, construyen imaginarios de oposición a las formas de su integración a la sociedad local. Quienes no tienen las posibilidades de migrar para ver satisfechos sus anhelos de cambio, van a encontrar una posibilidad en las ofertas traídas por una disidencia nacional, en la que van también a hipotecar sus anhelos de cambio personal, por los objetivos más ambiciosos de las fuerzas de la oposición nacional.

El espacio privilegiado para las fuerzas opositoras no estaba en la ciudad sino en el campo. Parte importante de la población rural, la que a pesar de estar sometida políticamente a las organizaciones corporativas del partido oficial y a la burocracia responsable de la política agraria y agrícola, no ve satisfechas sus necesidades primordiales, va a encontrar en estas ofertas opositoras un camino, aunque más tarde entenderá que ser “oposición” tenía muchos significados, uno de ellos, la represión social y política, otro, la supeditación de sus intereses primarios a los intereses más amplios de las dirigencias sociales o partidistas.

Reconstruyendo el sistema de organizaciones de la sociedad civil de esas dos décadas, es inevitable no reconocer que la mayor parte de las organizaciones de los sectores sociales para organizar su participación en la vida pública, estaban estrechamente articuladas a los corporativos del PRI, el entonces partido de Estado. En los espacios urbanos o semi-urbanos están las confederaciones nacionales de viejo cuño como la Confederación Regional Obrera de México (CROM), la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y la Confederación Nacional de organizaciones Populares (CNOP); están también las viejas corporaciones empresariales inscritas en la égida del Estado, como la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA) y la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio (CONCANACO). Se encuentran también los sindicatos de los trabajadores al servicio del Estado como el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE) y la Federación de Sindicatos de los Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE).

En los espacios rurales, las organizaciones del sector social se registran bajo el liderazgo de la Confederación Nacional Campesina (CNC), entre las que destacan una diversidad de figuras asociativas, formadas durante el sexenio de Luis Echeverría Álvarez, como las asociaciones rurales de interés colectivo, uniones de ejidos, sociedades cooperativas, sociedades de producción rural, unidades agrícolas industriales de la mujer, y otras derivadas de programas especiales. En el marco del sector privado rural destacan las organizaciones de los pequeños propietarios, como la Confederación Nacional de la Pequeña Propiedad (CNPP), la Confederación Nacional Ganadera (CNG) y las asociaciones y uniones locales y regionales de productores (García, 2003).

Entre las organizaciones civiles que pueden definirse como independientes del Estado, porque se desarrollan fuera de las instituciones estatales, destacan los clubes, sobre todo, el Club de Leones y el de Rotarios, y algunas organizaciones civiles de intereses privados. Sin embargo, sus miembros son individuos que están articulados a los gremios económicos y a las instituciones políticas y partidistas, por lo que difícilmente puede establecerse que estas organizaciones definieran formas autónomas de participación política.

El carácter rural de la mano de obra y de la población local y regional mayoritaria, marginadas de las transformaciones que estaban ocurriendo en el plano nacional, posibilitó en el espacio urbano la permanencia de un sistema de organizaciones civiles que en su articulación con el sistema de organizaciones corporativas del Estado, posibilitada la regulación de las presiones y tendencias del cambio social. Pero no sólo eso, posibilitó también la percepción de que el cambio, entendido como el mejoramiento sustantivo de las condiciones de vida y de trabajo vendría, como en el pasado inmediato había ocurrido en otras entidades federativas y regiones del país, del Estado mexicano a través de sus instituciones.

En el escenario político local, los actores decisivos eran los “líderes obreros, campesinos y de la burocracia”, en tanto instrumento de unión e impulso de las demandas *populares*. La simbiosis con el partido de Estado, los llevaba a desempeñar roles que en términos formales les correspondían a los partidos políticos y a los ciudadanos. Actores importantes también eran los líderes de los sectores empresariales y el conjunto de sus mediaciones unidas al carro del corporativismo. Bajo esta lógica se entiende el sentido que en el imaginario colectivo tenían las acciones y prácticas que derivaban en una forma recurrente de acción y participación política. Nos referimos a las movilizaciones que los distintos sectores de la sociedad estaban obligados a realizar ante la presencia de la figura presidencial, de algún secretario de Estado, del gobernador e incluso de algún político oriundo de Comitán con trayectoria política en la capital del país. La expresión más acabada de la forma corporativa de participación política tenía lugar en los tiempos electorales, con el voto corporativo.

Cuando llegaba un político importante a Comitán, al presidente y a todas las autoridades del municipio les “volaba el pelo”. Se ponían como locos y prácticamente convocaban a todos los sectores de la sociedad a organizarse y a esperar la llegada del “fulano”. Hasta los maestros y los niños de la escuela iban a formar una gran valla en las calles o en la carretera, aunque algunos de los niños llegaran a desmayarse por el calor. La llegada de los políticos importantes a nuestra tierra, era porque iban a anunciar alguna obra importante para Comitán y la región Fronteriza, o porque el presidente municipal o el gobernador le iban a solicitar al funcionario federal que realizara obras para Chiapas, escuelas, carreteras y servicios. En ese tiempo era puro priísmo.

Las campañas políticas las organizaba el partido y los sectores. Se preparaban con mucho tiempo y cuando los candidatos competían por la “grande”, las campañas se ponían buenas, se movilizaba a todos los sectores del partido y sus dirigentes, la CNC traía en camiones a la gente de los municipios y las comunidades, otros, los más ricos, venían por su cuenta para juntarse con los de sus organizaciones, la de los ganaderos y los propietarios, aunque casi todos estos residían en la ciudad. En la ciudad, estaban los sectores organizados por la CNOP, la CTM, la CROM y los sindicatos de los maestros y de los otros trabajadores del gobierno. Las campañas eran como “la carta a Santa Claus”, *por pedir no parábamos* (Entrevista anónima, abril, 2003).

3.3 Las primeras trincheras de la oposición vinieron del campo, no de la ciudad: El movimiento campesino

Por la impronta colonial de su historia, que registró las expresiones más acabadas de un sistema oligárquico activado por los colonizadores primero y por una élite criolla después, Comitán y su entorno regional, era tierra fértil para el impulso de un movimiento campesino. La historia local y regional darían los ingredientes para un discurso ideológico que legitimaría una lucha justa. Encomienda, tributo, baldiaje y trabajo de jornaleros y peones a fines de la colonia; trabajo forzado, repartimientos, renteros y peones que hacen del sistema de fincas el eje de la sociedad en los siglos XVII y XVIII; y el crecimiento de este sistema con las tierras comunales y la expulsión de los dominicos como consecuencia de las leyes de reforma en el siglo XIX, era el sustrato material que daba cuenta de la explotación bajo la dirección y el control de una élite formada, primero, por los colonizadores, su parentela y los funcionarios de la Corona, y la Iglesia; después por una élite criolla ampliada y fortalecida con las tierras de la Iglesia y de las comunidades indias, que dieron lugar, a mediados del siglo XIX, al mayor esplendor y apogeo de las fincas comitecas (Ramos, 2000).

Esta historia, que se generalizaba para algunas regiones de Chiapas, abonaba por la lucha de clases y sólo bastaba recuperar la historia de familias y personajes que, con base en la riqueza y el poder, se habían venido convirtiendo de manera casi expedita en clase gobernante. Las familias Velasco, Ruiz, Armendáriz, Villatoro, Álvarez, Solís, Gordillo, León, Argüello, Guillén, Roveló, Castellanos, Domínguez, De la Vega, Cristiani, Albores, se convertirían en ejemplo vivo de la continuidad de un sistema oligárquico que se las arreglaba con el gobierno federal para no perder riqueza y poder político (Escalante, 1991). Como en el conjunto de la entidad, los datos oficiales de los censos, permitían validar este diagnóstico, pues en 1970 la concentración de la tierra en la región, era aún significativa, por lo que había otro

argumento para asumir como propia la militancia activa contra la clase que detentaba grandes y medianas extensiones de tierra.

La burocratización, la no ejecución de las resoluciones presidenciales, la realización de deslindes incorrectos, la dotación de las mismas tierras a dos o más ejidos, eran hechos reales que estaban explicando la emergencia de un movimiento campesino, que abandonaba la tortuosa gestoría ante las instancias pertinentes y ante las organizaciones corporativas del partido oficial, optando por la vía de la militancia y la lucha directa que posibilitaba denunciar el carácter capitalista del Estado mexicano y de su sistema político (Villafuerte, et. al, 1999b).

Pero Comitán y su entorno regional no fue parte activa de la primera etapa del movimiento campesino chiapaneco, aunque de acuerdo a González (1989: 121-122), una de las vertientes del movimiento campesino estaba dada por el Congreso Indígena, realizado en 1974 en San Cristóbal de Las Casas, cuya cobertura comprendió el área de trabajo de la diócesis de San Cristóbal, de la cual Comitán y la región Fronteriza eran parte. Las otras dos vertientes aludían a la Alianza Campesina 10 de abril, creada en 1976, y a la lucha de los comuneros de Venustiano Carranza, que integraba a algunas comunidades de los municipios de Teopisca, Villa de Las Rosas y el ejido Ricardo Flores Magón.

Las crónicas de esa década registran que las primeras expresiones del movimiento campesino chiapaneco se desarrollaron en la región Norte del estado, en los municipios de Simojovel y Villaflores en donde campesinos se movilizaron para la toma directa de predios, articulándose después con campesinos de Chiapa de Corzo, Tzimol y Socoltenango, formándose la organización Alianza 10 de abril con el apoyo de estudiantes chiapanecos; así también en el municipio de Venustiano Carranza en donde se reactivó la lucha por la recuperación de tierras comunales (González, 1989; Pontigo, 1985; Renard, 1998).

En 1974 la región Selva se incorporará como un espacio de lucha agraria, aduciendo, primero el impacto que traería la publicación de un decreto publicado por el *Diario Oficial* en donde se registra la titulación de 614,000 a 66 comuneros lacandones, quedando dentro de esta área 23 pueblos choles y tzeltales que tenían dotaciones en trámite (González, 1989: 126; Harvey, 1990). Un último registro de movilizaciones campesinas con fines agrarios, tuvo lugar en la Costa, en los ejidos Francisco Villa, Emiliano Zapata y Las Brisas de los municipios de Arriaga y Pijijiapan (González, 1989: 127).

Definida esta etapa del movimiento popular como manifestaciones de descontento que, desde el seno de las localidades y comunidades campesinas, proyectaron acciones de movilización radical sustentadas en una realidad que invocaba el avance de los ganaderos sobre terrenos de comunidades y ejidos; la ocupación y el despojo de tierras por parte de dependencias, como la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la existencia de terratenientes cuyas propiedades se habían expandido sobre tierras comunales desde el siglo XIX al amparo de las leyes de Reforma y del porfiriato, se identifica una ampliación de actores que posibilitarán la entrada a una segunda etapa, que algunos estudiosos definirán de avance y consolidación del movimiento (González, 1989).

En efecto, ya entrada la década de los setenta se tiene la presencia de los partidos políticos de oposición al PRI como el Partido Comunista Mexicano (PCM), el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y el Partido Mexicano del Trabajo (PMT). Estas organizaciones partidarias si bien no habían logrado incidir de manera directa en el movimiento campesino, sí se constituyeron, ante los medios de comunicación nacional, ante el propio Congreso de la Unión y otros foros, en los portavoces de las acciones emprendidas por grupos de campesinos que habían decidido por sí mismos defender sus derechos y denunciar las múltiples violaciones de que eran objeto por parte de terratenientes y políticos locales. La socialización de

estas denuncias terminaron por legitimar la presencia de organizaciones de cobertura nacional, quienes terminaron no sólo por impulsar y asesorar los procesos organizativos locales, sino también por asumir la representación política de las bases campesinas.

Ya en 1978 se registra la presencia de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), brazo campesino del Partido Comunista Mexicano (PCM), y la Organización Ideológica Dirigente (OID), llamada también Línea Proletaria, en regiones muy puntuales: en algunos ejidos de municipios de la región Norte y en la Selva Lacandona, y en menor medida en la frailesca (González, 1989; Harvey, 1990). Sin embargo, es durante los años de 1980-1984 cuando el movimiento campesino chiapaneco es representado por tres organizaciones, la CIOAC, la Unión de Uniones Ejidales y Grupos Campesinos Solidarios de Chiapas (UU) y la Coordinadora Provisional de Chiapas, que en 1982 asume el nombre de Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ).¹⁹

Estas organizaciones incorporarán en su área de trabajo político a la región fronteriza, de la cual forma parte el municipio de Comitán. De hecho, derivado del Congreso Indígena de 1974, en el municipio de Las Margaritas se habían creado las organización Tierra y Libertad y Lucha Campesina, que junto con la Quiptic ta Lecubtsel (Ocosingo) formarán la Unión de Uniones²⁰. De igual manera, la OCEZ

¹⁹ El origen de la OCEZ es la Coordinadora Provisional creada en 1980, en torno a la lucha que sostenía la comunidad indígena tzotzil de Venustiano Carranza por la restitución de sus tierras en manos de terratenientes de la región. En 1982 esta coordinadora, no sin antes articularse a la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA), se transforma en la Organización Campesina “Emiliano Zapata” (OCEZ), ampliando su radio de acción a las regiones centro, norte y fronteriza. La plataforma ideológica-política de esta organización no contemplaba alianzas con los partidos políticos o con el gobierno, estableciendo que la mejor estrategia de un movimiento independiente eran las alianzas de clase a nivel popular y nacional que permitiera la formación de un frente “popular”.

²⁰ El Congreso fue convocado por el gobierno del estado, como parte de la celebración del 500 aniversario del nacimiento de Fray Bartolomé de Las Casas, sin embargo, el papel protagónico de la diócesis de San Cristóbal, hizo del Congreso una plataforma de denuncia y de demandas básicas como: tierra, salud, educación y comercio (Morales, 1992).

contempló en su área de acción a la región Fronteriza, sin embargo, quien se va a figurar de manera significativa por sus acciones de movilización es la CIOAC que vio en esta región el espacio idóneo para su trabajo social y político.

Hasta aquí, es posible una lectura de los procesos sociopolíticos donde se identifica el liderazgo de organizaciones sociales y partidistas que, aun cuando se les englobe con los términos de “izquierda” u “oposición”, y se definan como instancias que defienden los intereses de los campesinos e indígenas locales, tienen intereses y proyectos distintos que rebasan los intereses de la población nativa. Cuando a los lugareños se les pide que identifiquen quienes o qué organizaciones impulsaron la idea de luchar por sus derechos agrarios y laborales, responden comúnmente con expresiones como “los norteños”, porque venían del Norte del país; “los cioaqueros de México”, o hacen referencia a un líder que “vino de fuera”. Las investigaciones sobre casos específicos, son ricas en identificar las tensiones derivadas de intereses antagónicos entre los líderes “externos” y los pobladores, sobre todo de aquellos que habían establecido un papel de liderazgo en el seno de la localidad. A este respecto, los estudios son reiterativos en una narrativa: los campesinos dijeron “los corrimos porque no estaban defendiendo nuestros intereses”, o “porque estaban negociando con el Estado sin nuestro consentimiento” (Pontigo, 1985; González, 1989).

El peso de la organización y de los líderes “externos” es crucial en el desarrollo de un movimiento campesino tan diverso, como diversas son las regiones de Chiapas y sus problemáticas. Sin embargo, las tensiones más significativas que muestran la variedad de intereses y proyectos en disputa, es la que se deriva de las relaciones entre las organizaciones sociales o partidarias y el Estado. Harvey (1990) estudioso del movimiento campesino de Chiapas, identificó a este respecto, dos niveles de relaciones: las que la organización establecía con el gobierno federal y las que establecía con el gobierno chiapaneco.

En este tenor, Harvey identifica tres modelos de relaciones: de confrontación radical; de negociación, movilización y de lucha partidaria por el poder político; y, de negociación directa con la esfera federal. Estas relaciones están expresadas en la Organización Emiliano Zapata (OCEZ) que impulsa uno de los movimientos regionales más importantes en la región Centro del estado, particularmente en el municipio de Venustiano Carranza; la CIOAC que abanderó las primeras movilizaciones de los expeones de la región norte y, la Unión de Uniones (UU) que encabezó el movimiento campesino de la región Selva.

Estas expresiones de acción y movilización social bajo el liderazgo de esas tres organizaciones, han impactado al conjunto de las entidades colectivas en el campo chiapaneco. En la región de estudio, y Comitán como el centro político de la región Fronteriza, la presencia activa de estos liderazgos se hizo visible en la década de los ochenta, particularmente la de la CIOAC que para esos años intensifica sus acciones en el área de estudio. En los años de gobierno del General Absalón Castellanos Domínguez (1982-1988), oriundo de Comitán, diversas regiones del estado fueron escenario de importantes movilizaciones campesinas y de cruentas represiones de carácter institucional y privada. Destaca aquí el asesinato de uno de los dirigentes de la CIOAC y diputado federal por el PSUM, Andulio Gálvez, hecho que fue llevado a cabo en las oficinas de dicha organización en la Ciudad de Comitán, el 4 de octubre de 1985.²¹

²¹ En Chiapas se sabía que Castellanos Domínguez era parte de la élite comiteca que radicaba en el centro del país, y su apellido se vinculaba a propietarios de grandes extensiones de tierra en la región, particularmente en los municipios de las Margaritas y La Independencia. Sobre la represión que vivieron las organizaciones en el estado durante su período de gobierno, Carlos Tello Díaz afirma que tanto la OCEZ como la CIOAC estaban acostumbradas a la represión y empleaban métodos más o menos extralegales en su lucha por la tierra y que su proclividad a responder a la violencia del gobierno con el enfrentamiento, fue muy desafortunada, pues significó que terminaran ambas a la larga, divididas y desgastadas, lo que no sucedió con la Unión de Uniones, cuyos dirigentes evitaron quedar atrapados en la lógica de la confrontación, lo que permitiría después al EZLN acumular fuerzas en silencio (Tello Díaz, 2000 [1995]).

Comitán se vuelve la caja de resonancia de las estrategias y acciones de la CIOAC, que terminó por operar desde uno de los municipios en donde actualmente cuenta con un trabajo organizativo sólido, el municipio de Las Margaritas, iniciando desde ahí su despegue hacia otros municipios de la región Fronteriza. Entre sus acciones, además de la lucha agraria, está la formación de uniones de créditos que le permitirá entrar al área de la producción agropecuaria, hacer suyas las demandas de apoyos a los productores del sector social y con ello, fortalecer el trabajo político partidario. Su apoyo primero al Partido Socialista Unificado de México (PSUM), luego al Partido Mexicano Socialista (PMS) y desde 1989 al Partido de la Revolución Democrática (PRD), lo convierten en una organización que está en la mira de las otras fuerzas políticas que compiten por el poder político, por el capital social y por los recursos financieros de las instituciones públicas. A inicios de los años ochenta se hizo visible en la región Fronteriza la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ), cuando miembros de algunos ejidos y comunidades de Chicomuselo, Frontera Comalapa, Las Margaritas y La Independencia, pasaron a formar parte de su militancia.

El trabajo de la Unión de Uniones se focalizó en la región Selva. Los líderes, prácticamente todos del centro y norte del país, tenían como contrincantes o aliados, según la coyuntura, a los miembros religiosos de la diócesis de San Cristóbal y a los líderes religiosos cristianos no católicos. Su confrontación inicial con el gobierno federal, para después colocarse en oposición al gobierno estatal y aprovechar las ventajas ofrecidas por ciertos funcionarios federales, le permitió a la dirigencia de la Unión de Uniones entrar al campo de la producción con bastante éxito. Algunas oficinas e infraestructura de esta organización se establecieron en Comitán, además de ser el escenario de muchos de sus eventos, desde movilizaciones hasta congresos y foros campesinos.

3.4 El movimiento magisterial: un paso a la ciudad

Al movimiento campesino chiapaneco se le sumó un movimiento que posibilitó el tránsito de la acción colectiva y la participación política opositora hacia el espacio urbano y su sociedad. Nos referimos al movimiento magisterial, cuya expresión explosiva en Chiapas, además de las tensiones internas entre los trabajadores de la educación y su dirigencia sindical, estuvo condicionado por los impactos sociales que en la entidad generó la crisis del Estado mexicano. Los trabajadores de la educación sintetizaban la situación crítica de la sociedad rural y urbana, en términos de la falta de los satisfactores básicos de subsistencia biológica, perceptible en los niños que acuden a la escuela; también en la falta de servicios e infraestructura como la falta de escuelas con las condiciones mínimas para la atención de los niños, además de otros servicios como agua, drenaje, luz y caminos.

Inicialmente el movimiento magisterial intentó articularse al movimiento campesino, en 1985 se formó la Coordinadora de Lucha de Chiapas (CLCH), con militantes de los sectores del magisterio ‘democrático’, colonos, transportistas y estudiantes, sin embargo, la coordinadora se disolvió un año más tarde. Los primeros contactos de la sociedad urbana con movilizaciones sociales venían del gremio magisterial cuyo primer oponente es un sindicato nacional “charro” y un gobierno federal que legitima a dicho corporativo sindical. La lucha magisterial tenía una cobertura que iba más allá de las fronteras del territorio chiapaneco, pero las particularidades hacían referencia a sus nexos con su entorno inmediato: por un lado, las comunidades rurales y las condiciones de miseria y subdesarrollo de los alumnos y sus familias; por otro, la carestía de la vida y la falta de vivienda y servicios en los espacios urbanos.

En el espacio urbano –la capital del estado y otras ciudades como Tapachula, San Cristóbal y Comitán-, el movimiento magisterial atrajo multitudinarias

movilizaciones con la participación de maestros, alumnos, padres de familia, amas de casa, campesinos y colonos, generando no sólo la posibilidad de abrir espacios de lucha laboral, sino también espacios de lucha en materia de justicia social, en relación directa con los servicios urbanos, y sobre todo, en el campo de la participación política y la democratización de los espacios cotidianos de trabajo que refieren a la burocracia y administración pública.

Estos campos de lucha no lograron cristalizar, inevitablemente afloraron las tensiones y conflictos tanto al interior de las propias organizaciones que se asumieron opositoras al régimen o independientes y entre éstas y las esferas de gobierno federal y estatal. Para la segunda mitad de los ochenta, el movimiento magisterial entró en una dinámica de confrontaciones internas que le imposibilitaron asumir el liderazgo que en ese momento exigían los sectores populares.²² En el mismo sentido, las organizaciones campesinas también enfrentaban divergencias, y las organizaciones urbanas aún no lograban despegar más allá de situaciones coyunturales. Sus demandas seguían el formato tradicional, clientelar y corporativo.

La sociedad comiteca no fue ajena al movimiento magisterial. Como centro rector de la región Fronteriza absorbía e incorporaba las tensiones que los movimientos campesino y magisterial generaban en la dinámica sociopolítica, demográfica y económica regional y estatal. Sin embargo, el impacto del movimiento magisterial, al igual que el movimiento campesino, no se tradujo en un impulso real de movilización de la población mayoritaria del municipio y de la ciudad de Comitán, lo que no significa que no se dieran expresiones aisladas de inconformidad social,

²² En el movimiento magisterial tenían lugar fuertes conflictos internos por la diversidad de fuerzas ideológico-políticas. La articulación del movimiento magisterial con el movimiento campesino fue fugaz, ciertamente se creó en 1989 una organización comandada por maestros, Solidaridad Campesino Magisterial (SOCAMA), pero a la luz de los años tampoco logró lo que en sus inicios se había planteado. Los maestros, seguirían movilizándose por demandas salariales, pero no más. En el marco de SOCAMA se constituyeron figuras asociativas legales, lo que le permite mayor espacio para el acceso a recursos crediticios y apoyos del gobierno.

pero éstas no lograban trascender las coyunturas y converger en esfuerzos colectivos que potencializaran dichos reclamos.

3.5. Entre los intereses de clase y la defensa de las “identidades” restringidas

La acción colectiva de la sociedad regional y local no se limitaba a esas dos experiencias del movimiento *popular*. Otros actores, a veces reacios a las alianzas y otras veces impulsores de éstas, aparecen en la escena pública impulsando la defensa de los sectores sociales más desprotegidos, sin que necesariamente se invoque la dimensión de clase, pero sí, con un sentido ético o moral del hombre y la sociedad.

En la segunda mitad de la década de los setenta, en el municipio de Comitán y su cabecera se registra una experiencia organizativa que intentará, bajo un principio ético, articularse a los movimientos *populares* del municipio y la región Fronteriza y posteriormente, a la coyuntura abierta por los refugiados guatemaltecos²³, en donde cobra peso un sujeto social que es invocado como “pobre”, excluido del mundo moderno y por la guerra, violentado en sus derechos humanos. Me refiero al trabajo social realizado por algunos médicos que laboraban en el Hospital General de Comitán. Quienes participaron en esta experiencia colectiva, recuerdan que todo comenzó cuando en 1975 fue nombrado Director del hospital el Dr. Roberto Gómez Alfaro, un médico que había comenzado su participación política en la mitad de los años sesenta en la Ciudad de México, desde que era interno de pre-grado en el centro hospitalario “20 de noviembre”.

²³ A principios de los años ochenta comenzaron a llegar a los municipios fronterizos del estado de Chiapas, grupos de indígenas provenientes de Guatemala, debido a la política de “tierra arrasada” del gobierno de ese país, y a los enfrentamientos armados entre las fuerzas gubernamentales y las fuerzas guerrilleras de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG). Este fue el inicio del proceso de refugio guatemalteco en México.

Bajo el liderazgo del doctor Gómez Alfaro, algunos médicos y enfermeras se dieron a la tarea de realizar trabajo social, particularmente en las zonas rurales, pues consideraban que la población urbana era poco sensible. Pero la realización de esta tarea por parte del personal de dicho hospital involucraba a otra institución que había optado por “la liberación de los pobres”: la diócesis de San Cristóbal. La relación entre los médicos y enfermeras se dio a través de la mediación de las Comunidades Eclesiales de Base (CEB) que como parte de sus actividades habían incorporado el trabajo de sensibilización social y política en la población de la localidad, impulsando la atención básica de la población, entre ella los servicios de salud. Los médicos y las enfermeras tuvieron una aceptación inmediata.

Gómez Alfaro narra como le impactaron las visitas a las localidades campesinas e indígenas del municipio y de otros municipios de la región Fronteriza, constatando el hambre y la miseria de la población, situación que le impulsa a desarrollar una estrategia de trabajo desde la dirección del Hospital General de Comitán:

Cuando llego a la dirección del hospital éste era una casa bonita, un ‘cacashte’ bonito, pero no había mesa de operaciones, no había nada, nació de cero. Don Octavio Esponda, que en paz descansa y que fue el primer director, decía que Luis Echeverría vino a decir ‘coman gallina pero no dejó para la gallina’. Echó a andar el hospital, pero no dejó nada, fue una improvisación increíble. Yo entré a la selva y realmente era impactante, yo nunca había visto el hambre en forma tan terrible, unas anemias increíbles, parasitosis, desnutrición, eso impacta. Fuimos periódicamente entonces a atenderlos, a darles consulta, a llevarles medicina y posteriormente se hizo un trabajo gracias a la organización del Dr. Ernesto González de la Torre y al Instituto de la Escuela Superior de Medicina del Politécnico. Hicimos un programa de medicina rural a través del cual los pasantes iban a esas zonas (entrevista, abril 2004).

El doctor Gómez Alfaro estaría 11 años como director del hospital, de 1975 a 1986, y junto a un equipo de médicos y enfermeras se dedicó a hacer labor social en las zonas rurales de los municipios de Las Margaritas, La Independencia y La Trinitaria, formando promotores de salud. Prácticamente dirigió el hospital de manera

independiente, lo que hacía que hubiera una confrontación permanente con las autoridades y con los servicios coordinados de salud. A este respecto comenta:

Preparábamos a quienes eran nombrados por su comunidad, en un primer nivel como promotores de salud, luego se extendió a promotores agrícolas y otras cosas. Tuvimos todas las experiencias habidas y por haber, desde que formamos explotadores de la comunidad, el cuate que tenía el conocimiento y después ya era el doctor y pedía la gallina, el puerquito, los huevos, para dar las consultas, hasta ejemplos extraordinarios de gente que se dedicó a servir a la comunidad. Creo que estos fueron la mayoría, duraban un año con nosotros de promotores, les enseñábamos a poner un suero, a inyectar, a diagnosticar la parasitosis, a captar cuando un embarazo venía mal y nos coordinábamos con las parteras.

A los promotores de salud también tratábamos de formarlos políticamente, motivarlos para que trabajaran y produjeran más, de que hicieran un trabajo en común para beneficio de la comunidad, una parcela para que el usufructo de esa fuera para la casa de salud, llegamos a tener como 30 casas de salud, muy humildes, casitas de palito, con su cama de palitos.

Pero no bastaba con ir a dar consultas, sino que ves que el hambre es un problema político, que las soluciones tienen que ser políticas. Entonces comienzo a participar políticamente, entendiendo ésta, la política, como servicio, como la capacidad de utilizar los recursos del pueblo en beneficio del mismo. Creo que el hospital de Comitán fue un buen ejemplo de eso, durante todo el tiempo que nosotros estuvimos ahí, sin recursos, en contra del gobierno, llegamos a trabajar hasta un 300% de ocupación. Cuando yo llego al hospital lo recibo con 24 camas, cuando salgo lo dejo con 64 camas, pero llegamos a tener hasta 150 enfermos, en los pasillos y en todas partes se atendían a los enfermos, sobre todo cuando llegaron los refugiados (entrevista, abril 2004).

La articulación del trabajo pastoral de la diócesis con el trabajo de este grupo de médicos y personal técnico y de apoyo, empieza a ser mal visto por algunos segmentos de la población comiteca, y por los grupos de poder de otros municipios de la región, creándose primero un rumor y después un discurso ideológico que los acusa de radicales y comunistas. La trayectoria de estos liderazgos sociales caminaba si bien con la aceptación y participación de la población de las localidades con muchas dificultades por la escasez de recursos materiales y humanos. Sin embargo, los acontecimientos por venir abrirán un parteaguas en la sociedad regional y en el comportamiento de estos actores.

Creo que esto ocurrió despuecito del sexenio de José López Portillo. Se vino la bronca de los guatemaltecos, llegaron a Chiapas, creo que también a Quintana Roo, Campeche y Tabasco, huyendo de la guerra de su país. Comitán y Chiapas se convirtieron en tierra de refugio y con ellos también llegaron muchas organizaciones internacionales y organizaciones de la sociedad civil nacional. Casi todas establecieron oficinas en Comitán. Sé que trabajaban con los refugiados pero no dudo que trajeran otros intereses ocultos, porque también por eso años estaba prendiendo mucho el conflicto agrario, en donde se enfrentaban los campesinos encabezados por organizaciones nacionales con el gobierno y las autoridades del estado y de Comitán, también de Las Margaritas y La Independencia o Socoltenango. Los propietarios afectados con las invasiones tampoco se quedaron atrás, se organizaron y se defendían. (Entrevista anónima, abril 2003).

En efecto, la guerra civil en Guatemala y la conflictiva centroamericana hicieron de Chiapas un espacio estratégico de seguridad nacional, pero también un espacio en donde la diplomacia mexicana intentará darle contenido a los principios marcados por las Naciones Unidas en materia de refugio. México, a través de la frontera sur, dio refugio a más de 46 mil indígenas campesinos guatemaltecos que huían de la persecución militar en su país. De acuerdo a el Alto Comisionado para Refugiados (ACNUR), de 1982 a 1985 se vivió la fase de emergencia del proceso de refugio y la fase de asistencia de los años 1986 hasta 1998 (ACNUR, 2001). Como proceso de largo plazo y debido a la compleja problemática social que entrañaba, podemos decir que el proceso de refugio guatemalteco en tierra chiapaneca contribuyó a complejizar el entramado relacional de la sociedad local, pues nuevas “identidades” se incorporaban a la dinámica sociopolítica con formas inéditas de participación política en las que se pone en juego el amplio repertorio de los derechos humanos incluyendo los derechos llamados de “tercera generación”.

La reconstrucción local del problema de los refugiados guatemaltecos en el municipio y su entorno regional resulta esclarecedor en muchos sentidos. Para una población poco acostumbrada a las multitudes, la llegada de miles de guatemaltecos huyendo de la política de tierra arrasada de su gobierno, constituía una alteración a su

vida cotidiana. La presencia de personas adscritas a organizaciones no locales, con una diversidad de acciones que iban desde la instalación de albergues en la ciudad y en las cabeceras municipales de los alrededores, hasta la prestación de los servicios básicos garantizando a la población refugiada ayuda humanitaria como alimentos, ropa, medicinas y enseres más indispensables, era un escenario prácticamente inédito.

Una parte de la población de la ciudad miraba la llegada de la población refugiada de manera hostil, pues se le relacionaba con la socialización e influencia de ideas revolucionarias, además de considerarla como una carga para el gobierno mexicano en términos de generación de empleos y apoyos asistenciales, en franca competencia con la población nacional. Por el contrario, en las zonas rurales del municipio de Comitán y de los municipios cercanos, grupos organizados por la defensa del acceso popular a los servicios de salud, realizaban actividades de apoyo a la población refugiada. Las acciones de estos grupos se daban en torno a los médicos del Hospital Regional de Comitán. Quien entonces fungía como director del Hospital narra sobre su experiencia:

El trabajo de los refugiados fue muy interesante, vino a traer una sobrecarga de trabajo sobre un hospital que ya estaba de por sí saturado y sin recursos. Se hizo un trabajo coordinado con la diócesis de San Cristóbal, con don Samuel y con el Instituto Nacional Indigenista. El trabajo de la selva con los promotores ya estaba iniciado y eso lo extrapolamos a los campamentos, los refugiados respondieron muy bien, tenían todo el tiempo porque no podían trabajar. Se diversificó un poco el servicio a la comunidad: promotores de salud, agrícolas, porcícolas. A raíz de eso muchas organizaciones internacionales como *Pan para el mundo* (alemana), *Médicos sin Fronteras*, *Médicos del Mundo* (francesa), *Niños Refugiados del Mundo* (francesa) y algunas organizaciones españolas comenzaron a enviar recursos al hospital de Comitán, recursos que se repartieron a los refugiados guatemaltecos y a los campesinos indígenas. Por primera vez en su vida (Ahí vi el milagro de los panes), el hospital comenzó de repente a recibir recursos. Luego contactó con nosotros ACNUR y apoyaron durante muchísimo tiempo (Gómez Alfaro, entrevista, abril 2004).

En efecto, en el apoyo al proceso de refugio destacaban de manera importante las acciones del personal de la diócesis de San Cristóbal de Las Casas, a través del Comité Cristiano de Solidaridad, cuya sede se encontraba precisamente en la ciudad de Comitán. Muchos de sus feligreses en la región pertenecían a organizaciones campesinas que se reivindicaban ‘independientes’ del gobierno y su trabajo político encontraba apoyo en el quehacer de los agentes de pastoral de la diócesis en la región, concretamente de la orden de los maristas. El apoyo a la problemática de los refugiados era también un punto especial de la actividad de asociaciones sectoriales de estudiantes y del magisterio, a la par de la lucha por sus reivindicaciones estudiantiles, laborales y sindicales.

También se instalaron en la ciudad organizaciones gubernamentales como la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR),²⁴ del Sistema de Naciones Unidas como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR)²⁵, así como los primeros organismos no gubernamentales, como Promoción de Servicios Comunitarios, A. C. (PROSECO), dedicados al área de salud comunitaria. A la ciudad se incorporó una pequeña población foránea que llegó para trabajar con organismos públicos y civiles en actividades relacionadas con el refugio de los guatemaltecos que se asentaron en tierra chiapaneca.

Al establecimiento de la COMAR, del ACNUR y de otras agencias humanitarias internacionales y nacionales, se irá sumando un grupo importante de Organismos No Gubernamentales que instalaron su sede en Comitán, San Cristóbal y Motozintla, formadas en su mayoría por profesionistas y técnicos especializados, cuyos trabajos han sido diversos: asesorías, prestación de servicios profesionales en

²⁴ La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) surgió al inicio de los años ochenta para coordinar las actividades realizadas en apoyo a la población refugiada guatemalteca. Depende directamente de la Secretaría de Gobernación.

²⁵ El 6 de abril de 1983 se aprobó y promulgó el establecimiento de una oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR) en México, a fin de contribuir a la búsqueda de solución al problema de los refugiados. Diario oficial de la Federación, 6 de abril de 1983.

los ámbitos de la salud, desarrollo agropecuario, desarrollo comunitario integral, investigación. De esta manera surgieron organismos como la Confederación Internacional sobre Refugiados Centroamericanos (CIREFCA), el Comité Mexicano de Solidaridad con el Pueblo de Guatemala, la Organización de Mujeres Guatemaltecas Refugiadas Mamá Maquín, el Centro de Investigación y Acción para la Mujer de América Latina (CIAM), el Centro de Capacitación en Ecología y Salud para Campesinos (CCESC), PRODUSSEP y el Centro de Investigaciones en Salud de Comitán (CISC) (García, 1995). El proceso de refugio generó entonces el surgimiento de nuevas siglas, pero también innovó la acción social y gestó nuevas formas de lucha social.

De esta manera, la población local se fue acostumbrando al constante movimiento por la ciudad de la población refugiada, y de la población de “fuereños” llegada de otras partes del país y del mundo que trabajaban en los diferentes organismos civiles, gubernamentales, de la iglesia y de las Naciones Unidas. La población tuvo que acostumbrarse también a la presencia permanente de las tropas del Ejército Nacional Mexicano, pues el proceso de refugio representaba para el gobierno un problema de seguridad nacional. Muchos aún recuerdan que durante los primeros meses en que se instaló el ejército federal, coincidentemente se registraron muchos actos delictivos como riñas callejeras, violaciones a jovencitas y actos de hostigamiento y molestia a la población.

Además de la nueva dinámica cotidiana que todos estos actores le imprimieron a la ciudad y a la región en general, la población también experimentó sobresaltos continuos, como el día en que el ejército de Guatemala realizó una incursión armada al campamento de refugiados conocido como “El Chupadero”, resultando varias personas heridas y muertas. Las noticias de este lado de la frontera corrían como reguero de pólvora y la población se preguntaba azorada el por qué de tanta violencia, algunos incluso consideraban a todos los refugiados como

“comunistas” o “revoltosos”, pues sabían de la actividad guerrillera que enfrentaba al ejército de Guatemala.

Las familias más pudientes de la localidad, por lo general dedicadas al comercio, contribuían a generar estas ideas y se vivió un momento en que hasta las visitas a la iglesia representaban una toma de posición al respecto. De esta manera, asistir a la misa del templo de “San Sebastián” a escuchar las misas del “padre” Carlos Mandujano, o de su hermano el “padre” Raúl, representaba actuar dentro de la corrección y la decencia, en cambio, asistir a las misas que oficiaban en la iglesia “grande” o templo de Santo Domingo ubicado en el centro de la Ciudad, era como compartir las ideas “comunistas” ó “revolucionarias” con las que se asociaba a la diócesis de San Cristóbal.

La sociedad local, después de haber vivido una cotidianidad en donde parecía que prácticamente no ocurría nada, en la segunda mitad de los ochenta vive años azarosos por la convergencia de procesos sociopolíticos que amenazan no sólo con romper con el orden “tradicional” de antaño, sino sobre todo con la seguridad de futuro. No era sólo el problema de los refugiados guatemaltecos y sus secuelas en la vida social y política, como lo era la llegada de actores sociales de otras latitudes con propósitos definidos o la militarización de la región Fronteriza y las otras regiones colindantes con el vecino país; tampoco lo era el movimiento campesino en sí, que había años atrás había iniciado la lucha por la tierra y después la lucha por otros recursos; tampoco el centro de preocupación lo era el movimiento magisterial, un movimiento que contaba con el apoyo de la población local, en tanto la mayoría de los maestros tenían un origen humilde o de clase media, además del respeto a la figura del docente educador de los hijos de la población adulta.

El temor al desorden social residía entonces en la posibilidad de convergencia de estos frentes movilizadores. La población local no sólo era testigo, sino incluso

partícipe de movilizaciones como mítines y marchas del movimiento magisterial que se extendía a los estudiantes de la educación media y superior. Eran constantes las visitas de estudiantes de escuelas de otros municipios e incluso de normales rurales del país para apoyar a estudiantes de la localidad que reivindicaban el cumplimiento de demandas muy concretas de los centros educativos. La sociedad local sabía del auge que entonces vivía el movimiento magisterial chiapaneco, en alianza con el movimiento magisterial de Oaxaca. Se conocía y se aprobaba incluso, la realización de paros de labores realizados por el magisterio y de concentraciones o plantones en las cabeceras municipales y en Tuxtla Gutiérrez, la capital, para exigir solución a sus demandas de carácter laboral.

Es importante recuperar esta experiencia de movilización social, porque suele olvidarse que en el movimiento magisterial de esos años, quienes participaron no sólo fueron las dirigencias, los maestros y los estudiantes, sino también una parte importante de la población local. Pero, como decíamos, no sólo era el movimiento magisterial y estudiantil. Comitán y su entorno regional era también testigo, a veces activo, del movimiento campesino regional. A las marchas y mítines llegaban grupos de campesinos de las localidades del municipio, pero particularmente de las localidades rurales de los municipios de la región y de otras, como la región Selva, todos militantes de organizaciones campesinas que por sus idearios y plataformas políticas e ideológicas causaban desconfianza en la población local. Comitán como espacio de confluencia, geográficamente el punto intermedio entre los diferentes municipios de la región fronteriza, se convirtió en el escenario en donde tenían lugar las concentraciones campesinas regionales y fue uno de los puntos de partida de las primeras marchas caravanas a la ciudad de México, encabezadas por la OCEZ y la CIOAC.

De cara al conflicto centroamericano y la llegada a la región y al propio municipio de Comitán de miles de guatemaltecos en busca de refugio, el contexto

cambiaba radicalmente. La presencia activa del Ejército Mexicano, las incursiones de los militares a territorio chiapaneco y el discurso de la guerrilla eran factores que alteraban el marco de seguridad existente.

En el plano de la dinámica sociopolítica local causaba preocupación, decía, la posibilidad de una convergencia de los diferentes frentes de movilización social. Esta convergencia, de donde devienen las primeras diferencias y confrontaciones de la sociedad comiteca, de alguna manera ya se venían dando. El problema de los refugiados abonó y enrareció el contexto sociopolítico y permitió la construcción de un discurso hábilmente manejado por los sectores sociales más conservadores de Comitán.

En efecto, en Comitán ya era visible la orientación liberadora del trabajo pastoral de la diócesis de San Cristóbal y sus nexos con el personal del hospital de Comitán. Aunque no se sabía con precisión el carácter de las relaciones entre el personal de la diócesis y las dirigencias de las organizaciones campesinas, se sabía que había intereses comunes, manifiestos en el apoyo que desde el púlpito manifestaban los curas de la diócesis hacia la lucha de “los hermanos campesinos indígenas”.

Varios líderes de organizaciones campesinas de la región fronteriza refirieron que desde mediados de los años setenta comenzaron a participar con los curas, monjas y agentes de pastoral de la diócesis de San Cristóbal, particularmente en Chicomuselo, Frontera Comalapa, La Independencia, La Trinitaria, Las Margaritas y Comitán. Su participación comenzó realmente desde la catequesis, pues salían desde sus comunidades hacia “La Castalia”, ubicada en el barrio de *Yalchivol* y a la “Casa de Los Maristas”, en el barrio de *Las siete esquinas*, con el propósito de ser capacitados y poder predicar la palabra de dios. Los líderes más jóvenes iniciarían su relación con la diócesis a principios de los años ochenta. Recordaron que en las

reuniones a las que asistían a la Ciudad de Comitán, comenzaban haciendo una oración y luego participaban bajo la modalidad de talleres de formación, teniendo como referencia al evangelio, para posteriormente reflexionar sobre la situación del “proyecto del pueblo” que era nombrado como “el proyecto de vida”. Se hacían análisis de coyuntura o de la realidad, en donde se abordaba la situación económica del país, del estado, de las comunidades, continuando luego con el análisis de lo social y lo político. Se analizaba “el proyecto de dominio de los poderosos”, del gobierno, que también era nombrado como “el proyecto de muerte”, y se reflexionaba sobre el camino que señalaba el evangelio para la “liberación del pueblo”. Eran parte del proyecto de vida en esa concepción de la diócesis, las nacientes organizaciones campesinas como la OCEZ y la CIOAC y los refugiados guatemaltecos.²⁶

Estos dirigentes de las organizaciones campesinas también compartieron su recuerdo sobre las reuniones que se realizaban en el seminario de San Cristóbal de Las Casas, a donde acudía un equipo más selecto de catequistas de diversas regiones del estado, a quienes el personal de la diócesis ubicaba con ciertas habilidades de liderazgo. Se comparaba lo que estaba pasando en cada región para analizar las coincidencias en la situación del “pueblo mayoritariamente pobre”. En estas reuniones también se hacían análisis de coyuntura, incluso la diócesis facilitó la publicación de un folleto que se imprimía en el seminario, el cual recogía las narraciones de los catequistas y sus propias ilustraciones, al que llamaron “Nuestra palabra”, encargándose ellos mismos de hacerlo circular en sus espacios familiares y comunitarios. Tanto las reuniones de Comitán como las que se realizaban en San Cristóbal duraban varios días, por eso se hacían en las instalaciones de la diócesis que podían albergarlos, donde se les proveía hospedaje y alimentación.

²⁶ Esta metodología de análisis que utilizó la diócesis en la región fronteriza es similar a la que se implementó en la región selva, según refiere Carlos Tello, en su libro *La rebelión de las cañadas* (2000 [1995]).

Frente al problema de los refugiados guatemaltecos, quienes protagonizaron el apoyo material y logístico fueron la Diócesis de San Cristóbal, bajo el mando directo de su obispo Samuel Ruiz García, y el personal del Hospital General de Comitán. Para quienes recuerdan esos años, los comitecos vieron como toda la infraestructura material y logística de la diócesis y del hospital se volcaron hacia el problema de los refugiados. Si la “opción preferencial por los pobres” y la orientación de sus acciones pastorales hacia la población campesina e indígena le había valido la crítica y la oposición abierta de la población conservadora de la ciudad comiteca, asumir el apoyo a los refugiados, terminaba por asociar a la diócesis de San Cristóbal a una causa revolucionaria.

Lo más grave para los sectores conservadores locales era el apoyo y la solidaridad que empezaba a manifestarse hacia los refugiados y la lucha centroamericana por parte de las organizaciones campesina y magisterial. En efecto, Los miembros de algunas organizaciones campesinas empezaron a colaborar de manera solidaria para apoyar a los refugiados guatemaltecos, además de impulsar las relaciones políticas con el movimiento de resistencia de aquel país. El discurso de las luchas de liberación nacional del movimiento social de izquierda en los países centroamericanos encontraba eco en las organizaciones sociales chiapanecas, había un consenso en que el camino hacia la “liberación nacional” pasaba por la lucha de clases y por la revolución socialista. El contacto más próximo con la realidad de Guatemala lo representaba precisamente, la población refugiada.

Estos temores de la sociedad local se profundizaron también al politizarse el problema de los refugiados guatemaltecos, pues se hizo visible el protagonismo político de la diócesis de San Cristóbal, del personal del Hospital General de Comitán y de la mayor parte de los Organismos No Gubernamentales (ONG), articulados al problema del refugio y establecidas en la ciudad de Comitán. Las tensiones con el gobierno federal se dieron a través de la COMAR, organismo del gobierno mexicano,

al que se le acusaba de filtrar información sobre la situación, actividades y vínculos de los refugiados. Así nos lo expresa el médico que entonces dirigía el hospital:

Siento que COMAR era la infiltración del Estado mexicano, eran más espías, representaban la vigilancia y la represión hacia los refugiados que la ayuda que podían dar. Cuando mandaban médicos parecían judiciales, de medicina no sabían nada. Además ACNUR mucho tiempo subsidió a COMAR, el Estado mexicano no fue capaz de poner el recurso económico. Siento que el Estado mexicano hubiera sido feliz si no hubiera estado la diócesis, el hospital, el INI, porque hubieran podido regresar a los hermanos a Guatemala. Creo que si algo detuvo el regreso fue la diócesis fundamentalmente y un poquito con ella, el hospital de Comitán. En la zona urbana el Hospital General se coordinó con la diócesis de San Cristóbal, con la iglesia de Santo Domingo y particularmente con la orden de los maristas. La demanda de servicios rebasó la capacidad del hospital, sobre todo a nivel de niños, y en la casa de los maristas echamos a andar un albergue comunitario para los niños refugiados desnutridos, luego se llamó albergue de rehabilitación, estuvimos dando capacitación técnica, posteriormente con médicos, pediatras, nutriólogos, dos años y medio estuvimos con ellos, llegamos a tener 20 y hasta 30 niños (entrevista, abril 2004).

Concluamos que para una parte importante de la población comiteca los años de desorden social en la ciudad y en el municipio se dieron durante la administración del General Absalón Castellanos Domínguez,²⁷ en el que coincidieron varios movimientos sociales de cobertura estatal y regional, a los que se sumó el problema de los refugiados guatemaltecos, siendo las implicaciones más sustantivas de este último, la presencia de organizaciones no gubernamentales con acciones focalizadas en la población refugiada, pero haciendo extensiva su solidaridad por las acciones emprendidas por actores colectivos del sector *popular* local y regional.

La dimensión internacional del problema de los refugiados guatemaltecos generó dos lecturas que contribuyeron a radicalizar las posiciones de las fuerzas

²⁷ El Gral. Absalón Castellanos Domínguez asumió la gubernatura durante los años de auge de la guerrilla en Guatemala y de los demás países centroamericanos, cuando la población de la región fronteriza vio llegar a miles de refugiados guatemaltecos a Chiapas huyendo de la violencia del gobierno de su país, a través de las acciones de los *kaibiles*, grupo de élite del ejército de Guatemala. Castellanos Domínguez había sido director del colegio militar y posteriormente comandante de la 31ª zona militar en Chiapas. El gobierno mexicano veía en el General la garantía de mantener el orden social en una región de frontera, especialmente convulsionada.

internas: por un lado, bajo el liderazgo de la diócesis, personal del hospital de Comitán, ONG y organizaciones *populares*, quienes habían manifestado de manera abierta el apoyo y la solidaridad hacia los afectados de la guerra, se construyó un discurso que legitimó las luchas de liberación nacional de los países centroamericanos, considerando a los refugiados como víctimas directas de la represión militar. Bajo esta lectura, el discurso político involucra la crítica hacia el gobierno mexicano y sus instituciones responsables de atender y dar seguimiento al problema de los refugiados. Del Estado mexicano, como la “máquina represora” del sistema, no se podía esperar ninguna postura afín hacia la causa de liberación de los pueblos centroamericanos. La otra lectura hace de los contenidos de este primer discurso, la base para plantear que lo que está en juego es la lucha por imponer un sistema social “comunista”, “socialista”.

Evidentemente, quienes recuerdan esta etapa de la historia local y estatal, saben que a fines de los ochenta las movilizaciones sociales prácticamente habían desaparecido. El movimiento magisterial enfrentaba serias divergencias internas y había tomado su cauce más particular; el movimiento campesino por su parte, también se había fragmentado a grado tal que las tensiones entre sus dirigentes era un hecho cotidiano. Pero el hecho más importante de destacar es que las diferentes fuerzas opositoras estaban por decidir o ya habían decidido dirimir sus demandas y controversias por un cauce institucional.

La problemática de los refugiados guatemaltecos tomó una dimensión de carácter internacional, siguiendo su trayectoria bajo los lineamientos normativos establecidos por las Naciones Unidas y el gobierno mexicano. Marginalmente, continuaron los trabajos de las organizaciones no gubernamentales, financiadas por organismos internacionales. No obstante, como registra García (1995), en la medida en que el problema de los refugiados decrece, estas organizaciones incorporan entre sus beneficiarios a población indígena y campesina de la localidad y de la región.

Al paso de los años, la administración del refugio de la población guatemalteca entró a la llamada Fase de integración (1999–2001) y a la repatriación voluntaria a partir de 1988, lográndose el retorno de 43,000 refugiados a Guatemala. En el proceso de retiro organizado el ACNUR informa de la transferencia de recursos económicos, vehículos, equipos de cómputo y oficina a Organismos No Gubernamentales que tuvieron o tienen su sede en la ciudad de Comitán, entre las que destacan Desarrollo de la Mujer y la Niñez (DESMUNI); IDEFEM en servicios comunitarios y género, CADECO en educación y alfabetización, Promoción de Servicios Comunitarios (PROSECO), Niñas de Maíz, Sanatorio Fraternidad, Marie Stops International y Capacitación, Asesoría, Medio Ambiente y Defensa del Derecho a la Salud, A.C. (CAMADDS), en San Cristóbal de Las Casas (ACNUR, 2001).

Según datos proporcionados por la delegación de la COMAR en Chiapas, la población de personas provenientes de Guatemala que aún se encuentran refugiadas en México asciende a 14,954 personas (3,472 familias), mismas que están distribuidas en los municipios de Amatenango de La Frontera, Bella Vista, Chicomuselo, Maravilla Tenejapa, y de manera importante en La Independencia, Frontera Comalapa, Las Margaritas y La Trinitaria. (Comunicación directa con el delegado de la COMAR, enero 2004).

La presencia activa de una diversidad de organizaciones no gubernamentales en la cabecera municipal ha tenido repercusiones diversas en la población local. En la medida en que los trabajos de estos organismos civiles tienen incidencia directa con la población que recibe los beneficios directos o indirectos, es inevitable la socialización, en este segmento de la población local, del discurso civilista y antiestatalista contenido en los valores e imaginarios sociopolíticos que sustentan el trabajo práctico de estos organismos (García, 1998). Cuando estos organismos civiles operan fundamentalmente en las localidades rurales del municipio y de otros

municipios de la región Fronteriza, la relación con la población de la cabecera tiene un carácter pragmático, no hay interacciones formales o informales con las organizaciones sociales ni con las instituciones o las autoridades del gobierno municipal.

Lo relevante de señalar es que aún cuando las prácticas y acciones de las organizaciones civiles son diversas, mantienen como rasgos comunes sus intentos de emancipación con respecto al Estado y las instituciones políticas representativas-burocráticas (Offe, 1988: 167) y lo que es más importante, es el énfasis hacia la territorialidad, “movimientos de una sola cuestión” dirá Schmitter, definiéndolos como “esfuerzos por definir las reglas de decisión y el trato político en algún segmento del espacio político –sin que importe el interés funcionalmente definido y afectado por sus demandas de protección ambiental, autonomía regional, usos lingüísticos, igualdad racial, etcétera-” (Schmitter, 1992: 141).

3.6 Las expresiones emergentes de la acción colectiva en el espacio urbano de Comitán

Señala Esteve (1992), que los movimientos populares surgen fundamentalmente de la insatisfacción de las necesidades sociales. La mayoría de ellos se han desarrollado como un reclamo ante el Estado, cuando éste ha sido incapaz de satisfacer las demandas sociales que se generan por la aplicación errónea de una política agraria que motiva la inmigración precipitada de los pobladores del campo a la ciudad (1992: 21). El mismo autor señala que la presencia de actores urbanos en la escena pública y el desplazamiento de la matriz de la sociedad agraria, como eje que articulaba y explicaba la realidad social, es una derivación de los procesos de industrialización, cuya consecuencia inmediata es el crecimiento de la población urbana y la demanda creciente de infraestructura y servicios básicos.

Desde esta perspectiva, la ciudad de Comitán es un centro urbano que se ha constituido como consecuencia de las tensiones sociales de las localidades rurales del municipio y de los otros municipios que forman la región Fronteriza. Ante la falta de una política de desarrollo rural sostenido, es la migración de los pobladores rurales hacia la ciudad y no las exigencias de una ciudad que se industrializa y se complejiza social y sectorialmente la que crea las demandas por la vivienda, los servicios médicos, educativos, de transporte y de seguridad social, entre otros. Los actores urbanos, al menos en sus primeras etapas, no son así producto de una diferenciación compleja de la estructura social, capaces de ir más allá de las demandas básicas para exigir formas de participación política democrática o enarbolar la crítica radical a las formas de representación política existentes, sino, producto de la expulsión de los espacios rurales. Se trata de actores que traen tras de sí condiciones de marginación y de pobreza ancestral y que se convierten en presas fáciles de la discriminación y del abuso clientelar de líderes facciosos y corporativos.

Es difícil encontrar una fecha precisa en la que se pueda registrar las primeras movilizaciones en torno a conflictos de naturaleza urbana, no obstante, la reconstrucción un tanto cronológica que los pobladores locales hacen sobre este tema recupera algunas dimensiones de un movimiento social que por su propia debilidad estructural debía necesariamente apoyarse o supeditarse incluso a otros colectivos que enarbolaban otras causas e intereses materiales y sociopolíticos.

Es probable que esta debilidad estructural sea el factor que explica la aparición tardía del movimiento social urbano. Las disputas por el espacio urbano y las demandas por infraestructura física y servicios sociales básicos, estuvieron tradicionalmente reguladas por los líderes del PRI y su estructura corporativa, la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), en estrecha vinculación con los ayuntamientos tradicionalmente del Partido Revolucionario Institucional, situación que favorecía la dinámica del clientelismo electoral. Es esta

articulación al Estado mexicano y a sus estructuras corporativas la que no permite, al menos hasta la primera mitad de los años ochenta, una definición del movimiento social urbano en escala local en términos de un movimiento reivindicativo genuino de intereses colectivos con un potencial disruptivo para ir más allá, como señala Esteve (1992: 23), de lo reivindicativo y de la mera reacción, para plantearse la cuestión del poder y/o la conformación cualitativa del estado de cosas prevaleciente. En este contexto, el nacimiento del movimiento social urbano en la ciudad de Comitán, entendido como un movimiento autónomo reivindicativo de intereses colectivos que replantea la cuestión del poder y los términos en el acceso a los recursos estratégicos del espacio urbano, es tardío y complejo pues la debilidad de los actores urbanos exige de los apoyos y las alianzas con otros actores sociales y políticos.

A finales de los años ochenta y principios de los noventa habitantes de diversos barrios de la Ciudad, se organizaron para emprender acciones sociopolíticas que les permitieran resolver y satisfacer algunas demandas inmediatas como la reducción de la cuota del agua potable y la constitución de una colonia popular a partir de conseguir un predio que buscarían regularizar con posterioridad. Estas movilizaciones fueron encabezadas por vecinos del Barrio “La Cruz Grande”, “La Pila”, “San Sebastián” y “La Cueva”. Estas demandas fueron apoyadas por militantes de la OCEZ y profesores adscritos a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), quienes impulsaron la realización de marchas y mítines en el centro de la ciudad y frente a las oficinas del ayuntamiento. La naturaleza de las demandas de los colonos permitió ubicar con claridad que su contraparte estaba representada por las autoridades del gobierno municipal.

Los actores urbanos tendrían no sólo que sortear las diferencias entre sus liderazgos internos, sino las que se derivaban de las dirigencias de otros colectivos que inicialmente ofrecieron apoyo al movimiento de colonos pero que inmediatamente después intentaron supeditar a éste a sus intereses, como fue el caso

de la dirigencia de la OCEZ, para quienes las demandas de los colonos eran solo la motivación para que estos se involucraran en una lucha de más largo plazo, siendo lo importante la discusión sobre el rumbo de la organización y las estrategias a seguir, tomando en cuenta el contexto más amplio. Los intereses de las dirigencias de la OCEZ y de la Coordinadora del magisterio entraban en conflicto con los intereses más concretos e inmediatos de los colonos, quienes con su falta de experiencia política habían decidido movilizarse para exigir predios urbanos, infraestructura y servicios básicos. A este respecto, una profesora que participó con los colonos expresó:

La gente se juntaba espontáneamente, había mucho ánimo por luchar juntos por las demandas populares. Se hicieron marchas y mítines que terminaban frente a la presidencia municipal, en repetidas ocasiones fuimos reprimidos por la policía. Los líderes de los barrios no tenían formación política y se quedaban rezagados, pues los militantes de la OCEZ y los dirigentes magisteriales de la región querían discutir cuestiones de otro tipo y a veces se olvidaban de lo que la gente quería (entrevista anónima, marzo 2002).

Después de esta experiencia organizativa, para principios de los años noventa se formó la Coordinadora de Barrios Independientes de Comitán (COBAINCO), en donde confluyeron algunos miembros que anteriormente habían iniciado la organización de barrios y cuya sede se encontraba en el barrio de “El Cedro”, en la parte norte - oriente de la Ciudad.

Los vecinos de los barrios se movilizaban en torno a demandas específicas, como la reducción de la tarifa del agua. Sin embargo, al obtener una respuesta positiva por parte del ayuntamiento, la gente consideraba que el motivo de su lucha había terminado. Sin embargo, la influencia de la OCEZ fue lo suficientemente importante para que los dirigentes de la COBAINCO impulsaran la idea de que además de luchar por sus demandas específicas mas inmediatas, se incorporaran demandas sobre la liberación de presos políticos y en general, aquellas de carácter agrario y de justicia social.

Quienes integraban esta coordinadora de barrios apoyaron las movilizaciones que coyunturalmente realizó un grupo de mujeres campesinas llamadas popularmente “canasteras”, que son mujeres que cargan sobre sus cabezas una canasta con productos agrícolas que venden en las calles aledañas al mercado municipal de la ciudad. Sus protestas se orientaban para exigir de la autoridad municipal el respeto a sus actividades en la vía pública y el cese de los malos tratos que recibían de la policía municipal y de los comerciantes del centro de la ciudad.

La coordinadora de barrios enfrentó posteriormente un período prolongado de reflujo y desmovilización, en los que influyó de manera importante la cooptación de varios de sus dirigentes por parte de las autoridades municipales, a partir de las constantes negociaciones que se realizaban con éstas, que en ese entonces eran militantes del PRI.²⁸

A partir de los años noventa, nos situamos ante un contexto sociopolítico novedoso, pues nos encontramos frente a una emergencia de organismos de la sociedad civil, la existencia de un conflicto armado a raíz del levantamiento zapatista, la ampliación de los capítulos de organizaciones no gubernamentales con temáticas que invocan la diferencia y el surgimiento de un ámbito político electoral más competido que tuvo su expresión en procesos de alternancia locales y que posibilitó la culminación de la etapa del partido único.

²⁸ A partir de un estudio sobre la asamblea de barrios Greene, (1997:191) plantea que resulta evidente que las variaciones de las ventanas de oportunidad en relación con el acceso a recursos gubernamentales afecta el carácter y la dirección de los movimientos. La relación entre Estado y movimiento se define principalmente en las instituciones gubernamentales que pueden abrir o cerrar el acceso a bienes y servicios. La postura del Estado puede ayudar a legitimar o deslegitimar a líderes de movimientos, intentar dividir grupos o facciones dentro del movimiento o crear organizaciones paralelas diseñadas para robar la base social de las otras. Todas estas tácticas crean tensión dentro de los movimientos sociales. Sus líderes conducen un debate constante sobre la mejor manera de aprovechar los recursos del gobierno sin perder la autonomía del movimiento. Al mismo tiempo, la cohesión interna es necesaria para enfrentar instituciones gubernamentales fragmentadas y evitar las tácticas diseñadas para desmovilizar a los movimientos.

A partir de la coyuntura del alzamiento zapatista en 1994, la OCEZ logró volver a la Ciudad de Comitán para impulsar de nuevo el trabajo en el área urbana. Sin embargo, en 1997 esta organización sufrió una escisión que se sumó a las que ya había enfrentado a partir de 1989. De esta última escisión derivó la OCEZ - UMOI (Unidad del Movimiento de Organizaciones Independientes), que siguió vinculada a la Coordinadora Nacional Plan de Ayala y la OCEZ - DI (Democrática Independiente), que se vinculó a la Unión Nacional de Organizaciones Populares de la Izquierda Independiente (UNOPI)²⁹.

La OCEZ UMOI³⁰ ha logrado avanzar en el trabajo organizativo en varios barrios de la ciudad: Belisario Domínguez, 20 de noviembre, cash, san José obrero y en la central de abasto. Este trabajo se ha realizado básicamente entre personas que se emplean en el sector informal: comerciantes, empleadas domésticas, albañiles, peones, carpinteros. Un dirigente de esta organización nos habló sobre las expectativas de la gente al integrarse con ellos, pues en el barrio San José Obrero algunas mujeres se integraron con ellos porque conocieron de la información de las mujeres de cash y “esperan ser beneficiadas con algo”.

Para él, un actor fundamental en los procesos organizativos de Comitán y San Cristóbal fue la diócesis de San Cristóbal:

La diócesis ayudó a que hubiera un proceso de concientización, ese proceso más las necesidades económicas de la gente, ayudaron. Hay una dificultad en el ámbito urbano, pues la gente trabaja, asistir a asambleas es dejar de trabajar,

²⁹ En la UNOPI convergen además de la OCEZ DI de Chiapas, la UCOPI de Guanajuato y el Frente Popular “Francisco Villa” de la Ciudad de México.

³⁰ La OCEZ - UMOI es parte de la Coordinación Latinoamericana de Organización del Campo (CLOC) desde 1997. También es fundadora del Movimiento Indígena y Campesino Mesoamericano (MOICAM) desde julio de 2003. A través de esta organización, Chiapas tiene el enlace de las organizaciones mexicanas con Centroamérica y el Caribe.

para un campesino es más fácil porque su tiempo depende de él, la gente de la ciudad está empleada. El anhelo del movimiento social es consolidar el movimiento campo –ciudad, significa que estamos avanzando. Es una lástima que hayamos perdido contacto con el magisterio, pero ese sector es muy gremialista (entrevista, 27 diciembre 2003)

De la experiencia en el trabajo en el espacio urbano, este mismo dirigente afirma:

[...] Entonces después del 94 se impulsa un trabajo no solo campesinista, sino más clasista. Hay gente que lucha por tierra donde vivir, gente que renta o que presta un espacio donde vivir. La gente de la ciudad se empieza a acercar, se dieron las condiciones para hacer trabajo en la ciudad. Ya antes, la OCEZ buscó el contacto con gente de la ciudad a través de COBAINCO. Después que COBAINCO fue desmovilizado, surge la Unión Popular Comiteca (UPC), que luego también se desmoronó.

A COBAINCO le faltó trabajar más para pasar de una cuestión reivindicativa hacia un proceso más de lucha, de oposición, de izquierda, de lucha de liberación. Nos quedamos en una alianza, no se tenían los cuadros o las condiciones para atender esa relación y ese trabajo. Se desatendió, cayó el trabajo, se dejó la parte urbana.

Al participar con esta organización, además de luchar por sus demandas como la regularización de lotes, construcción de viviendas, introducción de servicios como agua potable, luz eléctrica, proyectos productivos, los habitantes de los barrios también asumen las reivindicaciones de la organización y participan en los procesos de decisión de la misma, como la que se tomó en torno a su incorporación en las movilizaciones contra la reunión de la Organización Mundial de Comercio (OMC) llevada a cabo en el mes de septiembre de 2003 en la Ciudad de Cancún, Quintana Roo.

Por su parte, la OCEZ DI – UNOPI tiene trabajo organizativo en áreas urbanas de varios municipios del estado, como Tuxtla Gutiérrez, Comalapa y Comitán. En la ciudad de Comitán en la colonia “Bosques” (2ª. y 3ª. Sección), “El valle” y “San Rafael”. Sus demandas son la regularización de predios invadidos en 1994, introducción de servicios como drenaje, agua potable, energía eléctrica, calles.

A finales de los años noventa, se impulsó de nuevo un movimiento de barrios de la ciudad, creándose el Movimiento Popular Comiteco (MPC), cuya sede se encuentra en el barrio “El Cedro”, barrio en el que también habita población indígena hablante del tojol’abal, que se ha asentado ahí para buscar oportunidades de trabajo en la ciudad. Uno de los dirigentes del MPC, Rafael Maldonado Morales, es abogado de profesión y tiene la experiencia de haber participado en el Movimiento Urbano Popular en la Ciudad de México.

Los barrios que cuentan con representantes son: La Pila, Cruz Grande, San Miguel, el Cedro, Pilita Seca, San Sebastián, Belisario Domínguez, Yalchivol, Microondas, San Agustín, Santa Cecilia, Candelaria, Pashtón, San José, Los Desamparados, Cerrito Concepción, Guadalupe, Cristóbal Colón. Las demandas de los habitantes de estos barrios son el pago justo a los servicios públicos, como el agua y el predial. Según Don Rafael Maldonado se han encontrado con que “la gente no cree en organizaciones ni en partidos políticos, por eso se propuso una coordinación colectiva que impidiera que la dirección pudiera corromperse”.

En mayo de 1999 los vecinos de los barrios se movilizaron por la reducción de la tarifa del agua. Se realizaron marchas de protesta que culminaban frente a la presidencia municipal. Cuenta Don Rafael Maldonado:

Como no hubo acuerdo con las autoridades municipales se acordó ir a la resistencia y no pagar el servicio de agua. Era injusto, subieron el precio de 25 a 70 pesos. Entonces nos suspendieron el servicio de agua y nuestra gente iba y lo conectaba de nuevo, hasta que en junio del 2000 el MPC logró que COAPAM cobrara las cuotas personalizadas. La gente de la organización se vio beneficiada, pero la población demandó que se hiciera lo mismo con cada comisión de los barrios y se reconsideraran las cuotas (entrevista, octubre 2003).

El MPC también realiza trabajo organizativo entre la población rural, en 2001 se integraron con esa organización algunos habitantes de las comunidades de Yalumá, Señor del Pozo, Los Laureles, Las Granadas, San Rafael, Los Riegos, todos del

municipio de Comitán y Progreso, El Amparo, Chihuahua y las Delicias, del municipio de La Trinitaria. El MPC se coordina para algunas acciones con la Organización Democrática Independiente de Comitán (ODIC), como sucedió en el año 2000 cuando lucharon juntos por la reducción del impuesto predial. La ODIC surgió en 1988, impulsada por un ex-dirigente de la CTM en la región, Martín Hernández Rojas; agrupa a comerciantes del mercado 1º. de mayo y de la central de abasto y atiende problemas de traspasos y permisos de venta. Su dirigente comenta que la ODIC “lucha por la justicia y la igualdad de oportunidades”. Algunas acciones de esta organización tienen como marco general el respeto a los derechos humanos. Tratando de diferenciar a la ODIC de otras organizaciones, declara que esta organización no es de derecha ni de izquierda. Afirma:

La ODIC no está en pleito con el gobierno, queremos que se atiendan nuestras demandas, básicamente en el mercado y la central de abasto: problemas de traspasos, permisos de venta, reclamos de justicia.

Las otras organizaciones utilizan a Zapata, la ODIC en cambio utiliza el escudo de Chiapas y a Belisario Domínguez, es decir, se reivindica a gente que ha dado su vida y que es de Comitán. Nosotros no estamos de acuerdo con las pintas y con quebrar vidrios, todo se hace dentro de las leyes, dentro del marco constitucional. La ODIC es una organización diferente de la OCEZ, de la OPEZ, aunque nos coordinamos con ellos para algunas cosas como en el caso del hospital. (Entrevista, octubre 2003).

La demanda por el acceso a los servicios de salud, es un eje para la coordinación de esfuerzos de diversas organizaciones en la localidad y en la región que se mantiene desde los años ochenta a la fecha, en este punto coinciden la Organización Democrática Independiente de Comitán (ODIC), el Movimiento Popular Comiteco (MPC), la OCEZ UMOI, la OCEZ DI, Tojtzotze (una SSS con trabajo en Maravilla Tenejapa), una fracción del PRD local. Cuando los médicos del hospital han enfrentado problemas derivados de la falta de recursos o bien, cuando en repetidas ocasiones han sido acusados de negligencia médica, las diferentes organizaciones de la localidad y de la región los han apoyado frente a las autoridades de la Secretaría de Salud y frente al gobierno del estado. Actualmente el director del

hospital regional de Comitán es el Dr. Omar Gómez, cuyo padre encabezó las movilizaciones de diversos sectores de la población en los años ochenta en torno a la defensa del acceso a la salud y las acciones de solidaridad hacia los refugiados guatemaltecos. La coordinación entre organizaciones está sujeta a las coyunturas que enfrenta el personal del hospital. El Dr. Gómez Alfaro, exdirector del hospital comenta:

la salud es una de las necesidades más sentidas y el núcleo muy importante y eso sí es un orgullo, porque donde pueden coincidir es en el hospital de Comitán. A pesar de que lo han bloqueado, del hospital egresan 30 enfermos diarios. Omar, mi hijo, dirige el hospital y me dijo, es un orgullo estar en el hospital, se dan un promedio de 150,000 análisis de laboratorio, más de 60 consultas diarias, casi 2 servicios diarios de gineco obstetricia, entre cesáreas, partos, legrados, además el hospital tiene una filosofía de servicio y una participación política con Raúl (Belmonte), conmigo, a pesar de los Córdova Cordero. Creo que va a seguir siendo el proceso salud – enfermedad lo más importante, lo más objetivo, porque tienes una tifoidea y no cuentas con los 300 ó 400 pesos de la ciproxina para curártela. La salud podría ser un eje importante sobre el cual pudiesen organizarse políticamente (entrevista, abril 2004).

El hospital de Comitán, como centro médico de cobertura regional, es inevitablemente un espacio institucional que, ante sus carencias o frente a su incapacidad para atender la población que sufre eventos extraordinarios, se convierte en un espacio en donde se confronta la población derechohabiente y las autoridades de la institución y más allá de éstas. Aunque la población de la cabecera municipal en muchos casos no es afectada directamente, algunos líderes de organizaciones urbanas y campesinas han apoyado a los médicos que de alguna manera han estado vinculados desde décadas atrás con movilizaciones *populares* en la región.

Inicié este capítulo con una entrevista a un campesino mayor que vivió desde los años setenta la disyuntiva de estar del lado del gobierno o luchar desde la oposición, optando por esto último, y a la vuelta de los años (tres décadas), encontrarse con que ahora “no tenemos nada, ni siquiera esperanza”. Quiero terminar con una entrevista a un líder campesino de la región, de 40 años de edad y con más de 20 impulsando el movimiento campesino en la región y sus vínculos con redes estatales, nacionales e internacionales. La entrevista ilustra, al mismo tiempo, la especificidad que puede caracterizar a algunas movilizaciones en la región, con demandas fundamentalmente agrarias, y una percepción de que las organizaciones sociales algo han podido lograr en cuanto a sus reivindicaciones tanto de índole material como de carácter político.

En octubre de 1995 realizamos en Comitán una marcha contra la represión, éramos más o menos unos 2,500 campesinos de la Organización Proletaria “Emiliano Zapata” (OPEZ), la Organización Campesina “Emiliano Zapata” (entonces éramos una sola la OCEZ DI y la OCEZ UMOI, hoy divididas), la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC) y la Unión General Obrero, Campesina y Popular (UGOCP).

Era una marcha como CEOIC (Consejo Estatal de Organizaciones Indígenas y Campesinas), que surgió después del alzamiento armado del 94. Eramos campesinos de La Trinitaria, Chicomuselo, Las Margaritas, Independencia, entonces todavía simpatizábamos con el Ejército Zapatista y habíamos tomado tierras en nuestros municipios. En la marcha íbamos, mujeres, hombres, niños, ancianos, durante tres horas bloqueamos la carretera internacional, a la altura de la salida a Tzimol, esto lo hicimos para dar a conocer nuestras demandas a la población. Después nos fuimos a la marcha porque nuestro objetivo era llegar hasta el parque central, frente a la presidencia municipal, pero en el camino, sobre el boulevard, una camioneta con elementos de la Policía de Seguridad Pública quiso detener la marcha y para no confrontarnos con los policías nos desviamos del camino que teníamos planeado recorrer.

Más adelante. desde la azotea de la casa de un propietario de tierras, un tal Nájera, ranchero de Chicomuselo, los policías de la seguridad pública nos empezaron a lanzar gases lacrimógenos y balazos al aire, alcanzamos a ver que los propietarios estaban ahí con los policías. La gente se dispersó, pero luego volvió a juntarse y llegó frente a la presidencia municipal, en donde hicimos un mítin para plantear nuestras demandas al gobierno del estado, había mucha tensión. Éramos como unos 1,500 después de que nos dispersaron. Hubo gente a la que fueron persiguiendo hasta Trinitaria, los llevaron “arreando”.

En todo el camino fuimos gritando consignas contra el gobierno y los propietarios y en solidaridad con el movimiento zapatista. También íbamos haciendo pintas con leyendas como “no al desalojo de los campesinos”, “viva el EZLN” “viva la OCEZ” “viva la lucha de los pobres del campo y de la ciudad”. Y la gente de la ciudad se enoja pero es nuestra única forma de hacernos oír.

Nuestras demandas eran “no al desalojo”, pues había amenazas de hacelo y que se iniciara ya el proceso de regularización de las tierras, Esto se logró en los siguientes años, y por eso hubo un empoderamiento de los campesinos. Eran gente sin tierra, claro que como en todo, alguna gente se “coló”, pero la mayoría era gente sin tierra, hijos de ejidatarios, señores mayores sin tierra (avecindados).

Antes, los ‘propietarios’ eran más envalentonados, después del 94 hubo un reposicionamiento de la parte campesina y muchos de ellos tuvieron que vender sus propiedades al gobierno y se formaron nuevos poblados. Y nosotros seguimos luchando, ahora no tanto por las tierras, sino por los insumos, por proyectos productivos, por la vivienda en el campo pero también en la ciudad, y durante los últimos años hemos venido impulsando el trabajo organizativo en relación con las elecciones, muchos pensamos que es un espacio que hay que ir conquistando, y una experiencia importante fue la alternancia en la gubernatura con Pablo Salazar, pero también hay que pensar en los espacios locales, nosotros dimos la lucha en las elecciones municipales, en La Trinitaria, en Comitán y en otros municipios (entrevista a líder campesino de la región, marzo 2005).

No hay que perder de vista que, frente a lo que se expresa en esta entrevista, también está la percepción de los entonces propietarios de tierras, uno de ellos afirma “lo único que hemos hecho es defender nuestras legítimas propiedades frente a los campesinos que las quitan nomás para abandonarlas y volverlas improductivas” (entrevista anónima a un expropietario de tierras de la región, octubre 2004). Por otro lado, algunos habitantes de la ciudad que dijeron no participar en organizaciones o partidos políticos, afirmaron que “la gente se enoja cuando en estas manifestaciones los marchistas hacen ‘pintas’ sobre sus demandas, pues ellos ‘agarran parejo’, y también lo hacen en las paredes de las casas de la gente humilde que no cuenta con recursos para volver a pintarlas”. Comentaron que “cuando reparten ‘volantes’ para dar a conocer sus peticiones, o van con mujeres y niños, al final dejan un basurero. A veces también se unen a estas marchas gente de los barrios de la ciudad o comerciantes de los mercados y tienen sus propias demandas” (diversas conversaciones informales en la ciudad durante el período de trabajo de campo).

3.7 Acción colectiva en una periferia. Una lectura de conjunto.

Este breve recuento de la trayectoria seguida por el conjunto de organizaciones populares, me permite establecer algunos hallazgos que, si bien no son nuevos, posibilitan particularizarlos en el espacio de estudio. He tratado de hacer una reflexión que está referida a la sociedad chiapaneca, pero en donde de alguna manera la sociedad local de estudio estuvo directa e indirectamente involucrada.

Lo primero que registro es que la historia de la acción social en un espacio como la ciudad de Comitán, como cabecera municipal y centro regional rector, desarrolló, hasta muy recientemente, dos formas de acción sociopolítica: una articulada a la estructura corporativa del sistema político mexicano, particularmente, al poder ejecutivo nacional y sus instituciones de gobierno, y al partido político oficial; la otra forma de acción colectiva, es un complejo de prácticas y movilizaciones que si bien en su inicio proyectó el cambio social radical, pronto se vio superado no sólo por una diversidad de ofertas de corrientes políticas que propiciaron conflictos entre sí, sino también por la realidad social misma. Se trata de dos formas que se explican mutuamente, cuyos límites siempre estuvieron marcados por la magnitud del desafío que les impuso un contexto material y social marcado por el subdesarrollo, por ello, sus expresiones cubren todo el territorio chiapaneco.

En Chiapas, el mundo asociativo ha estado tradicionalmente vinculado al Estado mexicano y al partido oficial, privando un corporativismo estatalista, en la definición de Schmitter, sin embargo, en buena parte de su historia y en grandes franjas de su territorio, este poder omnipresente del Estado mexicano no está y da la impresión de que no estuvo nunca. Pero la historia social y política de Chiapas no se explica sin este gigante, su ausencia y presencia marcaron buena parte del sentido subjetivo de la acción colectiva.

Creo que igual ocurre con la llamada izquierda mexicana, que llegó a Chiapas con un proyecto revolucionario de cambio social radical. Si uno se pregunta por qué las luchas sociales bajo la bandera del cambio radical no tuvieron éxito en Chiapas, una respuesta puede sustentarse en el argumento del carácter represivo del Estado y sus instituciones. Pero la respuesta es más complicada y es que el Estado y los campesinos no se explican uno sin el otro. Eso no lo entendieron, o lo entendieron muy tarde los líderes externos que vieron en Chiapas el campo ideal para el cambio revolucionario. Las bases campesinas, las que aparentemente asumieron como propios muchos de los discursos oficiales y revolucionarios, terminaron condicionando la trayectoria que habrían de seguir los movimientos *populares*, principalmente campesinos e indígenas. No se niega que la izquierda haya ejercido lo suyo, pero las disputas internas y luchas político-ideológicas entre diversos liderazgos, contribuyeron a la crisis de un proyecto, que se pensó alternativo.

Y frente a la erosión de estas formas de acción colectiva, las más de las veces superpuestas, nacen otras formas híbridas, con un poder superior a los idearios del corporativismo de Estado y de la lucha de clase. Son formas de acción impulsadas por actores sociales y políticos formales o no, mismas que se han desarrollado a partir de diversas coyunturas y no implica que tengan una proyección de alcance regional, estatal o nacional, pero que frente a la crisis de sus antecesoras, pretenden proyectarse como formas de acción colectiva protagonistas de los nuevos tiempos.

Pero las formas de acción colectiva sustentadas en movimientos *populares* no desaparecen, emergen las acciones de diversos colectivos, centradas en las luchas por los satisfactores y servicios urbanos. Los problemas urbanos de Comitán se acrecientan en la medida en que, a su crecimiento natural, los flujos migratorios de localidades y municipios rurales de la región Fronteriza tienen como punto final establecerse en la cabecera municipal, proceso que se intensificó desde el estallido zapatista. Al hacer un breve recorrido por la ciudad de Comitán uno puede percatarse

del crecimiento de la frontera urbana y las condiciones tan precarias de las viviendas y la carencia de los servicios básicos, principalmente en las colonias periféricas de la ciudad. En este contexto no es extraño que organizaciones que han tenido su campo de acción en las zonas rurales, hoy incorporen a la población rural asentada en los espacios urbanos y cubran esa necesidad de representación que tiene esta población ante las autoridades de los gobiernos local, estatal o nacional para ver satisfechas sus necesidades básicas. Tampoco ha sido extraño el nacimiento de organizaciones urbanas con líderes propios u organizaciones urbanas impulsadas por partidos políticos.

Así, concluyamos con dos ideas centrales: el peso de los movimientos *populares* se correlaciona con la continuidad, en la medida en que se registra un incremento de la población en condiciones de pobreza, que frente a la ausencia de políticas públicas sociales, se ve forzada a movilizarse para exigir demandas básicas de servicios, vivienda, empleo, entre otros. Los movimientos *populares* en Comitán y en la región fronteriza han tenido que renovarse y adecuarse a los nuevos tiempos; en ese sentido, ya no podemos caracterizarlos con la precisión de un modelo tradicional de movimiento, sea campesino, magisterial o urbano, como tampoco podemos adscribirles un fundamento político-ideológico único.

CAPÍTULO IV

DE ALTERNANCIA DEMOCRÁTICA O DE RESISTENCIA AL CAMBIO POLÍTICO EN COMITÁN

La participación política electoral, que entraña la construcción de instituciones democráticas como es un sistema electoral y un sistema de partidos políticos, es propia de la sociedad moderna democrática³¹. Sin embargo, la naturaleza constitucional y metaconstitucional del sistema político mexicano posrevolucionario, sustentado en el sistema presidencial y en un partido de Estado, propiciaron, hasta fines del siglo XX, el desarrollo de formas de participación política que desplazaron los espacios institucionales formalmente ofrecidos por el régimen. La ausencia de un sistema de partidos realmente plural y competitivo posibilitó por ejemplo la formación de una diversidad de organizaciones sociales y políticas autónomas o semiautónomas que canalizaron la participación política de la sociedad y se tornaron relativamente eficientes en la representación de las demandas e intereses de sus afiliados frente a las agencias gubernamentales responsables de cristalizar los imperativos del desarrollo individual y colectivo de los mexicanos (Pereyra y Woldenberg, 1988; Aguilar, 1996).

³¹ “La representación política cruza todos los elementos que dan contenido a la democracia como sistema de gobierno: competencia real por los puestos electivos del gobierno, extendida participación política en la designación de candidatos a través de elecciones; y control ciudadano sobre los gobernantes [...]. Si la elección es la base del modelo democrático y el procedimiento de designación de los gobernantes (Duverger, 1992:72) o el mecanismo de designación competitiva de representantes a través del voto del electora (Nohlen, 1994:154), los sistemas electorales externalizan la forma en que se hace votar al pueblo [...] se registran como una de las partes esenciales de los sistemas políticos democráticos, que como señala Sartori: “No sólo son el instrumento político más fácil de manipular sino que también conforman el sistema de partidos y afectan la amplitud de la representación” (1996: 10). [...] Los partidos políticos, “son quienes reciben de los electores una “autorización” para “actuar”. [...] La composición estructural de la totalidad de los partidos políticos en un Estado definen al sistema de partidos (Nohlen, 1995). Son elementos constitutivos de un sistema de partidos: el número de partidos, su tamaño, la distancia ideológica entre ellos, sus pautas de interacción, su relación con la sociedad o con grupos sociales y su actitud frente al sistema político” (García, 2002: 12-13).

Pese a que una parte importante de esta red de organizaciones se orientó a impulsar estrategias y acciones de movilización con fines de democratizar sus espacios laborales y de representación sindical, o de satisfacer demandas sociales constitucionalmente establecidas (Foweraker, 1989; Zermeño y Cuevas, 1990), hubo otra parte de esta red, que se encaminó a impulsar formas de participación política que no sólo desdeñaron las instituciones existentes, sino que, en un marco más general, asumieron la construcción de alternativas distintas, oponiéndose así al régimen y al sistema social en su conjunto (Zermeño, 1994; Pereyra y Woldenberg, 1988). Para estas agrupaciones, la democracia representativa, como política real, era una alternativa igual de sistémica. Sin embargo, la naturaleza contingencial y pragmática de la política, moduló la acción estratégica y táctica de muchas organizaciones sociales, atrapadas de una u otra forma por los tentáculos del régimen mexicano, propiciando el recurrente tránsito de formas múltiples de participación política.

Estos planteamientos son ampliamente corroborados en Chiapas, en donde se registra que hasta muy recientemente las expresiones de participación política de la sociedad se han dado a través de los movimientos cuyos actores centrales son las organizaciones campesinas y populares en general, inhibiendo el trabajo de los partidos políticos o subordinando el trabajo partidista a los cometidos de las organizaciones sociales. Nada extraño resultan los procesos de amalgamiento o fusión del partido con las organizaciones sociales, cuyas dirigencias locales terminaron orientando sus actividades sustantivas hacia campos de acción que como la lucha agraria, expresada en reiteradas movilizaciones que van desde las marchas, plantones en oficinas públicas, cierre de carreteras, invasiones de predios, lograban la negociación con las autoridades pertinentes y, con ello, hacerse de una militancia más o menos importante que les permitía entrar a la contienda electoral y ganar alguna alcaldía y, por la vía plurinominal, algunas diputaciones locales y federales.

En este contexto, se puede decir que si bien la participación política electoral normaba formalmente las contiendas y la transmisión del poder político, sus impactos prácticamente se reducían a los tiempos electorales para posteriormente continuar con una dinámica sociopolítica protagonizada por organismos sociales y políticos que, bajo estrategias clientelares, afianzaban al régimen recreando organismos corporativos estatistas y sociales (CNC, CNOP, CTM, CROM, clubes, colegios de profesionistas, etcétera), o bien lo encaraban, asumiéndose como órganos opositores que, aunque cercanos a los postulados político-ideológicos de los partidos de izquierda, no necesariamente se asumían como colectivos antisistémicos.

La participación política se tradujo así, tanto en amplias movilizaciones electoreras encabezadas por el partido del Estado, como en movilizaciones que redujeron a los partidos políticos al tiempo electoral para después privilegiar la lucha abierta contra el régimen y/o la negociación directa con las agencias gubernamentales, de preferencia de nivel federal. Ello no significa que en Chiapas hubiesen estado ausente los partidos de oposición de cobertura nacional.

De acuerdo a García (2002) desde los años sesenta se tiene el registro de la presencia activa, además del PRI, de las principales agrupaciones políticas del país como fueron el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM), el Partido Popular Socialista (PPS), el Partido Acción Nacional (PAN). A fines de los setentas se registran siglas como el Partido Demócrata Mexicano (PDM), el Partido Comunista Mexicano (PCM) y el Partido Socialista de los Trabajadores (PST). Los dos últimos, representaron las primeras fuerzas con una plataforma política de izquierda que intentaron hacer trabajo político en Chiapas, aunque el contexto sociohistórico regional los llevó, como llevará a las nuevas agrupaciones partidistas de izquierda, a privilegiar la movilización social por la lucha de los recursos estratégicos escasos. A principios de los ochenta aparecen dos nuevas siglas: el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y el Partido Mexicano de los

Trabajadores (PMT). En 1988 en la contienda electoral federal, se registra la fusión de tres partidos, uno de ellos nuevo, el Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional (PFCRN), que dio lugar al Frente Democrático Nacional (FND) del que emergerá el Partido de la Revolución Democrática, como la expresión de las fuerzas de centro izquierda e izquierda mexicana.

¿Cual era la presencia y la participación real de los partidos políticos en Chiapas? Puede decirse que los partidos opositores al PRI, asumieron cargos de representación federal y local, muchos años después de que en el plano nacional se instituyera el sistema de partidos y después el sistema de plurinominales. En efecto, como señala García (2002:26), el sistema de diputados de partidos instituido por el Congreso de la Unión en 1964, en Chiapas se incorporó a la legislación constitucional y electoral hasta 1974 pero sin tener vigencia real, pues hasta la LIII legislatura (1976-1979) el congreso local seguía siendo de dominio absoluto del PRI. Es hasta la siguiente legislatura (1979-1982) cuando el Partido Popular Socialista logró tres curules como resultado de la puesta en marcha del sistema de representación proporcional. En las tres legislaturas posteriores, el congreso chiapaneco tuvo cinco, cinco y seis diputados no priístas respectivamente, todos obtenidos por la vía plurinominal. En la legislatura que cubre el periodo 1991-1995, los partidos de la oposición sólo ganan tres curules por la misma vía.

El virtual dominio del PRI en el congreso local, y el total dominio del mismo en los cargos de elección popular de los ayuntamientos y la gubernatura, propició que en 1994 y más particularmente en 1995 y 2000 sean registrados como los años decisivos para la vida democrática de los chiapanecos. En efecto, hoy es inevitable no reconocer que en Chiapas la lucha por el acceso y el ejercicio del poder político sufrió un primer punto de inflexión en las elecciones locales de 1995 cuando por primera vez se registró la alternancia en un número importante de ayuntamientos y en el congreso local con el triunfo de partidos de oposición en algunos distritos electorales.

El quiebre mayor del patrón tradicional electoral ocurrió en 2000 con el triunfo de un candidato aliancista a la gubernatura del estado de Chiapas. Paradójico, pero Chiapas, pese al atraso político considerable que le ha caracterizado, está ahora a la altura de cualquier entidad federativa que se ostente vivir la alternancia electoral, sustento irrenunciable de la democracia. Sin embargo, dado que esta lectura intenta sustentarse en una buena dosis de realismo político, mi exposición analítica insistirá en los fenómenos y hechos que de alguna manera, en el plano nacional y local, cuestionan el carácter genuinamente ciudadano de los avances democráticos de la vida política nacional y local.

Sostengo que la ausencia de ciudadanía real en los procesos de democratización de la vida política, que van más allá de la etapa electoral, coloca a la democracia en una situación de suma fragilidad por la recurrencia de prácticas y formas de participación política contrarias a los principios republicanos. El enemigo de fondo de la democracia en Chiapas es enorme, es ciertamente un problema que tiene que ver con el ámbito de las subjetividades, como es la cultura política, pero tras de sí está un contexto sociohistórico con enormes desventajas materiales, reflejado en la pobreza de la mayoría de sus habitantes, sólo posible de superar a través de un nuevo pacto federal (Zebadúa, 2004: 5).

Acercarnos a los procesos sociopolíticos y culturales que están detrás de las elecciones es crucial para entender el peso que los constreñimientos materiales y culturales ejercen en el comportamiento y la práctica política de los electores. La vida política local, como una esfera esencial de la vida social que cuenta con cierta autonomía en torno a relaciones sociales, intereses y recursos propios, convoca a sujetos y actores a hacer de este espacio un campo en donde se define una correlación de fuerzas, pero también un espacio de lucha por transformar a dicha correlación. Aunque los recursos legítimos están formalmente definidos por las instituciones democráticas que garantizan la competencia y el ejercicio del poder político, y

aunque estén dadas las condiciones políticas externas para que la lucha y el ejercicio del poder político tenga cierta eficiencia en los espacios locales, cabe preguntarse si las condiciones internas, tanto materiales como subjetivas están también en plena sintonía con la exigencia de cambio democrático.

Intento explorar, en las expresiones fácticas de los procesos electorales locales, el peso que ejerce esta articulación entre ambas dimensiones de lo social. La lucha por el poder y su ejercicio, exige no sólo de instituciones que garanticen la efectividad electoral y la ausencia de intereses y presiones, sino también de una ciudadanía comprometida con la democracia, cualidades que sólo son posibles con márgenes de autonomía y libertad individual y colectiva.

4.1 La alternancia política en Chiapas

Es indudable que en Chiapas la ausencia de formas democráticas de acción colectiva y de participación política se correlacionaron con la ausencia de un sistema político o régimen político nacional sustentado en una lucha real de los partidos políticos por los espacios de poder institucional. En los años ochenta, la crisis del sistema político, que se conjugó con la crisis económica, va a provocar una erosión en la capacidad del sistema político mexicano para seguir sustentando una estructura corporativa y clientelar, imponiéndose una transformación en los mecanismos de la trasmisión del poder. El correlato de esta crisis es también, hipotéticamente, una transformación cualitativa de la sociedad civil y de sus formas de acción y participación política, fragmentadas ya desde mediados de los años ochenta. La erosión de la capacidad de control social por parte del gobierno se tradujo pues, en una crisis y en una redefinición posterior de las formas de acción y participación política.

Desde el ángulo de estas reflexiones puedo plantear que en Chiapas, desde 1994, la participación política a través de las instituciones democráticas se legitima por las presiones externas que sufre el sistema político mexicano y por las presiones internas de los propios actores políticos locales que enfrentaban un movimiento armado que inicialmente le había declarado la guerra al Estado mexicano. Dado que el referente empírico para evaluar este proceso de participación política son los procesos electorales recientes, dedico este capítulo al análisis del comportamiento local de dichos procesos, recuperando las variables y los procesos sociopolíticos de naturaleza cualitativa que los explican y modulan.

A la luz de las contiendas electorales que tuvieron lugar entre 1994 y 2000 puedo aseverar que el temido “Chiapas bronco” y el dominio de una clase dirigente política *tradicional* que conjuga el poder político con el dominio económico, acuerpados en el partido de Estado, el PRI, fueron arrasados, sin capacidad de réplica o violencia armada, por los votantes que pusieron punto final a la hegemonía de un único partido. No es un proceso lineal, en tanto a las instituciones partidarias y los ciudadanos votantes les caracteriza una multiplicidad de ambigüedades e incertidumbres.

Los hechos reales como señalan Viqueira y Sonnleitner (2000) y García (2002), están en las cifras, aunque éstas tienen una carga nada despreciable de interrogantes. Los siete comicios de este período, tres elecciones federales y cuatro locales, resultaron inéditos no sólo porque no hubo actor social y político que no se pronunciara al respecto, sino porque también la presencia de observadores electorales demostró lo relevante que era la entidad para el futuro de la democracia en el país. En las elecciones de 1994 por ejemplo, el Consejo Estatal Electoral registró 81,620 observadores electorales de 251 organizaciones nacionales e internacionales (García, 2002: 46).

Sintéticamente tenemos que en Chiapas durante las elecciones federales de 1994, el PRI ganó la elección presidencial pero lo hizo con el 48.03% del total de votos válidos, porcentaje nunca antes registrado; ganó también, ocho de un total de nueve distritos, pero con porcentajes que reflejan el descenso drástico de sus votantes. El PRD ganó una diputación y, al alcanzar la primera minoría, ganó también una senaduría. En las elecciones de 1997 para la renovación de los poderes legislativos, el PRI ganó 10 de un total de 12 distritos, pero perdió dos distritos estratégicos: el IX y el XII con cabeceras en Tuxtla Gutiérrez y Tapachula, ambas ganadas por el PRD. Finalmente, en las elecciones presidenciales del año 2000, la elección la ganó el PRI, ahora con el 44.98% de los votos válidos. Obtuvo también las dos senadurías de mayoría relativa y recuperó una de las diputaciones perdidas al ganar un total de once.

Con respecto a las elecciones locales de 1994, en donde se disputó la gubernatura de Chiapas, el PRI salió victorioso, no obstante, la coyuntura abierta por el ELZN y su movimiento, quien legitimó a un gobierno de la sociedad civil, abrió espacio para las impugnaciones y poco después la destitución del gobernador electo. Las elecciones de 1995, para renovar a los miembros del congreso local y de los 111 municipios, registraron un elevado abstencionismo en tanto el 55.10% de los ciudadanos chiapanecos no ejercieron su voto. De un total de 24 distritos, veintiuno ganó el PRI, dos el PAN y uno el PRD. Cabe señalar que se registraron once diputaciones plurinominales distribuidas entre PRD, PAN, PT y PFCRN. Los resultados municipales le dieron el triunfo al PRI en 84 municipios; al PRD en 18; al PAN en cinco; al PFCRN en uno y dos al PT.

Durante las elecciones de 1998 para la renovación de estos mismos poderes locales, tenemos que el PRI triunfó en 21 distritos, el PAN en dos y el PRD en uno. Tres diputaciones plurinominales le correspondieron al PRI y once más fueron distribuidas entre el PAN (3), el PRD (5), PT (2), y el PFCRN (1). En lo que respecta

a los resultados municipales, el PRI ganó 88 alcaldías, el PAN triunfó en seis y el PRD en 17.

En Chiapas, en las elecciones federales del 2 de julio de 2000 se registró el triunfo del candidato presidencial del PRI; las elecciones federales para renovar a los poderes legislativos mantuvieron el mismo comportamiento. El PRI ganó las dos senadurías de mayoría relativa y once diputaciones, recuperando el distrito XII; el PAN ganó el distrito IX con cabecera en Tuxtla Gutiérrez y el PRD perdió las dos diputaciones ganadas en las elecciones de 1997. Un escenario distinto tuvo la elección para la renovación del poder Ejecutivo chiapaneco. La derrota del PRI a nivel nacional en la elección presidencial, impactó el imaginario colectivo de los electores chiapanecos, posibilitando votar por una coalición en la que estaba incluido el partido del Presidente electo, el Partido Acción Nacional. Sin embargo, el factor que hizo posible la derrota del PRI fue la formación de la llamada *Alianza por Chiapas*, una coalición de ocho partidos políticos³² que ganó la elección con el 51.50% del total de votos, en tanto que el PRI obtuvo el 46.68% de los votos totales.

De este recuento estadístico electoral se puede concluir que pese a que numéricamente los cargos de elección popular siguen estando en manos de priístas, la alternancia es un hecho que pasa a ser parte de la vida política chiapaneca. Del triunfo de la Alianza por Chiapas que culminó con el primer gobierno alterno al PRI, se esperan impactos drásticos en la organización social y política de los chiapanecos, pues, hipotéticamente la alternancia trae consigo la reconfiguración de un nuevo marco de relaciones entre la sociedad y el gobierno estatal y con ello la desestructuración del anclaje clientelar del corporativismo priísta que caracterizó la asignación de los recursos públicos en el campo de los servicios sociales, la

³² Esta coalición estaba formada por PRD, PAN, PT, PVEM y los partidos Convergencia por la Democracia, Partido del Centro Democrático, Partido de la Sociedad Nacionalista y el Partido Alianza Social.

infraestructura básica y los apoyos a la producción. La interrogante central, sosteniendo la idea de que la alternancia irremediamente modifica las relaciones entre la sociedad y el gobierno, es si éstas modificaciones relacionales conllevan en el plano de la realidad concreta al imperativo de la transición democrática. La respuesta me lleva a tratar de identificar la naturaleza o el carácter de las bases objetivas que hicieron posible la alternancia.

En términos formales, con la alternancia en la gubernatura, Chiapas entra a la fase de la transición y consolidación democrática. Como señala Guillén (1993) en las entidades federativas la alternancia genera grandes expectativas en la población, por lo que la política, particularmente el ejercicio gerencial y político del nuevo gobierno cobra centralidad en tanto centro de atención de los gobernados. Por lo mismo, los errores o la repetición de viejas prácticas en los gobiernos alternos provocará inevitablemente el repudio inmediato de quienes esperaban un comportamiento político distinto.

4.2 La alternancia de la presidencia municipal de Comitán de Domínguez ¿Triunfo de los partidos políticos, de la sociedad civil o de quien?

Después de que Pablo Salazar Mendiguchía ganó la gubernatura, ya sabíamos que en las próximas elecciones el PRI iba a perder el municipio de Comitán. Sólo hubo un año de diferencia entre la elección del gobernador y la de la presidencia municipal comiteca, pero en ese año, el nuevo gobernador y los políticos comitecos que estuvieron con él, hicieron un trabajo bien *cabrón*. Corrieron a muchos políticos priístas, como todos tiene *cola que le pisen*, sólo bastó con que el gobernador anunciara que iba a revisar las cuentas del gobierno comiteco y del estado, porque había mucho político comiteco trabajando con el gobernador de antes, Albores Guillén, para que muchos salieran huyendo de Comitán y de Chiapas o se quedaran calladitos y *mansitos*, sin hacerle ruido al nuevo gobernador. Eso de la democracia es puro cuento, al menos aquí en Comitán, pero creo que también en todo Chiapas. En Comitán ganó la alianza porque fueron listos en amarrar tratos con los líderes de

los partidos políticos y de las organizaciones, se negocia el voto pues (Entrevista anónima, febrero de 2003).

Inicio este parágrafo con las palabras de uno de mis entrevistados, porque es una percepción generalizada tanto de la gente “de a pie” como de algunos líderes menores que muestran interés por la vida política del municipio de Comitán. La percepción social sobre la debacle del PRI en un municipio “tradicionalmente” priísta y su reemplazo por un gobierno producto de una alianza entre dos partidos, PRD y PT, si bien recupera la idea del hartazgo de la población a los métodos del gobierno priísta manejada en el plano nacional, lo cierto es que se perciben sentimientos encontrados: una añoranza de tiempos idos en donde fluían recursos y movilizaciones multitudinarias organizadas por las organizaciones corporativas del PRI, y la cada vez mayor certeza de que el PRI ya no es el partido del gobierno, del Estado.

Con Fox en la presidencia del país, y con Pablo Salazar como gobernador, el PRI ya no puede gestionar nuestras demandas en servicios y apoyos a la producción y a la familia; ya no pueden hacernos ningún favor, como interceder por nosotros con las autoridades del gobierno para que nos apoyen con alguna obra o servicio (Entrevista anónima, militante del PRI, julio 2003).

Sin embargo, en algunas franjas de la sociedad comiteca, particularmente aquellas más acomodadas que viven en el centro de la ciudad, perciben que “la crisis electoral que enfrenta el PRI es pasajera, el PRI va a volver a gobernar en Comitán”:

El triunfo de la alianza en Comitán obedeció a la fuerza del gobernador aliancista, es una obra de ese gobernador pero ya se está viendo *que no la está haciendo*, por eso creo que en las elecciones municipales del 2004 el PRI va a volver a ganar, aquí en Comitán hay mucho priísta, muchos gobernadores han sido de esta tierra y la gente aún le tiene cariño al partido (Entrevista anónima, miitante del PRI, julio 2003).

Pero no todos opinan igual. Algunos comitecos que fueron priístas y dejaron de serlo, porque el PRI los defraudó o porque vieron menoscabado su futuro político, reconocen que:

Los tiempos políticos ya cambiaron, ahora ya existen otros partidos y la gente siente que eso es bueno, porque aunque vuelva a ganar el PRI, éste deberá hacer un trabajo para la gente y no sólo para aprovecharse de los recursos del erario público, como lo venían haciendo, creo que es bueno que gente nueva venga a gobernar, lo triste será que continúen haciendo lo que se ha venido haciendo por años (Entrevista anónima, julio, 2003).

Quienes recuperan el discurso de la Alianza por Comitán como una estrategia positiva, bajo la idea de que “fue la ciudadanía local que decidió votar por la Alianza para derrocar al PRI” son algunos líderes de partidos políticos y de organizaciones sociales. Recuperan también la idea de que el cambio democrático “es producto de un cambio en la correlación de fuerzas que viene desde el centro del país y obedece a que el Estado mexicano ya no es el Estado priísta”. En el mismo tenor, se afirma:

El 2001 marca el inicio de un proceso de democratización en el municipio con la cuarta ciudad de mayor importancia en la entidad, cabecera de distrito y punto de encuentro entre los habitantes de los municipios fronterizos, aquí se asienta la mayor cantidad de delegaciones regionales de las diferentes secretarías del gobierno del estado, y también dependencias de nivel federal
[...]Comitán podrá ser gobernado por el PRI y por el PRD, o por diferentes coaliciones de partidos o alianzas políticas, pero no será ya patrimonio o emporio político de ninguna dictadura monolítica, familiar o de grupo, disfrazada de partido político (Cifuentes, 2004:3).

4.2.1 La historia de una estrategia de coalición partidaria: ¿Sacar al PRI del gobierno municipal es la única meta?

El antecedente inmediato de la estrategia aliancista para la contienda electoral del 5 de octubre de 2001 en Comitán y en otros muchos municipios de la entidad que asumieron la misma estrategia, fue la Alianza por Chiapas, una coalición inédita en Chiapas y en el país, que en las elecciones del 2000 llevó a la gubernatura de Chiapas a Pablo Salazar Mendiguchía, en cuya campaña electoral se involucraron diversas organizaciones sociales de varias regiones del estado. Cuando Salazar Mendiguchía

obtiene el triunfo, estas organizaciones se definieron como aliadas del nuevo gobierno.³³ A partir de entonces, dirigentes de estas organizaciones negociaron su incorporación en espacios del gobierno estatal, situación que provocó tensiones y conflictos con las organizaciones que no aceptaron dicha alianza y se asumieron como opositoras, desde donde se les acusó de haber perdido su “independencia” frente al gobierno estatal.

Con el peso del PRI en el Congreso local, situación que algunos analistas definen como gobierno dividido³⁴, el ejecutivo chiapaneco instrumentó una estrategia para las elecciones locales de 2001 que le permitiera alcanzar el control del congreso y las presidencias municipales. Comitán fue uno de los municipios en donde se instrumentó dicha estrategia. Así, en las elecciones de 2000, algunos personajes importantes de Comitán que trabajaron de manera cercana con el candidato de la Alianza por Chiapas fueron Eduardo Ramírez Aguilar, Javier Ruiz Morales y su hermano, el empresario Rafael Ruiz Morales³⁵. La Casa de Campaña se instaló a fines de 1999 en un local de la casa de este último, quien poco después sería designado Coordinador Regional de la Campaña de Pablo Salazar Mendiguchía para la Región Fronteriza, con un peso importante en el trabajo de la Mesa Política de la Alianza por Chiapas.

³³ Algunas de estas organizaciones son la CIOAC, Coalición de Organizaciones Autónomas de Ocosingo (COAO), OPEZ – BPP, OCEZ – UMOI, Regiones Autónomas Pluriétnicas (RAPs), UGOCP selva, Totiques de Venustiano Carranza, entre otras.

³⁴ Se entiende aquí como gobierno dividido aquél en el que, en el marco de un régimen de división de poderes, el partido que llevó al presidente (o al gobernador) a ocupar la titularidad del Poder Ejecutivo no cuenta con el control mayoritario, estos es, con por lo menos 50% + 1 de los escaños de la Asamblea Legislativa (o en una de dos cámaras, si se trata de un sistema bicameral (Lujambio, 1996: 9).

³⁵ De acuerdo al excoordinador de Organización Territorial de la Alianza por Chiapas, José Castellanos Álvarez, los iniciadores de los trabajos y esfuerzos aliancistas fueron Rafael Ruiz, Eduardo Ramírez, Armando Solórzano, Antonio Aguilar Meza y él mismo. Es interesante anotar que según José Castellanos, cuando iniciaron los trabajos de la alianza, a mediados de 1999, Eduardo Ramírez y Antonio Aguilar “todavía eran estudiantes de la Universidad Autónoma de Puebla (Entrevista citada por: Cifuentes, 2004: 10).

Después del triunfo de Pablo Salazar Mendiguchía como gobernador de Chiapas, el posicionamiento político de Rafael Ruiz se expresó el 20 de agosto en una manifestación frente al palacio municipal de Comitán en donde el político comiteco anunció, aunque de manera no explícita, que se asumiría una estrategia similar para las elecciones locales del 2001 que llevarían a la derrota del PRI. Para ese momento, entre los actores políticos locales estaba ya la idea de que el próximo presidente municipal de Comitán sería Rafael Ruiz. El grupo aliancista de Comitán que operó la campaña del municipio y de la región fronteriza, fue recompensado por el nuevo gobernador. Se registra que la élite política local leal al gobernador, no sólo elaboró un Plan de Desarrollo Regional sino también varios de sus integrantes fueron llamados a formar parte del nuevo gobierno estatal³⁶. Así, Eduardo Ramírez Aguilar asumió el cargo de Delegado de Hacienda y Raúl Abarca Aguilar, la Delegación de la región Fronteriza de la Secretaría de Desarrollo Rural.

Resulta importante señalar que hasta el año 2000 los partidos políticos opositores al PRI, con excepción del PRD, ejercían un peso político muy débil en la vida sociopolítica local³⁷. El triunfo de la Alianza por Chiapas, reposicionó a los partidos políticos y por ende, las dirigencias partidistas veían con buenos ojos repetir la experiencia de una alianza partidista, ahora para la alcaldía comiteca. Cifuentes

³⁶ “[...] entonces Pablo Salazar invita a participar a Rafael Ruiz en la conformación de su gabinete, pero Rafa no acepta. Sin embargo sí le ofrece al gobernador electo una serie de propuestas para ocupar las distintas delegaciones regionales, incluyendo a Raúl Abarca para la SDR, Enrique Macal Cancino para el Instituto de la Vivienda, José Antonio Aguilar Meza para la Contraloría, Rosy Guadalupe Pérez a Canal 10 y a Leticia Albores Ruiz en el Servicio Estatal de Empleos. A mí Pablo Salazar me nombra delegado de Hacienda en sus propias oficinas (Entrevista realizada por Cifuentes a Eduardo Ramírez Aguilar, 2004: 9).

³⁷ El PAN en Comitán era prácticamente un instituto político monopolizado por el Ingeniero Francisco Tovar Armendáriz, el ingeniero Ricardo Villanueva Domínguez, Augusto Antonio Gordillo López y Marco Antonio Díaz Sántiz, sin haber logrado despuntar después del triunfo del candidato del PAN a la Presidencia de República en la contienda del 2000. La militancia panista seguía siendo reducida frente al inactivismo político de su dirigencia. Por su parte, el Partido Verde Ecologista Mexicano, quien pese a su alianza con el PAN en las elecciones federales del 2004, aún no contaba con el registro como partido en Comitán, pues su presencia era prácticamente desapercibida por la sociedad local. Después del triunfo de Fox inició algunos proyectos en localidades del municipio con la intención de incrementar sus adeptos.

(2004) registra que ya para febrero de 2001 el PVEM, el PRD y el PT habían propuesto a Rafael Ruiz como su candidato a presidente municipal. En breve se incorporaría el Partido Convergencia, de tal manera que el “destape” oficial se realizó el 4 de marzo de 2001 en presencia del gobernador Pablo Salazar Mendiguchía.

Sin embargo, *el premio* de la candidatura a la alcaldía comiteca dado a Rafael Ruiz en recompensa por el trabajo dedicado a la campaña de la Alianza por Chiapas, debía solventar las tensiones internas de los distintos actores políticos y sociales que protagonizan la vida política local. La primera de ellas, era la de doblegar políticamente a la élite local priísta. A este respecto la fórmula desde el propio aparato gubernamental fue la solicitud que el nuevo gobernador hiciera al presidente Fox de ejecutar una auditoría a la administración saliente en torno al manejo, uso y comprobación de los recursos del erario público. Adelantándose a ello, el propio gobierno del estado procedió a la supervisión del manejo de las finanzas públicas de la administración alborista. Siendo el exgobernador Roberto Albores Guillén, oriundo de Comitán y parte de la élite política comiteca establecida en la capital del país, muchos políticos comitecos habían ocupado cargos públicos durante su gobierno.

El común de la sociedad comiteca leyó este mandato del nuevo gobierno, más que como un acto de ley, como un acto orientado a debilitar al PRI: “era una cacería de brujas para dejar pelón al PRI comiteco” o “dejar flaca la caballada priísta comiteca”, fueron frases que reiteraron mis entrevistados. Falso o verdadero, el hecho real fue no sólo que muchos políticos comitecos huyeron de la tierra natal o simplemente se abstuvieron de entrar a una contienda que anunciaba el fracaso del PRI local, sino que se ejerció acción penal en contra de algunos priístas³⁸. En estas

³⁸ Fueron, entre otros, los casos de los priístas Adolfo Argüello Mandujano e Ismael Delfín Cristiani, quienes abandonaron el estado. Un caso más dramático fue el del doctor Francisco Humberto Córdova Cordero, a quien se le inició dos procedimientos administrativos, imponiéndosele una sanción económica e inhabilitación para ejercer cargos públicos, amén de su encierro temporal en el penal de Cerro Hueco.

circunstancias, amén de la ya grave fragmentación vivida por la élite política con la derrota del PRI en la Presidencia de la República y en la gubernatura de Chiapas, las luchas internas entre los priístas locales, acostumbrados al autoritarismo y al verticalismo del mandato partidista, hicieron lo suyo para que finalmente terminaran perdiendo la alcaldía comiteca.

Pero lo más relevante de destacar son las tensiones que se librarían al interior de los partidos políticos que inicialmente habían anunciado el proyecto de formar una alianza partidaria con un candidato único, tema que hoy es parte del debate político nacional en un sexenio de múltiples transiciones por las alianzas partidarias, empezando por la del actual Ejecutivo nacional y seguido por el Ejecutivo estatal de Chiapas (Azís, 2004).

En el caso de Comitán, derrotar al PRI implicaba un cambio inmediato en la correlación de fuerzas locales y ello exigía no sólo la mano dura del nuevo gobernador en la auditoría de las finanzas públicas, sino también de la instrumentación de la estrategia de una alianza partidaria similar a la emprendida en la elección pasada y legitimada por el argumento de derrocar al PRI y su dominio en el gobierno municipal. Este proceso de alianza partidaria implicaba indudablemente un trabajo político muy fino, que posibilitara bordar una estrategia en la que todos se sintieran representados. Los operadores políticos, encabezados por el propio candidato a la presidencia municipal, tendrían que bordar con las fuerzas políticas opositoras existentes y el primer paso era evitar la confrontación entre las mismas. Sin embargo, aunque los resultados fueron positivos, en tanto la elección municipal la ganó el candidato aliancista, ésta no tuvo el éxito alcanzado de la “Alianza por Chiapas” un año atrás.

De acuerdo con la cronología de los hechos descrita y analizada por Cifuentes (2004) y por mis pesquisas hemerográficas, entrevistas y charlas informales con los

pobladores y líderes de organizaciones y partidos políticos de Comitán, puedo aseverar que el proceso de formación de la Alianza por Comitán, fue un proceso que manifestó acciones y decisiones pragmáticas e instrumentales que privilegiaron una relación negociadora entre las dirigencias partidistas, subordinando a las bases o la militancia y con ellos los espacios o foros públicos que hicieran posible la consulta abierta a la ciudadanía y a través de ella arribar a una alianza partidista consensuada y democrática, como lo postulan teóricos como Hábermas (1993) y Arendt (2001). La ausencia de un foro público deliberativo se alimentó de comportamientos y prácticas inerciales propias de la cultura política tradicional, plagada de valores y creencias que por décadas fincaron una cultura política patrimonialista, propia de una sociedad Estado-céntrica que moduló el sentido y la orientación de la vida pública. A esta cultura contribuyó y sigue contribuyendo una situación estructural que se caracteriza por la persistencia de condiciones materiales de extrema precariedad que recurrentemente constriñe todo intento de innovación democrática en las prácticas y en las representaciones de los individuos o agentes sociales (Zermeño, 2005).

Al reconstruir el proceso que posibilitó la formación de la Alianza por Comitán, se observa que los actores y sujetos involucrados manejaron un discurso que hace imposible ocultar un mundo subjetivo en el que inconscientemente se incorporan valores y representaciones ancladas en una realidad y una trayectoria política y social que, por todos los medios posibles, invoca, por el lado de los actores políticos, la disputa por los factores reales de poder; por el lado de los sujetos y los sectores mayoritarios y sus mediaciones, la decisión de apostarle a quien tenga mayor posibilidades de garantizar el acceso a los cada vez más escasos recursos estratégicos públicos. Las grandes desigualdades en materia de derechos de ciudadanía que han caracterizado a Chiapas, con respecto a las otras entidades federativas y el centro del país, es el “talón de Aquiles” de la democracia en Chiapas y en el municipio de estudio. Reconstruir la historia de la Alianza por Comitán tiene

la virtud de describir el comportamiento real de los actores políticos, es decir, los partidos políticos.

Como ocurrió con la Alianza por Chiapas, el partido más convencido de la Alianza por Comitán fue el Partido del Trabajo (PT), órgano político que ya había obtenido significativos dividendos con el triunfo de su candidato a la gubernatura. Es esta agrupación quien, bajo previo acuerdo con el futuro candidato y colaboradores de éste, propone y convoca a los otros partidos políticos, a la formación de una coalición partidaria proponiendo como candidato común para la elección municipal a Rafael Ruiz. Los dirigentes de este partido asumieron la tarea primaria de organizar las primeras reuniones con los otros partidos, con una propuesta de antemano: en atención a la fuerza política de cada uno de los partidos, ofrecer la candidatura a la diputación distrital y a puestos claves en el ayuntamiento o puestos administrativos en otras áreas de gobierno local, a cambio de aceptar como candidato a la presidencia municipal a una persona ya ungida desde las altas esferas del poder estatal (Cifuentes, 2004).

Era evidente que el organismo político de oposición más fuerte en la mayoría de las localidades del municipio de Comitán, aunque no tanto en la cabecera, era el PRD, por lo que gran parte del éxito de la alianza dependería de este partido y no tanto del PT quien prácticamente no había alcanzado ningún voto en las elecciones municipales de 1995 y sólo obtuvo 628 votos en la elección municipal de 1998. Los líderes locales de este partido, como señalan mis entrevistados, asumían decisiones que eran más producto de sus alianzas con el gobierno y el grupo local aspirante al poder que de una consulta y diálogo con sus bases, escasas por cierto.

A este respecto, uno de los entrevistados se interrogaba:

¿Era el PT en Comitán un partido con la fuerza electoral necesaria para convocar a la formación de una alianza partidista ofreciendo y

negociando cargos de elección y puestos administrativos? No, creo que sólo estaba sirviendo a los intereses de su gobernador (entrevista anónima, febrero, 2003)

Quienes integraban la pírrica dirigencia local del PAN, que a decir de algunos ciudadanos comitecos se habían vuelto “soberbios” por el triunfo del panista Fox, tenían en realidad poco trabajo con la sociedad del municipio, incluso en la propia cabecera. En efecto, el PAN no registró voto alguno en las elecciones de ayuntamiento en 1991; en las elecciones municipales de 1995 sólo alcanzó 730 votos y en la elección de 1998 obtuvo 1,024 votos. No obstante, el que formara parte de la Alianza por Comitán era una decisión estratégica, pues en las elecciones de gobernador del año 2000 al participar en la Alianza por Chiapas, y el haber ganado el candidato Fox, políticamente se había reposicionado. Señala Cifuentes (2004) que en los primeros meses de 2001, Rafael Ruiz se reunió con la dirigencia panista para convencerla del proyecto aliancista, proponiéndole opciones para la elección democrática del candidato a la alcaldía, e incluso planteando que de las filas del PAN saliera el candidato a diputado local. La dirigencia panista no aceptó las propuestas.

Sin el PAN, el 27 de febrero de 2001 cuatro partidos políticos: PRD, PT, PVEM y Convergencia postularon como candidato único a Rafael Ruiz para contender por la presidencia municipal de Comitán³⁹. Sin embargo, el PVEM y el Partido Convergencia terminarían desistiendo, con lo que la Alianza por Comitán terminó siendo una coalición de dos partidos y no de cuatro. En realidad el PVEM no tenía ninguna representación real en el municipio. En las elecciones municipales de 1991, 1995 y de 1998 no había logrado alcanzar ninguna votación. Aunque en el año 2000 se registró en la coalición de la Alianza por Chiapas, era claro que no tenía arraigo en Comitán, su militancia era muy precaria. Después del triunfo del

³⁹ “Por tal motivo quienes conforman la Alianza informan... en base a la consulta ... con la militancia, consejos o coordinaciones municipales de cada partido político y en base a los estatutos de los mismos, acuerdan designar por unanimidad al C. Rafael Ruiz Morales como precandidato a la Presidencia Municipal de la Alianza por Comitán, para ... participar ... encabezando la planilla ... en las próximas elecciones municipales (Cifuentes, 2004: 49).

gobernador, se registra a este partido involucrado en la gestoría de proyectos, como los de dotación de estufas y cilindros de gas y algún proyecto relacionado directamente con la ecología. Sin contar con el registro, la dirigencia comiteca del partido, había decidido participar en la Alianza por Comitán, sin embargo, la dirigencia estatal condicionó dicha decisión, entre ellas que le garantizaran algunas regidurías. Frente a la respuesta negativa de los otros partidos y del propio grupo del candidato municipal, el PVEM decide no formar parte de la Alianza por Comitán⁴⁰. El PVEM formó su propia planilla aunque con un candidato externo, un dirigente del Partido Acción Nacional. Con respecto a Convergencia, la decisión final de no participar en una alianza partidaria no generó ningún impacto, pues tampoco figuraba como una fuerza política local de importancia.

Tenemos así que la única fuerza partidista real para encabezar la Alianza por Comitán era el PRD. En las elecciones municipales de 1991 se impuso como la segunda fuerza partidista con 2,534 votos; en las elecciones de 1995 vio crecer su popularidad a grado tal que estuvo muy cerca de arrebatarle el triunfo al Partido Revolucionario Institucional. Sin embargo, en las elecciones municipales de 1998, aunque se mantuvo como segunda fuerza política con poco más de tres mil votos, registró una caída estrepitosa con respecto a las elecciones de 1995 cuando obtuvo 10,065 votos. Sin embargo, seguía siendo la segunda fuerza política capaz de disputarle el poder al partido tricolor. Además, debe reconocerse que el PRD era el partido que mantenía lazos estrechos con la mayoría de las organizaciones que se identificaban como ‘independientes’.

⁴⁰ De acuerdo a la entrevista de Cifuentes con el fundador del PVEM en Comitán, éste argumentó que fueron excluidos de la planilla de la Alianza, aunque: “Rafa habló de la posibilidad de darme una dirección para quedarnos, pero alguien me aconsejó lo contrario: Rafa Ruiz podría no cumplir la promesa del puesto administrativo. “Tú ya tienes 1000 gentes, con esa cantidad de votos alcanzas una regiduría”, me decían” (Cifuentes, 2004: 60).

En este contexto, cabe preguntarse sobre el comportamiento del PRD, partido que hipotéticamente debía jugar un papel político protagónico en la formación y conducción de la Alianza por Comitán, pues era el partido con mayor militancia local. De acuerdo a Cifuentes (2004) y a medios informativos, en el mes de abril de 2001 el PRD cubrió el requisito de celebrar la sesión del Consejo Municipal para aprobar su integración a la alianza partidista y contender bajo la normativa de una coalición. Durante cuatro días se celebró la Asamblea Extraordinaria de la Comisión Ejecutiva Nacional, en donde se aprobó integrar la coalición y respetar la normativa de la Alianza como partido coaligado⁴¹. Sin embargo, pese a este formato formal, como nos dice un militante del PRD comiteco:

En los municipios es muy difícil que la dirigencia local tome en cuenta a sus bases, cuando lo hacen, generalmente tienen dificultades con la dirigencia estatal o nacional. Con la idea de la Alianza por Comitán probablemente muchos perredistas, me refiero a la militancia, hubieran estado de acuerdo, pero los procedimientos fueron antidemocráticos, muchos no estuvimos de acuerdo, pues era más de lo mismo (entrevista anónima. Noviembre, 2001).

Las diferencias en el seno del PRD comiteco llegaron a situaciones que pusieron en riesgo a la propia Alianza. Aún formada la Alianza en los términos normativos de la ley electoral, en el seno del comité municipal del partido habían muchas tensiones que contribuyeron a erosionar el protagonismo de una verdadera alianza partidaria.

¿Qué ocurría en el interior del PRD municipal? ¿Por qué una fracción del PRD se comportó como uno de los adversarios internos de la Alianza por Comitán? ¿Había claridad en los beneficios que la alianza partidaria les reeditaría al PRD como partido político?. De la información periodística y de mis propias pesquisas, se puede inferir que el protagonismo que en ese momento alcanzaba el futuro candidato de la

⁴¹ Se trata de la Declaración de Principios, Programas de Acción, Estatutos Únicos de la Coalición y Plataforma Electoral, aprobada por los partidos participantes en abril de 2001.

Alianza y su equipo de operadores, no residía en la fuerza de los partidos, sino en el apoyo político manifiesto por el gobernador aliancista y por el peso político que el propio aspirante había alcanzado en Comitán y en la región Fronteriza cuando éste fue coordinador de la Alianza por Chiapas.

En este marco, la fracción “radical” del PRD formaba por Izquierda de Unidad Popular y el Movimiento Popular Comiteco, en palabras de sus dirigentes, reconocieron que desde mucho antes que iniciara la campaña, en el espacio público comiteco ya circulaba la versión de la alianza y del señor Rafael Ruiz como candidato a la presidencia comiteca. Sin embargo, pese a que inicialmente vieron viable este proyecto pues ya era evidente el peso político del gobernador y la fuerza que éste tenía en la región, el aspirante a la alcaldía no se había acercado a ellos, por lo que fueron ellos quienes se le acercaron y le preguntaron su interés al respecto, teniendo como respuesta una negativa. Sin embargo, otro de los líderes reconoce que ya existía un acuerdo cupular entre el aspirante y el entonces Presidente Municipal del PRD, José Molina Gutiérrez, acuerdo en donde estuvieron ausentes las bases del partido. Es en ese momento cuando se generó una disidencia encabezada por los integrantes de Izquierda de Unidad Popular y el Movimiento Popular Comiteco, quienes iniciaron una campaña en contra del candidato aliancista. A decir de uno de sus dirigentes, el señor Rafael León Ruiz:

sólo pedíamos un proceso democrático de selección interna, conforme con nuestros estatutos, con dos o tres precandidatos; ahí podía estar el mismo Rafa Ruiz, un servidor y Víctor Díaz Molina, quien también quería participar (citado por Cifuentes, 2004: 65).

Para algunos militantes que se retiraron temporalmente del PRD, era claro que la correlación de fuerzas no le era favorable a esta disidencia, pues la alianza y el candidato Rafael Ruiz contaban con apoyo irrestricto de la dirigencia municipal, estatal y nacional del PRD. El candidato perredista para la alcaldía comiteca sería un

candidato externo, por lo que todo proceso interno de selección salía sobrando: “era hacerles el juego”. Aunque los intentos de negociación se dieron, las tensiones culminaron en una confrontación abierta en donde la disidencia logró conformar una planilla con un precandidato a la alcaldía, convocando a la militancia a no dejarse engañar por la dirigencia del PRD quienes estaban a favor de un cambio de personas pero no de proyecto ni de actitudes, en abierta alusión a Rafael Ruiz.

Para algunos actores políticos locales era clara la debilidad de la disidencia: los líderes de Izquierda de Unidad Popular y del Movimiento Popular Comiteco no formaban parte del comité municipal perredista; en ese sentido a pesar de la movilización importante que lograron en algún momento, se inclinaron por la idea de que los líderes disidentes sabían que no tenían posibilidades de ganar, por lo que mucho de las acciones políticas se encaminaban hacia la presión para obtener algunas ventajas, entre ellas la de participar en la planilla aliancista.

A lo mejor al principio los compas tenían buenas intenciones y estaban defendiendo sus convicciones partidistas, se les estimaba porque siempre fueron muy aguerridos, no se dejaban tan fácilmente. Sin embargo, sabiendo que estaban perdiendo, a lo mejor pensaron que después de todo debían sacarle provecho al movimiento. Además, ya sabemos que la consigna de los que tienen el poder es ‘divide y vencerás’. Creo que eso ocurrió con los compas, los dividieron (entrevista anónima, junio 2002)

Un dirigente perredista comentó:

Maldonado (del Movimiento Popular Comiteco) actuaba más bien por sus propios intereses, porque le interesaba tener algunos puestos en el ayuntamiento. Pero yo le doy la razón en cuanto a las observaciones que hacía respecto a la integración de la planilla del ayuntamiento, en el sentido de que mayoritariamente se trataba de priístas (entrevista anónima, agosto 2002).

Los acontecimientos posteriores dan cuenta de la fractura política de esta disidencia, motivada de alguna manera por la tensión abierta entre la dirigencia que

favorecía la alianza y la disidencia que postulaba a un candidato interno pero desprotegido del Comité municipal perredista.

Si una fracción del PRD se opuso a la alianza y a su candidato ¿Cuál fue la fracción que sí fue parte constitutiva de la alianza? Destaca, amén de la dirigencia municipal, la fracción de los llamados “Hebertos”⁴² cuyos líderes habían participado activamente en el proceso electoral del año 2000 apoyando la candidatura de Pablo Salazar Mendiguchía, lo que posibilitó desde entonces estrechar relaciones con Rafael Ruiz, en ese entonces coordinador regional de la campaña de Pablo Salazar Mendiguchía. Esta fracción del PRD está dirigida por varios médicos del Hospital General de Comitán y cuenta con la simpatía de los líderes y las bases de algunas organizaciones sociales.

Sin embargo, aún con ese grupo las tensiones se hicieron presentes, sobre todo en relación a la candidatura a la diputación del perredista Mario Luis Gómez, quien prácticamente se mantuvo al margen de la campaña de Rafael Ruiz, por intereses de este último. Como era de esperarse, el candidato para la diputación local del distrito de Comitán perdió.

Un dirigente de la OCEZ-UMOI, que acuerpa a habitantes de barrios de la ciudad y de comunidades de diversos municipios aledaños, comentó lo siguiente:

A la lucha política local de 2001 había que apostarle porque se trataba de pensar más allá de la localidad, era importante terminar con el dominio del partido de Estado, pues a nivel estatal y federal ya se había logrado en el año 2000. Por ello, a nivel local nos coordinamos con varias organizaciones y le entramos al proceso electoral, aún sabiendo que Rafael Ruiz no era perredista (Entrevista, junio de 2003).

⁴² Se hacen llamar “hebertos”, pues se reivindicán como seguidores de Heberto Castillo.

Al intentar reconstruir la crónica de la campaña con base a mis informantes, se registra que hubo una insistencia por presentar al candidato de la alianza como un líder político capaz de atraer por sí mismo no sólo a importantes sectores de la sociedad comiteca sin filiación partidaria, sino también a militantes de partidos políticos cuyas dirigencias habían desdeñado la alianza. Al igual que en la campaña federal por la presidencia nacional y la de la gubernatura, el discurso político de los aliancistas insiste en el hartazgo de la sociedad hacia el PRI y sus métodos antidemocráticos de ejercer el gobierno. De acuerdo a estos discursos, la atracción hacia el candidato se daba también en los liderazgos y militantes del PRI que habían terminado, ante una oferta democrática, por romper con su partido.

Sin embargo, como comentaron muchos de mis entrevistados, la Alianza estaba en manos de los operadores políticos del candidato aliancista y, al margen de los líderes partidistas de la Alianza, trataron de atraer a los distintos sectores de la sociedad comiteca y hacer de la campaña “una movilización de la sociedad civil”.

Manejaron un discurso nuevo y la estrategia de la campaña fue, como la del año pasado, atraer a los grupos sociales que habían sido excluidos como tales de la vida política local, por ejemplo se le dio mucha importancia a las mujeres y se hicieron eventos con un discurso político propio a lo que querían escuchar las mujeres sobre sus derechos políticos. La Alianza hasta creó una organización de Mujeres Aliancistas y en torno a ellas trabajó. El discurso y la propuesta del candidato gustaba por eso, siempre se dijo que era “incluyente” y reconoció que habían grupos especiales con derechos propios como las mujeres, los creyentes católicos y no católicos, las personas de la tercera edad, los discapacitados. Creo que es la onda de los candidatos de ahora, lo vimos con Fox y Pablo Salazar. Pero también vimos que la campaña de Rafa Ruiz siguió la tónica de las campañas priístas, sí, recogían las peticiones y se comprometían a darles seguimiento y cumplirlas cuando llegaran al poder, y también dieron muchos regalos a la gente que iban a visitar en los barrios y en las localidades, también dieron, despensas, medicinas y algunas herramientas de trabajo, eso también era lo que hacía el PRI (Entrevista anónima, febrero 2003).

La realidad política terminó imponiéndose y las percepciones sobre el papel del PRD, más allá de sus confrontaciones internas, en la formación de la alianza y en la campaña electoral de 2001, es categórica en el sentido de su marginación real en la toma de decisiones sobre aspectos decisivos de la campaña electoral. Esta percepción fue compartida por los propios líderes y militantes del PRD:

Fue una campaña del candidato y sus aliados no partidistas, los partidos políticos tuvieron realmente poco que ver con la campaña. Si hubiera sido una campaña del PRD ésta no hubiera sido tan dispareja. El candidato del PRD a la diputación por el Distrito con cabecera en Comitán hubiera tenido el mismo apoyo que tuvo Rafael Ruiz, candidato a la presidencia. Hubieran ganado los dos, porque hubiera sido posible que la Alianza por Comitán se hiciera por los dos candidatos y no sólo uno. El gobernador apoyó a Rafa Ruiz pero no al candidato de nuestro partido para la diputación distrital⁴³. Claro, la dirigencia estatal y nacional ni tarda ni perezosa vino a tomarse la foto, pues ¿ganaron no?” (entrevista anónima, febrero, 2003).

Recuperemos una última declaración, hecha a Cifuentes, de uno de los líderes del grupo del PRD que participaron en la Alianza:

“Nosotros nos alejamos un poco de la campaña, aunque no dejamos de apoyarla, sobre todo porque nuestra fracción y una diversidad de perredistas comenzamos a sentir celos, a percibir la campaña como ajena, ya no era nuestra. Gente del PRI estaba no sólo incrustada, sino tomando decisiones, utilizando un lenguaje ajeno a los perredistas, defendiendo otras ideas”, [...].(Ibid: 72).

Una percepción similar es la siguiente:

“Yo creo que los partidos políticos aquí en Comitán se quedaron cortos en la elección. El candidato ya era fuerte, tenía el apoyo del gobernador, y creo que inició su campaña desde mucho antes, casi desde que ganó el gobernador. Desde entonces, Rafa Ruiz y la gente que lo venía apoyando *peinaron* a Comitán, tenían una gran lista de todas las organizaciones y grupos que existen en todo el municipio no sólo en la cabecera y no importaba que muchas o casi todas de esas organizaciones estuvieran en relación con la CTM, la

⁴³ El candidato a diputado del PRD por el Distrito electoral con cabecera municipal en Comitán, fue Mario Luis Gómez.

CROM o cualquier organización del viejo PRI, como ahora ya no le sirven a la gente quedó de puro membrete” (entrevista anónima, diciembre 2003).

Las elecciones municipales de 2001 trajeron consigo un hecho inédito en la vida política de la sociedad comiteca. De raigambre priísta y cuna de gobernantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Comitán registró la derrota de un candidato priísta en el gobierno municipal por un candidato que devino de la Alianza por Comitán. Después de 72 años de dominio político, lo sorprendente de la derrota del PRI, comentaron en su momento algunos políticos y analistas locales, era que diversos sectores y grupos formalmente priístas, habían apoyado el proyecto aliancista.

Así, Comitán, la cuarta ciudad más importante del estado de Chiapas, entraba a las municipalidades con alternancia política y con ello, hipotéticamente, al proceso de democratización de su vida política y social. Este triunfo, sustentado en una elección legítima por sustentarse en las instituciones democráticas responsables de la contienda electoral y de la transmisión del poder político –sistema electoral y sistema de partidos políticos-, convoca a escudriñar los sustentos y los comportamientos reales de los actores políticos y sociales que lo hicieron posible.

Los datos muestran varios hechos. En primer lugar se observa un incremento de los electores votantes, 22,778. Lo primero que hay que destacar es que la lucha electoral en el terreno real se dio prácticamente entre el PRI y la Alianza por Comitán; el segundo hecho a destacar son los resultados: el PRI obtuvo 8,046 votos contra 8,906 obtenidos por la Alianza por Comitán. Sin embargo el PRI impugnó los resultados de numerosas casillas ante el Instituto Estatal Electoral (IEE), Instituto que acreditó las causales de nulidad en nueve casillas. Los resultados finales variaron, aunque el triunfo de la Alianza fue inevitable: 8,156 votos frente a 7,552 del PRI, una diferencia de 604 votos.

Un hecho sorprendente fue la alta votación que alcanzó el PAS que, con 2,549, estuvo por encima del PAN y el PVEM, aunque ambos partidos registraron un incremento relativo de votos. El PAN incrementó sus votos en más del 67% con respecto a la elección pasada, y el PVEM obtuvo 1,117 votos, éste último por primera vez registra votación. El candidato y una parte importante de los integrantes de la planilla de este partido lo formaron líderes y militantes del PRI quienes se habían inconformado por el método de la elección interna de ese partido. Como señala Cifuentes, el número de votos obtenidos por estos priístas inconformes hubiera más que sobrado para que el triunfo hubiera sido del PRI. Una situación similar explica el peso alcanzado por el PVEM: disidentes del PAN se registraron en la planilla del PVEM, hecho que de no ocurrir hubiera colocado al PAN como tercera fuerza política. Es innegable en el campo electoral que el que gana, aunque sea por diferencia de un voto, gana, sin embargo, en el plano del análisis sociológico interesa explicar el hecho que conllevó a dicho resultado y por qué en esa proporción y no en otra.

Cuadro 1

Resultados de las elecciones municipales en Comitán y en los municipios de la Región Fronteriza, 2001.

Municipios	PAN	PRI	PRD	PT	COALICIONES	PAS	PVEM	VOTOS VALIDOS
Comitán	1,712	7,552		-	8,156*	2,549	1,117	21,086
Chicomuselo	2,098	3,907	3,059	191	-	-	-	9,255
Comalapa	797	5,243	1,929	360	-	267	839	12,042
Independ. La	2,584	3,388	2,080	0	994	788	-	9,842
Margaritas L	232	6,780	10,506	4,733	-	934	-	23,185
Socoltenango	2	2,043	-	0	3,220	-	24	5,289
Trinitaria La	768	9,834	3,894	885	-	-	113	15,494
Tzimol	288	2,327	1,191	-	-	-	266	4,072
M. Tenejapa	480	721	545	-	-	257	-	2,003
R Fronteriza	8,961	41,795	23,204	6,169	12,370	4,795	2,359	102,268
Chiapas	202,352	378,001	228,819	79,159	79,578	54,165	32,759	1,065,930

Fuente: IEE.

*Alianza por Comitán (PRD-PT)

El 5 de octubre de 2001 en Comitán ocurrió lo que parecía imposible de ocurrir. Después de 72 años de dominio priísta, la alcaldía comiteca es ganada por una coalición de dos partidos políticos, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido del Trabajo (PT).

Este acontecimiento no es un hecho menor, ya que la ciudad de Comitán y su entorno regional es tierra de personalidades del mundo político chiapaneco, gestores, primero, de una retórica de autonomía e independencia; después, de un discurso político centrado en el nacionalismo revolucionario, a sabiendas de su inserción subordinada, aunque no exenta de privilegios particulares, al sistema político mexicano posrevolucionario, cuya expresión de unificación fue el entonces partido del Estado, el Partido Revolucionario Institucional. Don Mariano Robles, Fray Matías de Córdova, destacarían entre los primeros, y Reynaldo Gordillo, Manuel Rovelo Argüello, Jorge de la Vega Domínguez, Absalón Castellanos Domínguez, Roberto Albores Guillén y otros tantos entre los segundos (Ramos, 2000: 44 - 45).

Ya en el capítulo III mencioné que durante la gestión del Gral. Absalón Castellanos Domínguez, oriundo de Comitán, se vivió en el estado un proceso de represión institucional y privada hacia las organizaciones que se reivindicaban como ‘independientes’ del gobierno. Por su parte, Roberto Albores Guillén apenas había dejado el poder en el año 2000, como parte de uno más de los gobiernos interinos en Chiapas, específicamente después del alzamiento armado de 1994. La élite política comiteca tiene su historia particular, a finales de los años setenta Jorge de la Vega Domínguez fue nombrado para cubrir un período de interinato en la gubernatura del estado, posteriormente llegaría a ser Presidente Nacional del PRI. Actualmente en la política nacional figuran los comitecos Roberto Albores Guillén y la profesora Elba Esther Gordillo, protagonista de la actual disputa priísta con Roberto Madrazo. Por supuesto que la influencia de dichos personajes en la política local es importante, particularmente para los militantes del PRI.

El fenómeno de la alternancia en Comitán trajo consigo muchas interrogantes ¿Se trataba de un comportamiento pragmático por parte de los electores?, ¿se votó porque se supuso que siendo el gobernador amigo del candidato aliancista, Comitán se vería beneficiado?, ó ¿la sociedad comiteca realmente valoró las dimensiones positivas que trae un gobierno democrático?, ¿estamos hablando de un cambio en la cultura política de los comitecos? Estas preguntas entrañan un tema hoy controvertido: el de la ciudadanía y su compromiso con la democracia.

Recuperando la afirmación de Vallespín (1994:8) en el sentido de que todo planteamiento político cobra su identidad propia a partir de la negación del otro, de lo otro frente a lo que trata de elevarse, el análisis de este hecho político inédito, la alternancia en un espacio social local, puede sustentarse bajo el parámetro de que es un fenómeno político vinculado a las alternancias en otros municipios, pero sobre todo, un proceso de cambios tanto en las dirigencias políticas como en las acciones y comportamientos de las organizaciones sociales y la sociedad civil en su conjunto.

4.2.2 la historia reciente de las elecciones municipales y el arribo de un gobierno municipal de alternancia en 2001.

Los datos electorales anteriores a la elección de 1995 dejaron en realidad muy poco margen para un análisis realista del comportamiento político de la sociedad comiteca, particularmente de su electorado. En las elecciones municipales de 1988 por ejemplo, los datos registraron un total de votos válidos de 22,901 que en su totalidad fueron registrados como votos al PRI. Seis partidos de oposición contendientes del PRI no obtuvieron ningún voto, hecho nada creíble si recordamos que para esas fechas, en la cabecera de este municipio ya existían organizaciones de oposición que realizaban importantes movilizaciones manifestando su repudio al partido en el poder.

Cuadro 2
Resultados de las elecciones municipales en Comitán y en municipios de la
Región Fronteriza, 1988

Municipios	Total votos válidos	PRI	PFCRN	PAN	PMS	PARM	PPS	PRT
Comitán	22,901	22,901	-	-	-	-	-	-
Chicomuselo	5,428	5,428	-	-	-	-	-	-
Comalapa	8,948	8,948	-	-	-	-	-	-
Independencia La	1,884	1,715	-	-	164	-	-	5
Margaritas Las	11,124	6,078	247	-	4,217	180	-	402
Socoltenango	3,398	3,398	-	-	-	-	-	-
Trinitaria La	8,680	8,680	-	-	-	-	-	-
Tzimol	2,403	2,403	-	-	-	-	-	-
FRONTERIZA	64,766	59,551	247	-	4,381	180	-	407
CHIAPAS	490,034	421,889	22,656	20,528	12,244	9,178	2,922	617

Fuente: Comisión Electoral Local, 1989, en *Agenda Estadística Chiapas 1989*, Secretaría de Programación y Presupuesto del Gobierno del Estado, Chiapas, México, pp. 299-304

En las elecciones municipales de 1991 los resultados vuelven a ser favorables al PRI. Sin embargo, se registran algunos datos que nos muestran que la sociedad local no manifiesta un interés generalizado por el sistema de representación política democrática, cuya máxima en la lucha y transmisión del poder político son las elecciones. En 1991 se registra que de una lista nominal de 36,449 electores, sólo acudió a las urnas el 59.33%, es decir, 40.66% se abstuvieron de hacerlo. Del total de votos válidos, que es igual al total de votos porque no se registran votos nulos, el 88.28% correspondieron al PRI, no obstante, los votos del PRI sólo representaron el 52.38% de los electores de la lista nominal. Un hecho importante de señalar es que a diferencia de la elección de 1988 donde los partidos de la oposición prácticamente no existen, en esta elección se registra al PRD con un número de votos importantes: 2,534, que representan el 11.72% del total de votos válidos y el 6.95% de la lista nominal.

Dolores Estrada, perredista, regidora durante el gobierno de Rafael Ruiz, comenta sobre su participación a principios de los años noventa:

En 1991 iniciamos los intentos por fundar el PRD aquí en Comitán. Un grupo de compañeros que habían militado en el PMT estaban con la idea de iniciar el partido, porque aquí solo ganaba el PRI. La CIOAC tenía oficinas en Comitán, pero su trabajo era realmente en los municipios de Las Margaritas y la Independencia.

Como en ese año iban a haber elecciones se decidió participar, pero el que iba a ser candidato, que había participado en el movimiento de “las canasteras”, no tenía credencial de elector, entonces se decidió que yo fuera la candidata, yo acepté, sabía que no era para ganar, era para iniciar un trabajo del PRD en Comitán. Se hablaba de que si se lograba una votación de mil o mil quinientos votos iba a ser un triunfo. Fue una campaña de casa en casa, los recursos de publicidad eran mínimos. Sacamos dos mil quinientos votos, el PRI obtuvo 19 mil votos con Utrilla Alvarado. A partir de ahí se formaron algunos comités de base en los ejidos y en algunos barrios (entrevista, abril 2004).

Cuadro 3

Resultados de las elecciones municipales en Comitán y en los municipios de la Región Fronteriza, 1991

Municipio	PAN	PRI	PPS	PRD	PFCRN	PARM	PDM	V.VALI DOS	T.VO TOS	L.NOMI NAL
Comitán	0	19,094	0	2,534	0	0	0	21,628	21,628	36,449
Chicomus	0	6,580	0	0	0	0	0	6,580	6,580	8,975
Comalapa	0	7,186	0	1,618	0	0	0	8,804	8,862	14,946
Indep.La	0	3,078	0	1,039	0	0	0	4,117	4,117	10,744
Marg.Las	0	9,654	0	7,882	0	0	0	17,536	17,536	32,489
Socolten	0	4,105	0	0	0	0	0	4,105	4,105	5,047
Trint.La	0	18,114	0	0	0	0	0	18,114	18,114	18,869
Tzimol	0	3,368	0	0	0	0	0	3,368	3,368	4,363
Región	0	71,179	0	13,073	0	0	0	84,252	84,310	131,882
CHIAPAS	50,950	622,515	10,021	61,866	20,530	10,273	0	776,155	780,964	1,346,384

Fuente: <http://cee-chiapas.org.mx/estadísticas/ayum91.htm>

En la elección municipal de 1995 el comportamiento político de la sociedad y del electorado representa un punto de inflexión en muchos sentidos. Tiene tras de sí la crisis política provocada por la aparición del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en enero de 1994, y la serie de eventos violentos que protagonizó la clase política del régimen priísta, como el asesinato del propio candidato a la presidencia de la República mexicana. Otro hecho local significativo es la reñida elección por la gubernatura de Chiapas en 1994 en donde si bien gana el PRI, el nuevo gobernador se ve obligado a renunciar casi de manera inmediata a su cargo, abriendo el campo a la llegada de gobernadores interinos y sustitutos.

En el municipio de Comitán, el PRI tuvo su primer aviso de alarma en las elecciones municipales de 1995, cuando el PRD obtuvo una significativa votación en el proceso electoral local y posteriormente en el distrital de 1997. Cabe mencionar que en los dos procesos, el candidato fue el Sr. Roberto Gómez Alfaro, un médico que goza de prestigio en la localidad y el municipio, particularmente en el área rural.

El mismo comenta:

Cuando me lancé a la presidencia creo que se iban más por Gómez Alfaro, porque lo querían, porque les había servido en el hospital, pero no porque tuvieran una concepción política profunda (entrevista, abril 2004).

Volviendo al proceso electoral municipal de 1995, los resultados manifiestan en primer lugar, un incremento del abstencionismo: de una lista nominal de 46,166 electores, el total de votos sólo fue de 23,112, de tal manera que el abstencionismo pasó de poco más de 40% a casi 50.0%. El segundo hecho fue la caída estrepitosa del partido oficial, el PRI. De obtener el 88.28% del total de votos válidos en 1991, obtiene ahora sólo el 49.13% del total de los votos válidos. En contraste, el repunte del PRD es prácticamente inédito al obtener el 46.34% del total de los votos válidos de la elección. El PAN por su parte hizo su aparición con sólo 5.88 % de la votación.

La candidatura del doctor Gómez Alfaro unificó a varios sectores de la sociedad comiteca. Los sectores campesinos, la población de muchas colonias populares, el magisterio, trabajadores de salud y algunos comerciantes, apoyaron su candidatura y apoyaron la idea de que fuera el PRD quien lo lanzara como candidato. El resultado de la participación de la gente en este proceso electoral fue histórico y más aún fue el resultado de la elección (Entrevista anónima, marzo de 2003).

Para una parte importante de los electores de Comitán el triunfo correspondió al PRD, sin embargo, a diferencia de la elección a la gubernatura de 1994 donde el PRD impugnó y logró encabezar importantes movilizaciones en contra de lo que las organizaciones denominaron fraude electoral, en Comitán sorprendió que este partido no hiciera lo mismo, ante la votación tan cerrada.

De acuerdo a los resultados de esta elección la diferencia fue 300 o 500. Hubo fraude, pues todavía el PRI tenía bastante control. Es cierto que el PRD no impugnó, unos dijeron que el propio candidato había llegado a un arreglo y otros que fueron los dirigentes los que no hicieron nada porque habían negociado. El que jugó un papel importante para que no hubiera impugnación fue el priísta Gómez Aranda (Entrevista anónima, abril 2004).

Esta situación dividió a los perredistas y a los que, sin serlo, apostaron por esta candidatura. Se habló de que se defendería el voto hasta las últimas consecuencias, sin embargo, las semanas pasaron y las discusiones no llevaron al consenso de qué acciones había que emprender. Vinieron entonces las acusaciones, el candidato acusó a los perredistas de no apoyarlo para pelear el triunfo, y por su parte, algunos sectores lo señalaron porque consideraban que había “negociado” con el PRI para aceptar su derrota.

El entonces candidato del PRD comentó sobre aquel proceso electoral:

Mis dos participaciones políticas han sido como candidato externo del PRD, pero no soy perredista. Cuando nosotros participamos en la presidencia sacamos 10,400 votos, la diferencia fue de 300 votos.

Indudablemente hubo un resurgimiento importante de la participación de la gente, yo no lo podía creer, porque el PRI era todavía omnipotente, omnipresente. Pero uno peca de ingenuo muchas veces, mi experiencia en los dos procesos electorales es que hay muy poca gente al interior de los partidos (PRD, PAN; PRI, etc.), que verdaderamente tengan un deseo de servicio, casi dentro de todos los compañeros que he conocido son muy pocos, no hay honestidad, los que dirigen los partidos a nivel estatal, municipal, son gente que ya se metieron al partido y lo han hecho un modo de vida y que no tienen ninguna diferencia con los priístas. Los perredistas son tan corruptos o más que los priístas, con una gran diferencia, son más ineficaces, menos inteligentes hasta para robar. Son gente oportunista, ya lo agarraron como *modus vivendi*. La gente tuvo una expectativa muy grande en el PRD, de crear algo diferente, eficiente, honesto.

En el proceso de 1995 hubieron varias cosas. Los primeros en salir corriendo fueron los de la dirección del PRD, cuando empezamos la lucha, ya no querían nada. Los que quedaron después luchando también iban por un puesto de colocación, yo quiero la basura, el agua, etc., eso te desanima y ves que es lo mismo, que no había una concepción política profunda, no estaban por cambios cualitativos en la sociedad. Había tanta corrupción en los dirigentes del PRD, yo no entendía por qué un perredista iba como síndico conmigo en la planilla y como primer regidor con los priístas. Yo en ese momento no hubiera podido trabajar con el PRI, pero él ya estaba pensando que si no quedaba como síndico iba a quedar como regidor, así de simple, de sencillo, de real, así de objetivo y de ojetivo (por ojetes). Yo siento que esta concepción mía no es solo mía, porque mucha gente está desilusionada de los partidos. Yo ya no me lanzaría a candidato de nada (Entrevista, abril 2004).

El PRD comiteco quedó en una situación de inestabilidad, además de sus diferencias internas, muchos simpatizantes terminaron convencidos de que los dirigentes sólo ven sus intereses personales, sin importarles los principios y las plataformas político ideológicas que sustentan al partido, menos los intereses de las mayorías. Esas elecciones abonaron para que una parte de la sociedad comiteca terminara convencida de que “las elecciones son una trampa del sistema, y de que por esa vía, la electoral, los sectores mayoritarios no lograrán la atención a sus demandas que por derecho constitucional les corresponde” (entrevista anónima, abril 2004).

Con el zapatismo, muchas organizaciones se hicieron o fueron simpatizantes del PRD porque comparten muchos principios, pero éstas dudan de que la vía partidista sea la alternativa y la salida a la resolución de los problemas que tiene la población. Hasta creo que esa percepción la tuvo el propio candidato, un doctor que siempre ha militado en la izquierda y ha ayudado a la gente pobre de Comitán y también a mucha gente que viene de la región Fronteriza a Comitán, campesinos e indígenas principalmente. Yo también creo que él ganó la presidencia pero se la quitó el PRI (Entrevista anónima, febrero, 2003).

La poca fe que se tenía en las elecciones, y con ello en la representación política democrática, no es un hecho nuevo en Comitán y en Chiapas. Sin embargo, ese sentimiento se hizo más generalizado con los resultados de las elecciones municipales de ese año, particularmente en Comitán y en muchos otros municipios de la región Fronteriza. En el caso de la elección que nos ocupa, es cierto que los votos obtenidos por el PRD estuvieron prácticamente cercanos a los que obtuvo el PRI. Sin embargo, también era cierto que la coyuntura abrió otras opciones de participación política y de presión al gobierno federal y estatal. Un ejemplo de ello fue la efervescencia en torno a la oleada de tomas de tierras en diversas regiones del estado (Villafuerte, et. al, 1999b), “recuperaciones” históricas desde la perspectiva de sus autores, despojo para quienes entonces eran los propietarios.

La toma de predios privados por parte de las organizaciones campesinas y la negociación con las instituciones gubernamentales que estaban dispuestas a dar respuestas a muchas de las demandas de las organizaciones de los sectores “populares” de Comitán, de alguna manera minimizaron el proceso electoral y sus resultados.

Cuadro 4
Resultados de las elecciones municipales en Comitán y en los municipios de la
Región Fronteriza, 1995

Municipio	PAN	PRI	PRD	PFCRN	PT	PVEM	PDCH	PFC	V.VAL	L.NOM.
Comitán	730	10,668	10,065	156	0	0	93	0	21,712	46,166
Chicomuselo	0	3,238	2,223	67	0	0	0	0	5,528	10,854
Comalapa	0	4,218	3,955	0	0	0	0	26	8,199	19,373
Indepen. La	0	2,488	2,330	0	0	0	99	403	5,320	13,122
Margar. Las	0	7,811	7,230	0	0	0	0	0	15,041	35,370
Socoltenango	0	1,835	664	0	97	0	0	0	2,596	6,081
Trinitaria La	245	5,645	3,280	75	0	0	530	0	9,775	24,397
Tzimol	0	1,979	751	39	0	0	0	0	2,769	5,548
Total Región	975	37,882	30,498	337	97	0	722	429	77,946	160,911
Chiapas	104,700	328,901	206,829	9,990	20,185	1,156	4,960	9,192	685,913	1,638,638

<http://cee-chiapas.org.mx/estadísticas/ayum95.htm>

Durante el ejercicio del gobierno municipal para el período 1995-1998, el PRI logró recuperar parte de su hegemonía perdida. Como gobierno priísta, el presidente municipal contó con el apoyo del titular del gobierno estatal, quien siendo oriundos de Comitán, impulsó la construcción de diversas obras públicas en beneficio del municipio, obras que de alguna manera, mejoraron el paisaje urbano de Comitán y reactivaron al municipio como el centro rector de la región Fronteriza.

Sobre estas bases, las elecciones municipales de 1998, dieron resultados que registraron una recuperación en los votos obtenidos por el PRI, que le permitieron holgadamente seguir gobernando a Comitán. En contraste, el PRD registró una caída estrepitosa, al perder más de la tercera parte del electorado alcanzado en las elecciones de 1995, a pesar de ello, continuó como la segunda fuerza política, con 3,058 votos obtenidos; por su parte, el PAN aumentó su votación a 1,024 votos. Los porcentajes serían muy similares en las elecciones distritales. El rasgo más grave de estas elecciones tiene que ver con la falta de credibilidad en el sistema de representación política democrática, pues de una lista nominal de 54,178 electores, sólo el 32.58% acudió a las urnas a sufragar su voto, lo que significa que más del 47% de la ciudadanía comiteca no votó.

Así, el PRI si bien ganó con el 70.46% del total de votos válidos, este triunfo sólo representa el 21.75% del total de electores de la lista nominal. De igual manera, el PRD se mantuvo como segunda fuerza política, pero sólo con el 5.64% de la lista nominal. En las últimas tres elecciones tenemos que el abstencionismo se incrementa, cuando hipotéticamente debíamos estar registrando el hecho contrario. Entre 1991 y 1995 el abstencionismo pasó de poco más de 40% a casi 50%, para situarse en poco más del 67% en las elecciones de 1998, cifra inédita en el municipio.

Cuadro 5
Resultados de las elecciones municipales en Comitán y en los municipios de la
Región Fronteriza, 1998.

Municipios	PAN	PRI	PRD	PT	PVEM	PDCH	PFC	V.V.	L.N.
Comitán	1,024	11,787	3,058	628	0	184	46	16,727	54,178
Chicomuselo	792	2,624	2,496	432	-	-	-	6,344	12,714
Comalapa	153	5,093	3,439	484	-	-	-	9,169	22,938
Independ. La	-	3,070	1,991	-	-	153	334	5,548	15,939
Margaritas L	0	7,153	6,220	1,799	-	-	-	15,172	41,652
Socoltenango	53	1,697	2,005	163	-	-	-	3,918	7,350
Trinitaria La	880	5,129	1,925	-	-	1,153	-	9,087	28,721
Tzimol	584	1,712	631	-	-	-	27	2,954	6,309
Fronteriza	3,486	38,265	21,765	3,506	-	1,490	407	68,919	189,801
Chiapas	123,703	414,713	241,084	32,205	4,983	6,812	9,339	847,489	1,930,239

Fuente: <http://iee-chiapas.org.mx/ayunm98.htm>

Otras fuerzas políticas que estuvieron en esta contienda electoral estatal fueron: JUSTA y Alianza Fraylescana, pero sin ninguna presencia en los municipios de la región.

4.3 Ciudadanía, sociedad civil y partidos políticos

Es indudable que una de las formas de participación política propia de la sociedad moderna es la representación democrática, que tiene su expresión institucional en el juego electoral y en las instituciones que lo hacen posible. Siguiendo la trayectoria de la dinámica política del municipio de Comitán, no puede dejar de reconocerse que la lucha por el poder político y el ejercicio del mismo se han dado, desde el período posrevolucionario, por el mecanismo de la elección de candidatos propuestos por los

respectivos partidos políticos. Sin embargo, también es cierto que fue un juego “perverso”, en tanto el partido de Estado, como tal, hizo uso de los recursos públicos y con ello el control de los factores reales de poder, que le posibilitaron mantenerse en el mismo.

En la década de los años setenta las fuerzas de la oposición nacional cuestionaron esta lógica de poder político y le hicieron frente a través de dos vías: la exigencia de una lucha electoral democrática, que posibilitó los procesos de liberalización y apertura política, permitiendo con ello el ingreso de los partidos políticos de oposición al juego democrático en sus distintas vertientes: nacional, estatal y municipal; y una vía radical que se opuso a entrarle de manera directa al juego electoral, pues representaba un campo de lucha política, en el que de antemano las instituciones que normaban las reglas del juego estaban controladas por el gobierno mexicano y su partido. En este marco, la lucha de competencia estaba regulada y cancelaba de antemano la posibilidad de transgredir las reglas y de redefinirla por parte de la oposición.

Nosotros siempre fuimos refractarios a los partidos políticos, nos daban mala espina. Mi llegada a Comitán tiene que ver con un trabajo más personal, restringido también a un pequeño colectivo de profesionistas que pensamos hacer una contribución en este estado y en esta región Fronteriza. Nuestras relaciones no eran con la población de la cabecera, más bien con localidades del municipio y de otros municipios de la región. Recuerdo que a finales de los años setenta y en los ochenta había gente de partidos políticos de izquierda. Recuerdo a gente del Partido Comunista que después se convirtió en el Partido Socialista Unificado de México. También tuve alguna referencia del Partido Socialista de los Trabajadores (PST) y del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT). No tenían mucha presencia, sabíamos de ellos por algunos “compas” que nos platicaban que estaban haciendo campaña en las localidades de la región, en Comitán casi no hacían trabajo político. Podríamos decir que la izquierda empezó a tener más peso en la región, cuando vino una organización nacional, la CIOAC, que de alguna manera estaba vinculada con algún partido de izquierda. Fueron muy sonadas las confrontaciones de sus dirigentes y

militantes con el gobierno del General Castellanos Domínguez, era gobernador, pero sobre todo, porque la familia de éste es de acá de Comitán y tenían fincas en la región de Las Margaritas.

Por supuesto que cuando había enfrentamientos con el gobierno, nosotros y otros miembros de organizaciones no gubernamentales apoyamos esas movilizaciones y nos sumábamos a sus causas. Pero teníamos nuestras diferencias, porque ellos tenían la lógica de luchar por el poder, de alguna manera entrándole al juego electoral, y se volvían muy tramposos, utilizaban a la gente para sus fines, que no estaban acá en Chiapas, sino en el Distrito Federal. Creo que por eso, aquí tuvo más peso la formación de organizaciones campesinas que enarbolaban la lucha agraria y las demandas de recursos para proyectos productivos o de servicios básicos. A veces, los líderes de los partidos políticos terminaban asumiendo como propia toda la lógica de la lucha de clases y ‘se la jugaban’ (Entrevista anónima, abril, 2003).

Otra remembranza sobre las relaciones entre la sociedad civil y los partidos políticos, es narrada por el médico Roberto Gómez Alfaro, quien no objetó citarlo.

Cuando yo llegué aquí, al presidente municipal lo trajeron de México, Enrique Culebro Carreri, porque era cuñado de Velasco Suárez que era gobernador. *Vente a Comitán*, le dijeron, y ahí se vino, así eran entonces las cosas, no como ahora que el PRI anda como con 7 precandidatos. Para 1978, el PCM ya no era clandestino, entonces el Dr. Ernesto González de la Torre juega como diputado en el distrito de Comitán. A pesar de un gran trabajo, logramos sacar 123 votos. Fueron meses de trabajo, nos daba ganas de llorar, pues el PRI sacó miles de votos. Después, cuando Manuel Albores Salazar se lanza a la presidencia, me invita para jugar como síndico. Eran ya los años ochenta, entonces ya comenzamos a tener más contacto con líderes campesinos, a través del hospital, de la OCEZ, de la CIOAC, de la UNCAFAECSA, de la Casa del Pueblo de Venustiano Carranza, de gente de Villa Las Rosas que son muy luchadores. A todos los vi nacer como organización. Andulio Gálvez, de la CIOAC, murió en mis brazos. A algunos otros líderes los trajeron heridos y los sacamos adelante. (Entrevista, julio 2003).

Estas dos entrevistas nos colocan en una etapa del movimiento campesino y *popular* que, para muchos de mis entrevistados, es lo más genuina de la izquierda y del movimiento social y político de Comitán y de su entorno regional. Ocurre

prácticamente a fines de 1970 y en los años ochenta. La demanda y la lucha giró en torno a la tierra, pero la plataforma político-ideológica se sustentaba en un principio clasista, entre el propietario y el campesino, entre la clase trabajadora y el Estado. El peso y la fuerza política de las organizaciones campesinas no se comparaba con la de los partidos políticos. No obstante, la contribución de éstos fue innegable, pues a través de sus denuncias en los medios de comunicación nacional, la sociedad, el gobierno y los políticos del centro del país se enteraban de lo que estaba ocurriendo en Chiapas y en sus regiones. Las organizaciones presionaban con todos los medios para que el gobierno federal tomara cartas en el asunto. La historia de este movimiento social ya se ha documentado, bastará entonces, señalar que ello explica la poca importancia que adquirió la lucha por la democracia electoral.

4.4 La elección municipal de 2004. Del encanto al desencanto ciudadano.

Es necesario hacer un análisis de la coyuntura electoral reciente para recuperar las tensiones o conflictos que enfrentan los partidos políticos en el municipio de Comitán. Lo que ocurrió en este proceso electoral de alguna manera nos da pistas para definir las tendencias de la acción social y participación política de la sociedad comiteca.

El ejercicio del gobierno local 2001-2004, presidido por la *Alianza por Comitán*, enfrentó muchos problemas, recibiendo el repudio de algunas organizaciones que lo apoyaron. Varios de mis entrevistados opinaron que actualmente no encuentran mucha diferencia entre los partidos.

Operan de la misma manera y hacen los mismos planteamientos, en el caso de la llegada a la presidencia municipal de la alianza encabezada por el PRD en el año 2000, las cosas no cambiaron, si se relacionaba al PRI con el oportunismo y la corrupción, eso se siguió

viendo en la administración de Rafael Ruiz, el oportunismo y el compadrazgo (entrevista anónima, septiembre 2003).

Un médico que dirige un organismo no gubernamental en la localidad, quien también es militante del PRD, afirmó:

La alternancia en Comitán es un cambio de siglas. No es la plataforma del PRD que gobierna, los militantes solo defienden su salario. Considero que se le regaló el partido a Rafa, el actual presidente municipal. El no era perredista, está ligado con la burguesía local y la mayor parte del ayuntamiento está integrado por priístas, hay gente de la sociedad civil pero de forma individual.

Hace muchos años que el PRD no crece, está secuestrado por un grupúsculo a nivel municipal, hay solamente 2,500 militantes, importantes para el PRD son Sarabia, Quistaj y la zona urbana. Tiene más militantes Villa Las Rosas que Comitán. Cuando fue candidato Gómez Alfaro a la presidencia municipal tuvo más de diez mil votos, para diputado más de 8 mil y ahora este candidato a la diputación federal por PRD, Utrilla, que es priísta, obtuvo solamente 2,100 votos. (Entrevista anónima, septiembre 2003).

Un dirigente campesino afirma:

El PRD está dividido y no ha tenido la capacidad de convocar a los no perredistas. Rafael Ruiz se alió con el Tono 'balazo', que es un cacique del transporte, con Roberto Mazariegos, al que le dicen el 'chucho blanco' y que está acusado de narcotraficante y de tráfico de indocumentados, también le ha dado mucha jugada al PRI y además se ha sumido en varios escándalos (entrevista anónima, septiembre 2003).

Estas percepciones de algunos dirigentes de organizaciones sociales e incluso de los mismos perredistas, también las encontré en las conversaciones informales que sostuve con habitantes de la localidad. Había por lo visto un saldo no muy positivo para el alcalde saliente, saldo que tendría sus efectos en el proceso electoral municipal y distrital de octubre de 2004.

Varios militantes y simpatizantes del PRD que fueron entrevistados, coincidieron en que este partido es visto como: “un partido sin fortaleza, preso de la fragmentación y la descalificación”. Todavía estaban recientes los sinsabores que dejó al PRD la imposición de su candidato a diputado federal en el año 2003, y así lo expresaron:

En las pasadas elecciones para diputados en el PRD ya había consenso gracias a 5 meses de trabajo, diversos municipios habían trabajado para la unidad del partido a nivel distrital, el candidato por consenso para diputado era el expresidente municipal de Socoltenango, Gilberto Morales, pero lo llamaron a palacio de gobierno y desistió de su candidatura.

La debilidad del partido posibilita que le sean impuestos acuerdos desde fuera, como sucedió con la nominación del candidato a la diputación federal de 2003. En los resultados para esa elección resultó triunfante el candidato del PRI, Mario Carlos Culebro, ante la fragmentación que se vivió al interior del PRD, al resultar designado como candidato de este partido el priísta Javier Utrilla Alvarado. En esta disputa interna muchos militantes del PRD expresaron su desconcierto por lo que llamaron la práctica del ‘dedazo’ desde palacio de gobierno, práctica avalada por la dirigencia estatal y nacional del PRD. Es como si el Comité Estatal del partido no existiera, como si no hubieran bases, si Pablo (Salazar) nombró a Utrilla es porque podía ganarle a Mario Carlos Culebro, quien es su enemigo político, pero le falló y Mario Carlos pudo ganar para el PRI. Los del CEN del PRD permiten ser tratados como empleados del gobernador (entrevista con un médico militante del PRD, noviembre, 2003).

También sobre el proceso de selección del candidato del PRD en las elecciones distritales de 2003, la entonces regidora del PRD expresó:

Fuimos a registrar de última hora a los candidatos del PRD para diputados, pero por acuerdo nacional el que puede registrar a los candidatos ante el IFE es el Comité Nacional del PRD. Pablo metió las manos, César Chávez impuso a Utrilla del PRI como candidato a diputado por el PRD. Pablo metió las manos porque el candidato del PRI, Mario Carlos Culebro, es su enemigo político, pues era presidente del congreso cuando Pablo era candidato. Los presidentes de los comités municipales del PRD apoyaron a otros perredistas para ser candidatos titular y suplente, pero las cosas ya estaban cocinadas (entrevista, junio de 2003).

Y en cuanto a la coyuntura electoral que se avecinaba para octubre de 2004, ya desde noviembre de 2003 se comenzó a manejar entre los partidos políticos la posibilidad de formar una coalición para el proceso electoral de octubre. El excandidato del PRD a la presidencia municipal, el profr. José Luis González Córdova, comenta:

La intención era hacer un proceso de selección histórico aquí en Comitán, hacerlo de manera democrática, participativa, convocando a los ciudadanos para tener un precandidato idóneo, pero la ‘caballada’ dentro de los partidos estaba flaca, no habían muchos candidatos con un perfil idóneo. Participaba principalmente el PRD como primera fuerza política y el PT y luego el PAN, convergencia y una serie de organizaciones políticas que desde las elecciones pasadas funcionaron como partidos políticos: el PAS, Fuerza Ciudadana, México Posible y la sociedad civil.

Pero siempre intervienen los intereses particulares de algunos partidos políticos que se querían llevar la mejor tajada del pastel. Hubieron ciertos liderazgos nocivos para esta coalición, como por ejemplo el del presidente del PRD, demasiada intromisión del entonces presidente municipal, Rafael Ruiz, que tenía también su propio candidato, casi impuesto por él, cuando todos sabemos que esa época del tapado, del dedazo, ya pasó a la historia. Se comenzaron a mencionar 3 nombres para contender por la candidatura: el Dr. Armando Cordero, José Antonio Aguilar Meza y yo. Empezaron los golpes bajo la mesa, jaloneos, acusaciones de un partido a otro, por eso se trataba de buscar un candidato externo para que los partidos políticos no despertaran ciertas ambiciones y preferencias. (entrevista, febrero 2005).

Continuaron las acusaciones para el presidente municipal de haber “destapado” como su candidato a José Antonio Aguilar Meza, por lo que los partidos políticos aceleraron el proceso porque ya no había confianza. Delegados de las comunidades y de la zona urbana eligieron al candidato, que resultó ser el Dr. Armando Cordero, este proceso de selección no estuvo exento de acusaciones de manipulación en la votación. Finalmente se abrió la campaña, anunciando la candidatura del Dr. Armando Cordero, en una alianza del PRD, PT, PAN y las demás fuerzas políticas. Cordero Tovar es un médico de la localidad sin trayectoria de

participación política, pero con prestigio de ser “un médico eficiente y tener una impecable calidad humana” (entrevista anónima, febrero 2005). Esta candidatura fue cuestionada por el Movimiento Popular Comiteco y por un grupo de perredistas disidentes, quienes demandaban que el candidato fuera electo realmente por “las bases”.

De las entrevistas y conversaciones informales se desprende que continuaron las pugnas al interior, desbordándose cuando algunos comenzaron a pelear los cargos de la planilla del ayuntamiento. Cordero Tovar expresó su desconcierto por esta situación, renunciando a la candidatura para evitar las imposiciones, posteriormente aceptaría la candidatura del PAN.⁴⁴ Ante esta situación el PRD y el PT tuvieron que nombrar a un candidato alternativo, el Profr. José Luis González Córdova, aunque una fracción del PRD apoyó a Cordero Tovar. Comenta González Córdova:

Antes de ver si se ganaba, ya se estaban repartiendo los puestos, cuanto vas a ganar, cuanto para mi partido, que voy a meter a mi hermanita y mi cuñado y el Dr. Cordero que es una persona muy sensata y que no es político, igual que yo, se dio cuenta de la manipulación, que nada más querían utilizar su imagen, su “don de gentes”, porque es una maravillosa persona. El Dr. puso *los puntos sobre las íes*, y dijo *la gente la voy a poner yo* y empezaron a hacerse demasiado tirantes las posturas. Ya se estaba acercando la inscripción al IFE de las alianzas, cuando faltaban 3 días para la inscripción seguía el jaloneo y vino la ruptura, y eso hace que el PAN se quede solo con su dirigencia y la militancia y los consejeros de ese partido se separan; convergencia que no es un partido que tenga mucha trayectoria política en Comitán, se quedó solo, sin candidato; el PT, las organizaciones políticas y el PRD voltean los ojos hacia mí y me hacen la invitación cuando faltaban 48 horas para la inscripción o nos quedábamos sin candidato, íbamos a una muerte política segura

Se inició la campaña de manera formal en mayo, solicito permiso al magisterio, se conforma la planilla con representantes que los partidos pusieron dejándome a mí la posibilidad de elegir al

⁴⁴ El Dr. Armando Cordero Tovar anunció su candidatura por el PAN, afirmando en relación a las pugnas que se vivieron al interior de la alianza, “porque es el partido que no me impuso condiciones ni me ató las manos”. Diario El Mundo, 24 de junio de 2004.

síndico y al primer regidor y los otros 7 puestos para regidores lo eligieron los partidos políticos (entrevista, febrero 2005),.

El presidente municipal del PRD *tronó* la alianza en 2004, a la fuerza quería ser síndico, no hubo madurez, y el candidato, el Dr. Cordero, no aceptó y renunció y se fue al PAN. Además Rafa Ruiz hizo un mal gobierno, solo cosechamos los frutos de eso (entrevista anónima, enero 2005).

A las percepciones respecto al gobierno de Rafael Ruiz, se sumó el hecho de que el entonces alcalde abandonara sus funciones aún sin esperar la autorización del congreso, para dedicarse a los trabajos de la alianza en la región. El anuncio de que dejaba la alcaldía fue realizado el día 1º. de marzo de 2004, afirmando que coordinaría la coalición política en la región a petición de los diferentes partidos políticos que integrarían la misma. Solicitó licencia para separarse del cargo, propuesta que el H. Cabildo presentó al congreso del Estado, nombrando por acuerdo, a Eduardo Ramírez como presidente interino, quien desempeñaba el cargo de síndico.⁴⁵ Éste, junto con Rafael Ruiz inició los trabajos de la alianza para apoyar la candidatura de Pablo Salazar en el año 2000. El Congreso del Estado no calificó la solicitud de licencia de Rafael Ruiz, toda vez que la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales no consideró prudente dictaminar dicha solicitud, por no tener los criterios debidamente establecidos. Sin embargo, también trascendió que los alcaldes deberían tener comprobada la cuenta pública del ejercicio presupuestal 2003.⁴⁶

Dejó tirada la presidencia y se fue a trabajar para la alianza y de por sí la gente no estaba muy contenta con su forma de trabajo, no se vio cuál era la diferencia con el PRI, fue más de lo mismo, lo único que cambiaron fueron las personas y los partidos (entrevista anónima, septiembre 2004).

⁴⁵ Diario El Mundo, 2 de marzo 2004. Comitán, Chiapas.

⁴⁶ Diario El Mundo, 13 de marzo 2004. Comitán, Chiapas.

El día 3 de marzo los líderes del PRD, PT, PAN y Convergencia, se reunieron y se pronunciaron porque Rafael Ruiz, fuera el candidato de la coalición para diputado local por el VI distrito con cabecera en Comitán.⁴⁷ Se suscitó entonces una confusión porque con Rafael Ruiz si se registró al PAN en alianza con el PRD y el PT y con el candidato a presidente municipal no era así. El PRI por su parte, registró como su candidato a Roberto Ortiz (llamado “El chato” Ortiz), alcalde durante el período 1995-1998.

Desde su perspectiva, José Luis González Córdova afirma que no resultó un hecho positivo para su candidatura el hecho de que la gente lo relacionara con Rafael Ruiz. Expresó:

En las manifestaciones de la gente era frecuente oír: *maestro nosotros vamos con usted, pero no vamos con aquel*. La ciudadanía me ligó con Rafa Ruiz aunque no quise, pensaban muchos que yo era representante de la presidencia municipal. Nosotros hicimos una campaña austera, ciudadana, no tuvimos recursos aunque fuimos acusados por el PRI que teníamos recursos del gobierno del estado. Yo nunca vi un peso, si hubieron recursos desmedidos a lo mejor fueron para el candidato a diputado, yo no tengo deuda con ningún político, la única deuda la tengo todavía, sigo pagando con el costo familiar que esto implica. Se me decía que contaba con apoyo del presidente municipal interino, al cual puedo decir que me liga a él una gran amistad, pero no hubo apoyos. Esto lo hicimos con dinero de todos, los que intervinieron en la planilla, los partidos políticos nos dieron dinero destinado para esto, pero no fue la gran cantidad de dinero, nos dieron en dos ediciones como 190 mil pesos, aunque una campaña así de pobre te cuesta un millón y medio de pesos. Por supuesto que hubo aportaciones de empresarios, de familiares, de amigos, se hacían *vaquitas*, mandaban a hacer playeras, gorras, tortas, hablábamos con una marimba para que no cobrara, la propaganda la manejaron los partidos políticos (entrevista, febrero 2005).

Al mismo tiempo, el PRI vivía su propio proceso interno de selección del candidato a alcalde, registrándose 4 precandidatos, tres de los cuales habían

⁴⁷ Diario El Mundo, 4 de marzo 2004. Comitán, Chiapas.

participado en los procesos internos anteriores: Víctor Manuel Pulido Guillén, Víctor Hugo Ruiz Guillén y Juan Francisco Torres Vera. El nuevo precandidato fue Jorge Constantino Kánter, recordado por militantes de las organizaciones sociales de la región y del estado, porque al inicio del conflicto armado de 1994, encabezó las protestas de los ganaderos del estado, llegando incluso a promover los frentes cívicos para la defensa de la propiedad y confrontándose con los diversos actores sociales del estado, particularmente con la diócesis de San Cristóbal de Las Casas.

En el mes de abril una encuesta realizada por la empresa Mitofsky dio a conocer las tendencias de las preferencias del voto priísta para elegir a su candidato a alcalde, colocando en el primer lugar a Jorge Constantino Kánter, con un 39.9%, seguido de Manolo Pulido, con 39.2%, Víctor Hugo Ruiz Guillén, con 10.7% y Francisco Torres Vera, con 10.2%.⁴⁸

Las precampañas al interior del PRI continuaron, el día 11 de julio se llevaron a cabo las elecciones internas para designar al candidato, dándose a conocer que el ganador había sido Jorge Constantino Kánter, en el orden en que lo había dado a conocer Mitofsky. 5,078 votos para el ganador, 4006 para Manolo Pulido, 3,959 para Ruiz Guillén y 1,118 para Torres Vera.⁴⁹ Inconforme con el proceso de selección interna del PRI, a principios del mes de agosto, Manolo Pulido, registró su candidatura por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).⁵⁰

Varios líderes campesinos de la región habían expresado su preocupación por el debilitamiento de la alianza PRD—PT, a raíz de la renuncia de Cordero Tovar, pues éste, “a pesar de su falta de trayectoria política, es un hombre con prestigio en la zona urbana y podía ser un buen candidato para la alianza” (entrevista anónima, septiembre de 2004). También expresaron su temor de que pudiera resultar vencedor

⁴⁸ Diario El Mundo, 28 de abril de 2004. Comitán, Chiapas.

⁴⁹ Diario Nuevo Milenio, 12 de julio de 2004. Comitán, Chiapas.

⁵⁰ Diario Nuevo Milenio, 2 de agosto de 2004. Comitán, Chiapas.

en la contienda Jorge Constantino Kánter, candidato priísta, a quien recordaban como “un hombre que está en contra del movimiento social, es un enemigo del pueblo” (entrevista con un dirigente de la OCEZ DI, septiembre de 2004).

Hasta antes de ser nombrado el candidato a diputado por la alianza PRD, PT, PAN, miembros del PRD y de organizaciones coincidían en que había condiciones para presentar una propuesta de unidad para las elecciones locales de octubre de 2004, pero también expresaron sus dudas sobre la posibilidad de ganar en las urnas:

Consideramos que ha habido un capital político desperdiciado por Rafael Ruiz, tal vez esto le afecte al PRD en las elecciones de 2004 (entrevista anónima, agosto, 2004).

Va a ser un proceso electoral difícil. Por eso la idea es que el PRD presente una propuesta que realmente represente al partido y a los intereses de la ciudadanía y de las organizaciones, un candidato con proyecto, que no sea candidato del gobernador. Si el PRI recupera la alcaldía sería un gran retroceso, mi percepción es que la ciudadanía no quiere que vuelva el PRI, pero tampoco están encantados con el PRD. Falta entonces que se pueda integrar un equipo de trabajo y demostrar a la ciudadanía que hay gente capaz en el municipio para gobernar realmente de oposición (entrevista con regidora militante del PRD, agosto, 2004).

Un dirigente campesino de la OCEZ UMOI planteaba que en el 2004 podía darse una alianza de organizaciones con los partidos, aún así veía difícil la posibilidad de ganar, porque consideraba que Rafael Ruiz, el presidente municipal, “adoptó actitudes del PRI”. Aún así, en 2004 los militantes de la OCEZ UMOI decidieron apoyar a los candidatos de la alianza PRD - PT, a José Luis González Córdova para alcalde y a Rafael Ruiz, para diputado. También apoyaron a los candidatos de la alianza los integrantes de la ODIC, el FRELUM, integrado por comerciantes de la central de abasto, la OCEZ DI, la corriente hebertista del PRD, sectores magisteriales, toj tzotz tze Li Maya.

Las campañas se convirtieron en acusaciones mutuas, particularmente entre los candidatos de la alianza y del PRI. Los de la alianza acusaban a los priístas: “regalaron mucho dinero durante su campaña, prácticamente compraron muchos votos, fue realmente descarado y el día de la elección no se midieron, repartieron a manos llenas los billetes”. Los priístas por su lado acusaron a los de la alianza: “hicieron uso de recursos públicos para las campañas de los candidatos aliancistas, no solo en Comitán, en todo Chiapas” (conversaciones informales, noviembre 2004).

El PRD realizó la campaña con una crisis muy fuerte, localmente le afectó la fractura de la alianza con el candidato propuesto inicialmente. A nivel estatal, su dirigencia se disputaba la legitimidad de su nombramiento, en donde de nuevo, varios actores políticos en la región y en el estado señalaban al gobernador manejando los hilos de la política al interior del PRD. Como ya he mencionado, el PRI también tuvo su propia crisis en la disputa de los precandidatos para lograr la candidatura.

Finalmente llegó el día de las elecciones, varios militantes del PRI informaron que el exgobernador Roberto Albores Guillén, llegó para votar y apoyar al candidato del PRI. Desde la tarde se comenzó a rumorar que en varias casillas había resultado triunfador Jorge Constantino Kánter. También se rumoraba que el “Chato” Ortiz, candidato del PRI a la diputación, se ubicaba arriba en las preferencias. Por la noche comenzaron a fluir los resultados del Programa de Resultados Preliminares (PREP) y las noticias locales y estatales colocaban como triunfadores con muchos votos de diferencia a los candidatos del PRI.

En los resultados oficiales de la elección para alcalde, el PRI obtuvo 11 mil 746 votos, la alianza PRD-PT, 7 mil 671 votos y en tercer lugar el PAN, con 5 mil 928 votos. El candidato del PVEM obtuvo 3601 votos. Para el distrito los resultados también favorecieron cómodamente al PRI, con una votación de 26,342 votos; en

segundo lugar quedó el candidato de la alianza PAN, PRD, PT, con 21,033 votos; seguido del PVEM, con 11,118 votos.

Comenta quien fue candidato por el PRD a la alcaldía, José Luis González Córdova, mismo que actualmente ocupa el cargo de regidor en el nuevo ayuntamiento:

Hasta el día de la elección el PRI hizo lo que siempre ha hecho,. Intervinieron figuras políticas de renombre. Mi lucha fue contra 3 exgobernadores de Chiapas, Roberto Albores, Jorge de la Vega y Absalón Castellanos Domínguez, este llegó a votar junto con el candidato del PRI, hubieron muchos apoyos para ellos. Políticos de Tabasco, Campeche, Yucatán, apoyaron al PRI una vez que hicieron su proceso de selección interna, el PRI supo reagruparse y la ciudad vio con mejores ojos eso por toda la *loza* que yo traía encima con la administración de Rafa Ruiz. El 3 de octubre hicimos lo posible por evitar la compra de votos, pero hubo mucho dinero, siento que donde perdí, independientemente de las cargas que traíamos, lo perdí en la zona urbana, porque en la zona rural el porcentaje que teníamos contemplado de votos los obtuve, no así en la zona urbana donde teníamos un aproximado de 5 mil votos, y obtuvimos 2 mil, los otros 3 mil son los que obtuvo el PRI, 8 mil para nosotros, 11 para el PRI.

Actualmente el PRD municipal se tiene que recomponer, eliminar a los malos funcionarios de partido, se va a hacer como en el mes de julio una reestructuración del comité municipal. En el municipio hay poco optimismo de que se vayan a reorganizar. El actual presidente del comité municipal, Fernando Rodríguez, no tiene a nadie, está solo, no hay uno comité formado, no hay tendencia de unificación (entrevista, febrero 2005).

4.5 La lección electoral ¿qué todo cambie para que todo siga igual?

Una evaluación de los comicios electorales en Chiapas, y en el municipio de estudio, no puede desconocer que la competencia electoral es una realidad, como también lo es el protagonismo que hoy juegan los partidos de oposición, manifiesto en resultados electorales que registran la alternancia en los gobiernos municipales, en los congresos nacional y estatal y, la primera alternancia en la gubernatura en las elecciones de 2000.

Pero estos resultados positivos, no pueden ocultar, lo que ha estado detrás de los procesos comiciales. La dinámica electoral no está fundada ni en las identidades político-ideológicas ni en los proyectos alternativos de gobierno, que formalmente definen a los partidos políticos. En el seno de los partidos políticos están operando identidades grupales con un comportamiento político propio de las facciones. Este fenómeno no es reciente, obedece en buena medida a la falta de reconocimiento y legitimidad de los partidos políticos por parte de la población mayoritariamente campesina e indígena, frente a las organizaciones *populares* que hasta muy recientemente habían alcanzado un protagonismo en la mediación política (García et. al., 1998).

Este vaciamiento de los contenidos formales de los partidos –un ideario político-ideológico y un proyecto económico como plataforma de campaña- fue visible en el caso de Comitán en las elecciones de 2001 por la presidencia municipal. Para el ciudadano común ha sido fácil reconocer que en dichos comicios, un líder y su grupo, cuyo antecedente inmediato fue el trabajo cercano que habían realizado en los comicios del 2000 por el candidato de la Alianza por Chiapas, aprovecharon los registros de dos partidos políticos –el PRD y el PT- para contender. También reconoce que si el otro partido no participó en la alianza - el PAN - fue porque “no le llegaron al precio”, además de que “había sobrevalorado el peso que les daba que el

PAN hubiera ganado las elecciones presidenciales, pensaron que como ganó Fox, también iban a ganar ellos” (entrevista anónima, noviembre 2001).

Reconozco, como me comentaron varios líderes de los partidos políticos, que el cambio electoral es un proceso inédito en Chiapas y si bien es cierto que pueden ya vislumbrarse escenarios negativos, también hay otros procesos inéditos y positivos. Aunque los votantes ya no guardan ninguna lealtad al partido oficial, en realidades como las del municipio de estudio, y otros muchos municipios de Chiapas, el voto se vende al mejor postor y en ese sentido, es clientelar. Es cierto que la gente ahora decide, pero ésta decisión está definida por un carácter pragmático, que no es un comportamiento negativo, sin embargo, el voto se da a quien medra con las necesidades vitales de la gente, a la que se le promete la resolución de sus problemas.

En las elecciones municipales de Comitán del año 2004 pierde la Alianza PRD-PT, ganadora en los comicios pasados, y la gente de Comitán considera que fue “un voto de castigo por la pésima administración y gestión política del ayuntamiento comiteco”. Este comportamiento de los electores es un factor positivo, pues a la larga, puede derivar en una decisión más racional, rompiendo con viejas lealtades y abriendo nuevos espacios que posibiliten un proceso de alternancia fincada en el buen gobierno y no en cambios abruptos de los grupos en el poder, que al ver reducido su futuro político a una administración medran con los recursos destinados a las políticas públicas.

Resulta un poco prematuro hacer una evaluación de la alternancia en el poder municipal, ésta no es sólo reciente, sino que después del triunfo de una alianza de dos partidos en las elecciones de 2001, en las elecciones de 2004 el triunfo es recuperado por el PRI, y aunque ello signifique alternancia en el poder, existe una lectura de que se vuelve al viejo esquema de comportamiento político. No obstante, sí se puede registrar que es poco lo que se puede abonar a favor de un cambio en las relaciones

entre el gobierno local y su sociedad, las relaciones gubernativas siguen el mismo esquema centralizador y con espacios casi nulos de participación ciudadana y de la sociedad civil. Creo que la alternancia como una expresión de la vida democrática, tampoco significa por sí sola la solución a los conflictos derivados de las demandas sociales o de tensiones que operan en el campo de las fuerzas políticas, pero sí representa un punto de partida, y éste continúa siendo un aspecto de la agenda de diversos actores que ven en el gobierno municipal un espacio concreto para avanzar en la democratización de la sociedad local.

CAPÍTULO V

CONSIDERACIONES Y REFLEXIONES FINALES

Cuando inicié esta investigación mi preocupación central era poder construir un esquema de análisis muy formal que, hoy reconozco, tenía la intención de servirme de barrera defensiva a la crítica de mi directora y mis lectores. Durante el transcurso de la maestría comprobé que mis temores también eran compartidos por mis compañeros, había que reconocer que la investigación social era una tarea reflexiva con exigencias formales, pero ello no cancelaba la posibilidad de la creatividad, sobre todo en una realidad social en donde la teoría – en su mayoría no pensada para nuestros espacios periféricos - enfrenta múltiples mediaciones. Había entonces que empezar por reconocer nuestras limitaciones y realidades sociohistóricas, tratando de encararlas, pues prácticamente todos los estudiantes de esta maestría trabajamos y asumimos el compromiso de llevarla a cabo sin la esperanza de una beca como ocurre en otros centros de estudios. En este marco, mis pretensiones se hicieron más humildes: asumir esta investigación social como una tarea racional, pero inicial, intentando dar una modesta interpretación teórica a mis observables empíricos: la acción social local y su trayectoria práctica en el campo de la política.

Al principio, pensé que el ser originaria del municipio en donde centré mi objeto de estudio, el municipio de Comitán, me daba una ventaja enorme, era cierto, pero debía tener en cuenta que tanto yo, como muchas otras personas oriundas de Comitán, tenemos una concepción socialmente construida, no necesariamente objetiva, pero de alguna manera legitimada en los discursos de la vida cotidiana. La primera tarea, más que romper con esas percepciones, era explicar el por qué de la fortaleza de las mismas. Ello no niega la lección de Bourdieu (2001), en el sentido de que la construcción de un objeto de estudio implica, para quien asume esta tarea,

romper con los juicios preconstruidos, sobre todo cuando éstos se han instituido y orientan de algún modo el sentido de nuestras relaciones cotidianas.

El tema de la acción colectiva es un tema privilegiado en la Sociología. La producción teórica no sólo es extensa sino también compleja y en constante transformación. En abierto ataque a la teoría de las clases, se vuelve la mirada hacia Emile Durkheim y Max Weber y se asume que la realidad social es un conjunto de relaciones de significado, con una fuerte connotación simbólica. El aporte tipológico de la acción social weberiana, se ha convertido en un legado importante para el desarrollo de la sociología.

En el capítulo I se hizo una revisión sucinta del desarrollo teórico de la acción social y su expresión fáctica en el movimiento social, siendo visible que se trata de construcciones conceptuales pensadas para las sociedades complejas actuales, en donde el centro analítico de los movimientos sociales contemporáneos, radica en la constitución de una historicidad de lo social, desde lo social, rompiendo con los límites impuestos por la política, como es el caso de la propuesta de Touraine (1986 [1984] y 1997) y en el mismo sentido, Melucci, quien plantea que los movimientos sociales han cambiado a un terreno *no político*: hacia la autorrealización en la vida cotidiana (Melucci, 1999).

Las tensiones más significativas entre el acervo teórico y metodológico contemporáneo de la acción social y de los movimientos sociales, y la realidad de las sociedades periféricas, como América Latina y, en ésta, nuestro país, hacen referencia, en casos extremos, a la apuesta interpretativa bajo modelos societales que nada tiene que ver con los actores reales. Ciertamente, en las sociedades latinoamericanas, como lo constata Calderón (1987) y Jelin (1996), hay registros desde la década de los ochenta de la emergencia de actores marginales cuya acción social de contracultura trastoca formas tradicionales de valorizaciones de demandas

sociales, de organización y formas de lucha. Ciertamente también, que en ese campo se escenificaron las luchas contra la dominación y la represión, invocando la defensa de los derechos humanos y de las identidades restringidas.

En relación a estos planteamientos, otros autores como Zémelman (1993: 110) alertan sobre los riesgos de convertir la teoría, en este caso, la de los nuevos movimientos, en un supuesto irrefutable. Plantea la necesidad de analizar a los nuevos movimientos sociales en América Latina, desde una perspectiva procesual e histórica, en el marco de una dinámica social en donde la diferenciación, la heterogeneidad y la multiplicidad de campos sociales propicia altos rangos de variación en la acción social y en las formas de lucha y participación política. De esta manera, las teorías generales de la acción social cobran sentido reconociendo sus límites y potencialidades en una realidad dada (Zémelman, 1993: 110). Algo similar plantean Gunder Frank y Martha Fuentes (1989).

Este argumento de Zémelman deriva en la identificación de las múltiples mediaciones que sufre la teoría en su tarea de interpretar la realidad social. A diferencia de las preocupaciones manifiestas en las propuestas de la acción social de las sociedades complejas desarrolladas, en el caso latinoamericano es visible que la preocupación sigue centrándose sobre cuestiones que en aquellas ya han sido superadas. A las tensiones entre cambio y continuidad, debate recurrente que nos lleva a intentar descifrar que tan modernos y que tan tradicionales somos, se suma la intrincada relación entre sociedad y política y los grados de interdependencia y de subordinación de la sociedad con respecto al Estado, pues estamos hablando de sociedades que aún centran su lucha por los satisfactores básicos, a diferencia de las sociedades desarrolladas que, paradójicamente, satisfechas sus necesidades materiales básicas, experimentan el vacío y la falta de sentido de una vida hipermoderna.

5.1 De la teoría y sus articulaciones con una realidad social históricamente dada

La emergencia a la luz pública del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) ha sido sin duda alguna un parteaguas en la producción intelectual y académica en Chiapas. Como señala García (2004) después de enero de 1994, el discurso intelectual y académico transmutó de una concepción clasista o popular de los movimientos sociales a una que converge, sin mediación alguna, con las teorías de las sociedades complejas del mundo desarrollado. “Paradójicamente, Chiapas se colocaba en el centro de un mundo globalizado que articula mercados, capitales e información, con el retorno de identidades territoriales que exigen una connotación moral positiva. El accionar social –de organizaciones de base, de Organizaciones No Gubernamentales y redes civiles- se tradujo en una lectura de un accionar mancomunado, modelo de experiencias y prácticas democráticas societarias”. Debe reconocerse, continúa la autora, que “en esos discursos estuvieron involucrados los sueños, aspiraciones y utopías de quienes portadores de un capital intelectual, se acercaron con fines de explicar la acción de los sujetos portadores de la buena nueva, aunque ello significara negarles su dimensión histórica real” (García, 2004: 66).

Tomando distancia de la euforia que en algunos académicos despertó el neozapatismo y los movimientos sociales en Chiapas, quiero acercarme al marco contextual y al espacio regional y local objeto de estudio, con una de las obras que aborda el tema complejo de las relaciones entre los movimientos sociales y populares y la política. En atención al campo de mi interés, recupero parte de la discusión teórica trabajada por Neil Harvey en su libro: *La rebelión de Chiapas. La lucha por la tierra y la democracia* (2000), en donde desarrolla un marco conceptual centrado en la dimensión política de los movimientos sociales y populares de Chiapas, particularmente del movimiento campesino y del movimiento zapatista.

Harvey sostiene que en Chiapas se han registrado cambios en los patrones de movilización popular, en franca referencia al movimiento campesino y al movimiento del EZLN. Señala que junto con las mujeres, se convierten en protagonistas principales en la democratización de las relaciones étnicas y de género, concentrando su atención en la búsqueda de nuevas formas de representación política, ahora dentro de un discurso explícitamente democrático. Las dos preguntas centrales en referencia al movimiento zapatista, son ¿Representa esta rebelión una continuación de las formas de protesta rural tradicionales, o rompe con los antiguos patrones y abre nuevas posibilidades para el cambio político? En suma, ¿qué significa esa rebelión para nuestra comprensión de las luchas populares en México? (Ibid: 24).

Sobre el reconocimiento de la naturaleza política de los movimientos populares, Harvey sitúa el eje de su propuesta: la rebelión de Chiapas ha desestructurado una ciudadanía corporativista y ha abierto el espacio para un ejercicio auténtico de la ciudadanía⁵¹. Al construir el concepto de movimiento social recupera el registro de elementos nuevos en los movimientos que rompen con las prácticas y las teorías tradicionales de acción social, y el argumento de definir a los movimientos sociales por sus prácticas políticas y no por su condición social, reconociendo la naturaleza institucionalista de los mismos. Se trata, señala Harvey, de aportes desarrollados por Foweraker, Slater y Graig (Harvey, 2000: 36 y 37).

Con respecto a los nuevos desarrollos del tema (Laclau y Mouffe), si bien reconoce que son posturas teóricas construidas para las sociedades complejas de Europa y Estados Unidos, pueden ser moduladas por las condiciones estructurales y sociohistóricas de las sociedades latinoamericanas, reconociendo similitudes y diferencias. La principal diferencia es no sólo un poder estatal definido por el

⁵¹ “[...] la rebelión de Chiapas puede considerarse no sólo como un claro rompimiento con la ciudadanía “corporativista” del Estado mexicano, sino también como una crítica a las estrechas versiones de una ciudadanía democrática. Los zapatistas [...] dieron lugar a la posibilidad de una concepción más radical de la ciudadanía y de la democracia” (Harvey, 34).

autoritarismo y la centralización, sino también, por la imposición del modelo neoliberal que ha traído como consecuencia la exclusión y el progresivo deterioro en las condiciones de vida y de trabajo de las grandes mayorías. La similitud más importante que reconoce entre las sociedades, tanto centrales como periféricas, es la *resistencia al poder*.

Harvey, al ir caracterizando a los movimientos que se gestan en el marco del entorno neoliberal, va registrando elementos que define como novedosos, como la participación de las mujeres en una proporción importante; el hecho de que las demandas tienen lugar en la comunidad, ya no sólo en los espacios de trabajo, y la autonomía de los movimientos sociales con respecto a los partidos políticos. Todo ello, señala, decanta en la politización de los espacios sociales pero como resultado de una necesidad de vida bajo regímenes militares o autoritarios. Así, para el autor “[...] la politización de lo social en América Latina también marca un rompimiento con patrones anteriores de representación popular que tendían a ser dominados por partidos políticos y redes clientelares. El desmantelamiento sistemático de los vínculos de este tipo condujo a los grupos populares a buscar espacios autónomos, para expresar sus exigencias” (ibid: 39).

Este es el planteamiento central de Harvey. En contra de los argumentos desesperanzadores, que no ven la relación entre los movimientos populares y la democratización, sostiene que, de hecho, México “está pasando por una profunda transformación política bajo el peso de la crisis económica, la reforma neoliberal y la movilización popular” (ibid: 44). Bajo esta premisa recupera los planteamientos más esperanzadores de Foweraker, quien en su momento insistió en la capacidad de algunos movimientos para sobrevivir a la cooptación y a la represión, lo que le llevó a conceptualizar el impacto político de éstos, desde el punto de vista de la lucha por una auténtica ciudadanía. Los márgenes de esta ciudadanía están dados por el institucionalismo y el anticonformismo que les caracteriza y define.

Sin embargo, reconoce que “[...] si las prácticas políticas son lo que define a los movimientos populares, entonces tiene más sentido hablar de la democratización como un proceso interminable y no de la democracia como un conjunto fijo de reglas al que todos han dado su consentimiento” (Ibid: 46). En el marco de estos argumentos, señala que si los movimientos populares se definen por sus prácticas políticas, entonces el centro del análisis gira en torno al estudio de los *espacios culturales* en los que surgen nuevas prácticas, que lo llevan a optar por una perspectiva regional e histórica, pues es en estos espacios regionales donde el significado de la democracia se define a través de la lucha política⁵² (Ibid: 46 y 47).

Una vez colocada la dimensión cultural en el centro de su análisis, sostiene que la novedad de los “movimientos sociales de hoy es que han reconceptualizado esas luchas dentro de la amplia perspectiva de la democracia y la ciudadanía en vez de restringir su campo a las luchas locales por la autonomía frente a las presiones exteriores. [...] la novedad de los movimientos populares consiste en su capacidad de articular la concepción local y específicamente cultural de ciudadanía y democracia con luchas más amplias de alcance regional y nacional” (ibid: 48).

El argumento central en torno al que se teje y se articula el contenido del libro es que:

[...] las luchas de los movimientos populares en pos de dignidad, voz y autonomía son precisamente intentos por constituir al “pueblo” como actor político; es decir, como un pueblo con el derecho de participar libremente en el debate público y esgrimir su derecho a tener derechos. Garantizar este objetivo significa, políticamente, combatir tanto los términos de representación como de

⁵² “La existencia de derechos constitucionales puede proporcionar a los grupos algo a que apelar legítimamente, pero el proceso de movilización se apoyará en la memoria histórica, en las prácticas culturales y en los símbolos políticos tanto como en las normas legales.[...] Desde la perspectiva de los movimientos populares, lo que importa es reafirmar la dignidad y la autonomía, más que la coherencia de la ley. [...] La afirmación democrática de dignidad y autonomía implica una decisión política de que esas aspiraciones puedan ser satisfechas a través de medios específicamente democráticos” (Ibid: 50 y 51).

ejecución de las instituciones gubernamentales. Significa que es la gente la que hace la historia, que las luchas de los pueblos indígenas pueden articularse en luchas de mayor escala por las elecciones democráticas, y que lo que está en juego no es quien está en el poder sino cómo se ejerce el poder. Nuestra tarea es comprender cómo ha llegado la gente de Chiapas a plantear esas demandas y reflexionar en lo que nos dicen acerca de la naturaleza políticamente contingente de la democracia y la ciudadanía (Ibid: 56).

Es inevitable no reconocer que la obra de Neil Harvey intenta construir un escenario de futuro promisorio para el movimiento campesino y en particular para el movimiento zapatista. Sin embargo, al seguir la trayectoria de ambos movimientos, no podemos dejar de reconocer que el pasado, tanto material como subjetivo, sigue definiendo la trayectoria de la acción social y las formas de participación política de la gran mayoría de las organizaciones sociales. En este marco, otros estudios sobre el movimiento campesino de Chiapas, han demostrado la persistencia de la cultura corporativa y clientelar de muchos liderazgos sociales (Villafuerte, et. al., 1999b). Las razones son de larga data y tienen un referente de carácter nacional. Zermeño (1996) argumenta que el peso omniabarcativo de la institución estatal, gestó y desarrolló sociedades estadocéntricas, cuyos sectores mayoritarios, son aún organizativa y culturalmente débiles y dependientes del Estado y sus instituciones. Otra razón, tiene que ver con el carácter asimétrico de la distribución de la riqueza social y la centralización socioterritorial de las políticas de seguridad social (Calderón, 1987). Como señala Lomnitz (2000), la exacerbación de la pobreza y la incapacidad del Estado para garantizar la reproducción biológica y social de los grupos mayoritarios, limita recurrentemente el proceso de construcción de una ciudadanía activa y autónoma, vital para los procesos de democratización social y política.

Estas referencias contextuales, de alguna manera constatadas en el desarrollo de mi investigación, relativizan algunos planteamientos de Harvey. La experiencia vivida por las organizaciones campesinas en la coyuntura de los dos o tres primeros

años del movimiento zapatista, la regresión a las tradicionales negociaciones entre las organizaciones y los gobierno federal y estatal y el efecto de ruptura de éstas con el EZLN, nos llevan a considerar que social y territorialmente, el campo posible de las reflexiones de Harvey están dadas por el EZLN y su zona de influencia, que no está exenta de tensiones sociales (García, 1998).

Sin embargo, es visible en el trabajo de campo y en el diálogo con líderes y miembros de las organizaciones campesinas y sociales, que los cambios que experimenta la sociedad regional están desplazando el viejo modelo de acción social y participación política y que en algunas coyunturas han sentido la necesidad de renovarse en términos democráticos. En el área de estudio, hemos referenciado que la acción colectiva se amplió a otros espacios y ámbitos de la vida social local y regional. En los años ochenta, al movimiento campesino que discursivamente se definió como radical, al que se integra una vertiente productivista, se incorpora una acción social y una forma de participación política que se centra en los derechos humanos, temática que se hizo posible por la llegada masiva de refugiados guatemaltecos a la región y en paralelo la llegada de Organismos No Gubernamentales con propósitos expresos de atender a éstos y encarar las políticas gubernamentales que intentaban violentar algunos preceptos de derechos humanos. Pero el cambio hacia la temática y la defensa de los derechos humanos fue posible en gran parte, por el trabajo de la diócesis de San Cristóbal, centrada en la defensa de los indígenas de la región fronteriza y de la hoy llamada “zona de conflicto”.

Los efectos de estos cambios, ciertamente, invocan a la democracia en su sentido político y social, y han constituido la fuente para el desarrollo de Organismos No Gubernamentales con acciones y prácticas políticas y sociales centradas en demandas territoriales (a los derechos sociales aún no garantizados, se suman derechos que aluden a la diferencia: derechos étnicos, de género, entre otros). Pero estas nuevas expresiones territoriales de los movimientos sociales, no significan la

cancelación de los movimientos populares que siguen con el viejo formato corporativo y clientelar, visible en los mecanismos de campaña y negociación entre organizaciones y líderes de los partidos políticos en contienda.

5.2 Historia, espacio y tiempo de la acción social.

Es una premisa analítica que la acción social no se explica sólo por la contingencia. En las sociedades periféricas, el peso de la historia y la materialidad en la orientación o constreñimiento de la práctica y las representaciones, es un hecho difícil de obviar en el análisis social.

Al analizar la acción contemporánea de la sociedad chiapaneca, y de Comitán en particular, uno no puede prescindir de la acción histórica de la sociedad local y de su entorno inmediato. No se puede entender la sociedad local presente, si no se recupera el hecho fundacional de que Comitán construyó su historia con los elementos materiales y subjetivos de un modelo de sociedad derivado del encuentro y de las relaciones entre los nativos y los conquistadores. Tampoco, que el campo material, que se sustentó en la concentración de la tierra y la explotación de la mano de obra indígena, modeló una forma de subjetividad, que invoca maneras de percibir, sentir, actuar y pensar en clave oligárquica, de castas y de lealtades, apenas trastocada por el proceso simbiótico entre la Colonia y el período liberal que creó y dio continuidad a una tercera república que la legislación hispana no había contemplado: el universo mestizo que –desde sus orígenes laboríos- silenciosa e insidiosamente se fue apoderando de espacios y funciones de gobierno. La élite de los españoles y los criollos devino en una élite mestiza que se rehusaba al cambio de percepciones y valores de sus ancestros (Ruz, 1992).

Desde su origen colonial, registran los historiadores, Comitán era no sólo una sociedad profundamente asimétrica en la distribución de los recursos estratégicos escasos, sino también una sociedad local, modelada por relaciones sociales estructuradas desde los grupos minoritarios en el poder que, si bien en la etapa liberal transgredieron la estructura agraria colonial, en la que la Iglesia y las comunidades indígenas vieron perder sus propiedades y recursos de sobrevivencia, mantuvieron los valores y las representaciones culturales y de vida cotidiana del viejo régimen colonial, transmutados al paso del tiempo en un régimen porfirista que se ufanaba de liberal y capitalista.

Así, la historia local en el siglo XIX, se tejió con amplios márgenes de autonomía local y con una capacidad para reelaborar y capotear las presiones venidas desde el exterior. La fuerza de este período en la sociedad comiteca se mantuvo prácticamente intacta hasta el primer tercio del siglo XIX y siendo condescendientes, diríamos que hasta la primera mitad del siglo XX. Ello explica que hasta muy recientemente en el imaginario de los movimientos campesinos de la región se insistiera en la existencia de una oligarquía agraria articulada al poder político, que aunque era evidente la persistencia de algunos funcionarios públicos con esos rasgos, como elemento ordenador del orden actual era un hecho insostenible.

Pero, como señalé, la historia regional y local no es inmutable y el primer intento de subversión de este orden social tradicional, más allá de las confrontaciones interregionales, no vino de las fuerzas sociales internas. Llegó con la Revolución mexicana y con una Constitución nacional que institucionalizó reformas sociales dirigidas a terminar con la estructura agraria latifundista y el orden social que se derivaba de ésta. Propio de los espacios periféricos, los cambios esperados por esas disposiciones jurídicas no llegaron con la rapidez esperada, se fueron dando paulatinamente, casi de manera imperceptible en porciones importantes del territorio chiapaneco. No obstante, puede decirse que este proceso de institucionalización

inaugurado sobre todo desde la segunda mitad de los años treinta del siglo XX, inaugura una estructura política en donde los grupos de poder pierden la centralidad.

En el plano nacional, la clase política revolucionaria instauró un régimen sustentado en un partido de estado y un poder ejecutivo fuerte que, en atención a la coyuntura, le permitió negociar con caudillos y “caciques” de las entidades federativas del país. Aunque en términos prácticos se trató de la subordinación de las fuerzas políticas de las entidades federativas, el margen de poder discrecional dada a estas fuerzas fue inicialmente amplio como para que los grupos de poder regional modularan los ritmos de las reformas sociales y se recreara, ahora en términos revolucionarios, el sentido patrimonialista del poder político. (García, 2003). Pese a que la sociedad comiteca continuaba organizada bajo el esquema del orden provinciano, ahora el actor central que organizaba la forma de dominio era el Estado mexicano, a través de las instancias de gobierno y de sus instituciones, pero sobre todo, del partido oficial. Los grupos de poder político terminaron de definirse como tales, aunque algunos de sus miembros intentaron, de manera indirecta, continuar con el lazo oligárquico que les caracterizó de antaño (Benjamin, 1995).

En el período posrevolucionario, sobre todo el período que va de la segunda mitad de los años treinta hasta fines de la década de los sesenta, la acción colectiva y las formas de participación política, tuvieron prácticamente un marco estrecho y único de operación que imposibilitaba que fuerzas contrarias transgredieran al régimen político hegemónico, vía las presiones a las instituciones o negociaciones con las nuevas élites políticas. Las movilizaciones sociales y las demandas subyacentes, difícilmente rebasaron los límites formales de un modelo de corporativismo estatal (Schmitter, 1992), que se nutrió de una filiación política que le permitió la incorporación activa de las masas: el populismo (Funes y Saint-Mezard, 1994).

Sin profundizar sobre el modelo conceptual del corporativismo de Estado, es inevitable no reconocer el impacto que la socialización de la ideología corporativa – muchas veces demostrado con los hechos- ejerció en la producción de sentido del mundo social local y regional. Es inevitable también que en las entrevistas afloren recuerdos de los buenos tiempos, buenos para la sociedad que se vio beneficiada con políticas públicas básicas y bueno para los políticos, que aunque la gente reconociera que se “enriquecían con los recursos del erario público, hacían obras que la gente necesitaba”. La cultura gestada por un régimen presidencialista y de partido único, que se extendía al conjunto de las instituciones gubernamentales, se interiorizaba y se incorporaba en la percepción de la gente sobre el Estado mexicano. Si se trataba de mecanismos de dominación, propio del reconocimiento analítico del régimen, la población local, los más, lo legitimaban y lo asumían con normalidad. Este comportamiento es aún visible en el discurso de algunos comitecos, quienes reconocen que “Comitán es cuna de políticos de gran talla”. No estamos hablando de relaciones de dominio coactivo, sino de un dominio interiorizado en el seno mismos de las relaciones sociales y políticas cotidianas.

Frente a la debilidad de la sociedad local, carente de organizaciones civiles sólidas, el corporativismo de Estado encuentra unidades territoriales que son presa fácil para su subordinación a un poder central burocrático que de manera *natural* termina por aceptar el dominio de un solo partido y por tanto elecciones poco competitivas. El Estado, siguiendo a Schmitter (1992:57), aparece como “el elemento definitorio, si no es que de necesidad estructural, ...”. Reconozco en el caso de Comitán, que la sociedad incorporó en el campo de su subjetividad, la ideología corporativista estatal, un campo, que como señala Melucci (1999), opera como redes invisibles de pequeños grupos en una cotidianidad en donde se estructuran las experiencias materiales y subjetivas que de la política hacen sus integrantes. Sin embargo, como afirma el mismo autor, la vida cotidiana es un laboratorio de construcción social que tiene también potencialidades y límites.

Y volvemos nuevamente a las dinámicas del contexto estatal y nacional y a las particularidades de sus relaciones. Los mejores años del régimen posrevolucionario ocurrieron en el centro y norte del país, no en Chiapas y no en la región sur-sureste del país. Las negociaciones de las fuerzas políticas del centro del país con los grupos de poder regional se dieron sin confrontaciones serias, no obstante que era visible la pérdida de autonomía política de las fuerzas locales. Lo mismo ocurrió con los sectores mayoritarios, la población campesina, la que se supeditó al ritmo de la reforma agraria responsable del reparto agrario. Las presiones del Estado mexicano hacia la entidad federativa fueron hasta fines de los años sesenta del siglo XX, manejables y con poco esfuerzo negociador.

A este respecto, recuperado por García (2003), es ilustrativa una cita de José Casahonda Castillo, que hace referencia a la administración del gobernador que cubrió el periodo 1964-1970.

[...] Los días corrían sin inquietudes y teníamos la impresión que Chiapas caminaba por la fuerza de la historia, sin el impulso de una mano. Es cierto que no hubo demagogia pero tampoco hubo acción social. La política de partido se olvidó. La vida cultural vivía muerta. No hubo culto a la personalidad. Todo salió, todo pasó sin esfuerzos. León Brindis le hecha cerrojo a los cincuenta años de Revolución en Chiapas (citado por García, 2003).

5.3 Con todo, la sociedad Chiapaneca se mueve

Casahonda Castillo hace referencia a una historia política en donde pareció privar la pasividad de los actores políticos y con ello el mundo de lo social. Este comportamiento, no del todo cierto, de alguna manera se explica por el papel que venía jugando Chiapas en la división nacional del trabajo. Mientras que otras entidades del país, sobre todo, el centro y norte vivían procesos de industrialización y cambio agroproductivo, nuestra entidad, al igual que otras entidades del sur y sureste del país, seguía jugando el papel de productor de alimentos y materias primas baratas, sin que ello propiciara un cambio en el patrón agroproductivo; éste seguía sustentándose en métodos tradicionales, la tierra y el trabajo. Las tensiones eran minimizadas parcialmente por la existencia aún de importantes extensiones de terrenos nacionales y por la decisión de los campesinos de emprender la demanda agraria por la vía institucional (García, 2003).

Sin embargo, el primer quiebre significativo del mundo tradicional chiapaneco ocurre durante el gobierno cardenista. La bandera de la reforma agraria es asumida por el gobierno federal haciendo patente que el Estado mexicano era producto de una revolución social. El reparto agrario empieza a afectar a la gran propiedad en el municipio y en otros municipios de la región Fronteriza. Debe reconocerse que el reparto después del cardenismo se dosifica, además de la lentitud de los estudios y trámites en la Secretaría de la Reforma Agraria.

Un segundo momento, que conjuga las tensiones internas con los intereses del gobierno federal, ocurre hasta la década de los setenta. Como ya señalé, varios eventos van a posibilitar la rehabilitación de las políticas sociales. Los campesinos empiezan a cobrar conciencia de sus derechos, reconociendo que la inercia burocrática era el pretexto para no afectar los intereses de los propietarios. Las tensiones de Chiapas se empiezan a manifestar como producto de un acelerado

crecimiento demográfico y una movilidad poblacional que exige a los gobiernos federal y estatal encarar las insuficiencias en la infraestructura económica y social. Para ese entonces, el gobierno federal tiene una estrategia de incorporación del estado a los circuitos de la acumulación nacional. Los recursos financieros y logísticos empiezan a llegar a Chiapas, alentando un populismo, sólo visto durante el gobierno de Cárdenas.

Pero el entusiasmo populista terminó muy pronto sin haber modificado las condiciones de atraso material y social de la sociedad. El “Chiapas bronco” empieza a evidenciarse con el movimiento campesino y con el magisterial, que tuvo sus primeras experiencias en movilización en la década anterior. Pero si el Estado mexicano había optado por marginar grandes áreas del territorio chiapaneco como lo era la región Selva y Norte, otras fuerzas habían ya ocupado su lugar, desplegando procesos de concientización de que habían otras vías para el cambio social. En ese sentido, el papel de la diócesis de San Cristóbal y el acompañamiento de fuerzas políticas de izquierda fue determinante.

En la década de los ochenta registramos pues dos lógicas de acción social y comportamiento político, una vinculada a la lógica del corporativismo estatal y otra que se enfrenta a ésta, asumiendo acciones y prácticas independientes, demandando el cumplimiento de los mandatos constitucionales en materia social, como lo era el reparto agrario y el derecho a la educación, a la salud, y la democratización de sus espacios representativos sectoriales.

Comitán, por ser centro político-administrativo de la región Fronteriza, se convirtió en un laboratorio social de importancia para la sociedad regional. Fue testigo y partícipe de los dos movimientos *populares* más importantes de la entidad, el campesino y el magisterial, y fue también escenario de una diversidad de organizaciones no gubernamentales con propósitos de atender a la población

refugiada y después a los sectores mas empobrecidos de la sociedad regional, incorporando demandas de carácter restringido, cuyas particularidades identitarias las alejaba del prototipo de comportamiento político propio de los movimientos *populares*. El anclaje en los derechos humanos, que los hace proclives a una democracia social, más que electoral, o a una posición anti-gubernamental, se corresponde con los orígenes de clase media de sus dirigentes y sus trayectorias político-ideológicas. Estas formas de acción social y política, desde sus agentes y líderes, las he ilustrado en los capítulos II y III.

Pero también, en dichos capítulos, he dado cuenta de los procesos de erosión que han sufrido los movimientos *populares*, específicamente el movimiento campesino y magisterial, y el papel protagónico que intentan asumir las organizaciones no gubernamentales (ONG). Este proceso de erosión de las viejas fórmulas de acción y participación política, ocurre tanto en las agrupaciones ‘independientes’ como en el viejo corporativismo estatal. Pero ello no significa que las demandas de los sectores mayoritarios de la población hayan sido satisfechas, por el contrario, la política social sigue siendo tan precaria y coyuntural que no logra abatir el problema estructural de la marginación y la pobreza.

A principios de la década de los noventa se registra una crisis o un abatimiento generalizado de la acción social, las ONG ciertamente empiezan a imprimir algunos cambios, pero su campo de acción no sólo es restringida en términos de sus ámbitos de trabajo (algún aspecto de la salud, la educación, derechos humanos, género) sino también restringida en el campo de las acciones concretas, involucrando una, dos o tres comunidades, de uno o dos municipios, principalmente de regiones indígenas.

Indudablemente que la presencia del EZLN y su impacto real en el medio político y social del país y del mundo, además de su efecto mediático, propició la

reactivación de los movimientos sociales y sus actores. Las respuestas, los efectos e impactos del zapatismo en los actores de la sociedad local no fue homogénea. En el caso de Comitán, y creo que también en muchos municipios cercanos a la zona de conflicto, las respuestas fueron desde una abierta acusación a los gobiernos federal y estatal, por la ausencia del Estado de Derecho por parte de los sectores económicos, entre ellos los pequeños propietarios, hasta el apoyo decidido a la causa zapatista por organizaciones de los movimientos populares y de algunos partidos políticos.

Comitán, no podía ser de otra manera, fue escenario de movilizaciones de la sociedad civil con ambas banderas. Indudablemente, para un sector de la sociedad local, sobre todo los que habían perdido alguna propiedad, “el gobierno federal había terminado por claudicar y beneficiar al EZLN y con él, también a las organizaciones que se dijeron simpatizantes de éste, el gobierno terminó comprando las propiedades, con el pretexto de que se las iba a vender a las organizaciones, pero con un crédito. Ni el gobierno se lo creyó, los propietarios afectados nos movilizamos y mire con qué nos pagaron, algunos propietarios vieron perder todo su patrimonio y otros todavía tienen su tierra invadida, sin que el gobierno, ni el estatal ni el federal resuelvan nada” (entrevista a un propietario afectado, marzo, 2004).

Para fines de los noventa registro un ciclo de recesión o declive de la acción social organizada. ¿Qué había ocurrido? ¿qué propició que las organizaciones y sus estrategias de acción social se erosionaran de manera tan inmediata? En Comitán, nuestros entrevistados comentaron que ello ocurrió porque las organizaciones, sobre todo las campesinas, no se dieron tiempo para pensar que si seguían con las movilizaciones al lado del EZLN podían tener mejores dividendos, “a la primera se fueron con el gobierno con las famosas mesas de negociaciones”. Para otros, el fracaso obedeció a que desde el principio “el EZLN traía ya otro ‘rollo’, nada que ver con las organizaciones locales campesinas”.

Sin querer ser conclusiva, pero atendiendo al comportamiento de la acción social organizada de fines y principio de un nuevo siglo, planteo que la sociedad local, después de haber sufrido procesos severos de fragmentación de sus identidades y mediaciones organizativas y de haber perdido sus referentes primarios, si bien registra formas caóticas de acción social y comportamiento político, hay en el fondo, la búsqueda de un nuevo anclaje que le permita recuperar su protagonismo, particularmente a sus organizaciones les apremia recuperar su capacidad de negociación con el gobierno y ver satisfechas las demandas de sus bases. A diferencia de lo que ocurre en las sociedades desarrolladas que rompen con las estructuras unitarias, con fines de crear nuevas identidades sociales desde lo social, como señala Touraine (1984, en Galván 1986, comp.), o construir lo político desde la no política (como campo estructurado de instituciones, sujetas a reglas) como plantea Chantal Mouffe (1999), en los espacios sociales periféricos, como los nuestros, la invocación al vértice estatalista es aún una realidad muy pronunciada de nuestra sociedad local, y lo es porque la mayoría de la población aún no tiene garantizados sus satisfactores básicos de subsistencia, ni un entorno de crecimiento económico favorable que le permita su inserción rentable a un mercado laboral que derive en un salario suficiente para la reproducción material y social de la familia y de su entorno social más inmediato.

Termino esta reflexión sobre las formas de la acción social en un espacio periférico, reconociendo que si bien se registra una ampliación de las organizaciones de la sociedad civil local con nuevos referentes identitarios, sigue persistiendo no sólo un límite estructural que obstaculiza el desarrollo pleno de estos nuevos referentes culturales, sino también un crecimiento continuo, a veces producto de la fragmentación de agrupaciones ya existentes, de organizaciones *populares* con demandas aún primarias. En el municipio de Comitán reconocemos que las demandas por los servicios de infraestructura material y social, así como de política social en

términos de apoyos para hacer menos apremiante la pobreza, no es un fenómeno nuevo, ha persistido en la medida en que los flujos migratorios del campo a la cabecera municipal y a los espacios cercanos a éste se han venido incrementando. Este hecho se hizo más visible después de 1994 a raíz del levantamiento zapatista, con la llegada de cientos de desplazados, algunos porque fueron sujeto de despojo y otros por miedo a las represalias. Un proceso similar se registró en el municipio vecino, Las Margaritas.

Esta oleadas de población rural a los centros urbanos ha posibilitado la creación de organizaciones *populares* urbanas o que las viejas organizaciones campesinas incorporen ahora las demandas de sus bases urbanas. ¿Qué ha ocurrido con estas organizaciones y sus dirigencias? ¿qué estrategias de acción social y participación políticas están desarrollando para satisfacer las demandas de sus afiliados? Con excepción de algunos Organismos No Gubernamentales que trabajan con una base social minoritaria y en algún rubro del campo social, la mayoría de las organizaciones *populares* orientan sus acciones hacia los aparatos de gobierno, específicamente me interesa remarcar que, ahora, las dirigencias de estos colectivos populares y frente al agotamiento de otras fuentes de recursos y espacios de negociación, se están encaminando hacia la vía electoral, en términos de las ventajas que los partidos políticos y sus candidatos les pueden ofrecer, abriéndose fuertes riesgos para la democratización de la vida política, pues el acendramiento de la vieja lógica clientelar acecha y muy posible tenga sus frutos, frustrando la modernización de la política.

5.4 La democracia electoral y sus regresiones

En el análisis realizado en el capítulo IV sobre los procesos electorales en Comitán, he dado cuenta de las relaciones y de los juegos de poder que se están

construyendo, perfilando los problemas que entraña el proceso de democratización en los municipios. Debe reconocerse que la vía electoral como estrategia clave para la lucha por el poder y su ejercicio, es un paso importante. Más aún lo es el registro de la alternancia en el poder político, paso inequívoco para culminar la transición e iniciar la democratización del sistema político. Sin embargo, siguiendo la trayectoria electoral del municipio de Comitán se pueden registrar fenómenos que van en una dirección contraria.

Entiendo la primera experiencia de la alternancia en la presidencia municipal de Comitán no sólo como resultado de un castigo al partido oficial por parte de los sectores mayoritarios de la sociedad y sus organizaciones, partido que creyó iba a seguir manteniendo el triunfo electoral y gubernativo sin responder a las necesidades de la población, sino también, porque en torno a la vía electoral se proyectaron muchas expectativas. La sociedad local se impactó con la derrota del PRI en las elecciones a la Presidencia de la República en 2000; también por la derrota del PRI y el triunfo de una alianza partidista en la gubernatura del estado de Chiapas.

Como se ha visto en el capítulo sobre este tema importante para la vida política de Comitán, desde la definición de la elección del candidato a la presidencia municipal en el año 2001, se empezaron a registrar prácticas antidemocráticas. Quien iba a ser candidato ya estaba decidido desde “arriba”, el problema era la construcción de la fachada democrática de dicha elección, optándose por repetir la estrategia aliancista que llevó a la primera alternancia en el gobierno estatal. Fue el Partido del Trabajo quien inició las pláticas de una posible alianza para contender por el poder del municipio en la trayectoria del proceso de elección al candidato. Los acercamientos con el PRD a pesar de fuertes tensiones entre sus liderazgos internos fue posible, no así en el caso del PAN. Las negociaciones entre los partidos sobre las cuotas en los cargos del ayuntamiento resulta una afrenta a los ciudadanos, pues la distribución de las regidurías está en función de los resultados electorales. Otra

cuestión que también afecta el ejercicio del gobierno local, es la “negociación” de los cargos burocráticos y administrativos del ayuntamiento.

Acordados los términos para la “Alianza por Comitán”, que terminó en una alianza entre el PT y el PRD, fue visible la subordinación que el candidato y sus operadores hicieron de las dirigencias internas de los partidos. Más aún, ilustramos también las negociaciones que hicieron los partidos con sus bases y con organizaciones sociales para apoyar al candidato de la alianza. Se trata de negociar el voto de la población a cambio de que ésta vea satisfechas sus demandas primarias. Los partidos políticos, no sólo sirven a los intereses de un candidato que se dice “sin afiliación partidista”, pero que tiene la venia de un poder superior o cuenta con recursos financieros propios, sino también como trampolín político de dirigentes que buscan puestos en el ayuntamiento.

Desde las elecciones locales de 1995 muchos otros municipios habían iniciado esta experiencia de la alternancia, Comitán la experimentó hasta las elecciones locales de 2001, teniendo, como señalé, el antecedente del triunfo de un gobernador postulado por una alianza de partidos. El hecho de que el PRI perdiera la gubernatura chiapaneca, fue un factor que dinamizó la actividad política de los municipios pero ahora teniendo como eje a los procesos electorales, siendo visible la erosión de las organizaciones corporativas del viejo partido oficial y el nacimiento o reactivación de otras organizaciones con posiciones muy pragmáticas o utilitaristas, en atención a exigencias de sus bases e intereses inmediatos de sus líderes.

El ejercicio real del gobierno local no cubrió ni las expectativas mínimas de sus votantes. El presidente municipal, ante el reclamo de sus gobernados, dejó la alcaldía sin terminar su período para contender por una diputación local. El castigo, una ventaja de la democracia para imponérselo al gobernante que no cubre con las expectativas de la ciudadanía, fue precisamente negarle el voto, por lo que, tanto en

las elecciones distritales como en las municipales de 2004, el triunfo electoral fue para el PRI, hecho que se vio como un fracaso del gobierno aliancista encabezado por el gobernador Pablo Salazar Mendiguchía.

Las reflexiones más generales que extraigo de esta experiencia de investigación es, que si creemos en la posibilidad de un cambio social que nos sitúe en condiciones más humanas de vida y convivencia social y política, es necesario asumir una visión realista del campo social o político que se investiga. El contexto del movimiento zapatista, y al calor de utopías posmodernas, se habla de los chiapanecos y sus proyectos centrados en la multiculturalidad de su sociedad, pero dejando espacios vacíos igual de importantes, que permiten una explicación de la realidad social chiapaneca en toda su complejidad. Fue visible, como señala García (2003) que después de enero de 1994, al calor del movimiento zapatista, se privilegió una lectura de Chiapas, por parte de académicos e intelectuales del “centro” que, en aras de sus propias utopías o intereses terminaron por arrebatar la historicidad de los sujetos locales, los indígenas y los campesinos, dotándoles de sentido y de fuerza societaria para abanderar demandas incluso de carácter nacional y continental, como la reivindicación de los derechos indígenas.

Es evidente que la sociedad chiapaneca, particularmente su población indígena, no se explica en sí misma, tampoco se explica despojándola de su historia material e inercias estructurales que persisten por la lógica sistémica que la envuelve. Esta lógica estaría explicando esta multiplicidad aparente de formas de acción social y política que hoy caracterizan, en una dialéctica de cambio en la continuidad, a la sociedad regional y local. A este respecto, Zermeño (2005:19-20) reconoce la enorme gravitación que han adquirido los espacios de la institucionalidad política, en detrimento del plano de la organización y el empoderamiento de la gente en sus espacios vitales cotidianos, pero alerta sobre situaciones en las que los partidos, los parlamentos y los espacios urbanos han sido invadidos por un multi-tribalismo que

movilizan e intentan posicionar a las clientelas desheredadas en los espacios en donde fluyen los recursos. Muestran avidez, en su pragmatismo, por pactar con quien sea, con tal de resolver en algún nivel los problemas de sus seguidores e incrementar por esa vía su poder político y su capacidad de gestión. Esta estrategia, señala el autor, puede ser calificada de errónea o reprobable, pero responde a un entorno en donde las carencias y las necesidades vitales de reproducción biológica y social hacen difícil una respuesta distinta (Zermeño, 2005). Bajo esta perspectiva, en atención a los proyectos alternativos, propone pensar a la sociedad y sus organizaciones desde los sectores excluidos y su resistencia, para abatir la pobreza y mejorar su calidad de vida. Recupera así los problemas que aún son álgidos en nuestra sociedad, los que, en tanto no se resuelvan, difícilmente la democracia tendrá el sujeto que le da identidad, la ciudadanía.

La sociedad contemporánea se ha complejizado, la política entendida como el sistema institucional que produce un orden social para controlar los conflictos que ahí se generan, debe replantear su misión en atención al conflicto social, pero también en atención a una sociedad que, en el marco de un sistema democrático, exige los espacios y las condiciones reales para, como ciudadanos construir espacios y foros deliberativos que lleven al acuerdo normativo y plural que es lo propio de una democracia (Hábermas, 1993; Arendt, 2001).

Pero habrá que recordar, como plantea Melucci (1995), que si los movimientos sociales y los partidos políticos son dos formas de la acción que desarrollan los sistemas contemporáneos, los conflictos afloran más allá de los límites institucionalizados que regulan la competencia política y que permiten a un sistema producir las decisiones. Así, a la estructura de oportunidades políticas que abre el sistema político moderno a la acción colectiva, en términos de la estructura institucional, habrá que registrar que paralelamente existen también estructuras más informales de relaciones de poder que ofrecen un campo de oportunidades políticas

(McAdam, 1998). En el caso del sistema político mexicano, las dimensiones metaconstitucionales que entraña la relación entre sociedad y estado, crea prácticamente un sistema de oportunidades políticas que asemejan a una camisa de fuerza: conmigo o contra mí.

En los espacios periféricos como el municipio de estudio, pensar en el fortalecimiento de un sistema democrático es un desafío de enormes proporciones. Aún cuando ya se cuenta con un sistema electoral ciudadanizado y un sistema de partidos plural, existen condiciones estructurales, pero también una cultura política que no logra romperse. Aunque como hemos registrado en la investigación, existen fuerzas sociales más plurales que demandan la democratización política y de gobierno, los espacios públicos, de participación activa y de deliberación sobre decisiones que atañen a la sociedad local como conjunto, son inexistentes; el peso de la tradición – la política caudillesca y clientelar - termina imponiéndose.

Analistas políticos nacionales han planteado que con el cambio político, cuya expresión notable es la alternancia en la Presidencia de la República, se abren las condiciones para democratizar al Estado, al gobierno y a la sociedad. Ello no aparece en futuro inmediato del municipio de estudio. La realidad social nos está mostrando una dinámica en que lo social se está reconfigurando. Viejos y nuevos fenómenos y acciones de grupos la modulan como un espacio de frontera, que ante la incapacidad interna para la resolución de sus conflictos y necesidades, expulsa a su población o la somete a actividades delictivas.

Así, el fenómeno migratorio está cobrando notoriedad con impactos aún no evaluados. Los jóvenes están optando por emigrar no sólo a las ciudades del estado o de otras entidades federativas del país, sino a los Estados Unidos. Por razones similares, el vecino país de Guatemala ha ensanchado la expulsión de su población joven o en edad laboral hacia los Estados Unidos. Chiapas y su frontera, en ella

Comitán, se convierte así en paso de transmigrantes, posibilitando la constitución de grupos locales llamados “polleros” y pandillas que se dedican a robar y a medrar con las aspiraciones de los centroamericanos. Por otro lado, el problema del narcotráfico es un fenómeno que ya está presente en la localidad, y está impactando la vida económica, social y política de la región, registrándose incluso detenciones de figuras importantes por parte de instituciones como la Procuraduría General de la República y la fiscalía estatal.

La lección conceptual y metodológica que se puede derivar de este primer intento de explicación y aprehensión de lo social y sus múltiples relaciones y mediaciones, es la de exigirse, más allá de nuestras preferencias teóricas o políticas, una recuperación lo más objetiva posible de la realidad social, manifiesta en sujetos sociales y actores políticos que actúan y se movilizan en atención a intereses materiales y subjetivos en las que se entrelazan los requerimientos coyunturales, pero también el tiempo de larga duración de la historia.

BIBLIOGRAFÍA CITADA Y CONSULTADA

Alfonzo, Armando 1996 [1978], *Comitán 1940*.

Arendt, Hannah. 2001, *La condición humana*. Paidós, Barcelona.

Azís Nassif, Alberto (coord.), 2003. *México al inicio del siglo XXI. Democracia, ciudadanía y desarrollo*. México, DF, CIESAS y Miguel Angel Porrúa.

Benjamin, Thomas. 1990. *El camino a Leviatán*, CONACULTA, México.

Bobbio, Norberto, 1996. “La política”, en Bobbio, Norberto, *El filósofo y la política* (antología de Fernández Santillán), FCE, México.

Bourdieu, 2001. *El oficio de sociólogo: presupuestos epistemológicos*. Siglo XXI. Madrid.

Calderón, 1987. “Movimientos sociales y democracia: los conflictos por la constitución de un nuevo orden”, en *Los conflictos por la constitución de un nuevo orden*. CLACSO, Buenos Aires.

Calderón, Fernando, 1995. *Movimientos sociales y política. La década de los ochenta en Latinoamérica*. Siglo XXI editores – UNAM, México.

Cardoso, Fernando Enrique y Faletto, Enzo. 1969 y 1978. *Dependencia y desarrollo en América Latina*. Siglo XXI Editores, México.

Cifuentes, Disraelí E. Ángel. 2004. *Transición política en Comitán*, editorial Nuevo Milenio, Comitán, Chiapas, México.

Cohen L., Jean y Arato, Andrew. 2000. *Sociedad civil y teoría política*, FCE, México.

Coneculta, 1999. *Comitán, una puerta al sur*, Libros de Chiapas, México.

Córdova, Arnaldo. 1972. *La formación del poder político en México*, ed. Era, México.

Córdova, Arnaldo. 1976. *La política de masas del cardenismo*, editorial Era, México.

Cotta, Maurizio 1988. “Representación política”, en Bobbio y Mateucci. *Diccionario de Política*, Siglo XXI, México.

Duverger, Maurice 1992. *Instituciones Políticas y derecho constitucional*, ediciones Ariel, Barcelona.

Elster, Jon. 1984. “Marxismo, funcionalismo y teoría de juegos: alegato a favor del individualismo metodológico. *Zona Abierta*, número 23, octubre-diciembre, México.

Escalante Gonzalbo, María de la Paloma. 1991. *Organización local y regional del poder, El caso de Comitán, Chiapas*. Tesis de maestría en sociología política. Instituto Mora. México.

Esteve Díaz, Hugo, 1992 (coord.). *Los movimientos sociales urbanos. Un reto para la modernización*. Instituto de Propositiones Estratégicas, A.C.

Fernández, Otto. 1992. “Sobre actores y movimientos: perspectivas de la acción social en América Latina y México. Entrevista a Segio Zermeño”. En: *Sociológica*. Actores, clases y movimientos sociales II. Revista del Departamento de Sociología, División de Ciencias Sociales y Humanidades. UAM Azcapotzalco.

Foweraker, Joe. 1989. “Los movimientos populares y la transformación del sistema político mexicano”, en *Revista Mexicana de Sociología*, año LI, núm. 4, Octubre, diciembre, 1989, IIS/UNAM, México, pp.93-114.

Funes, Silvina y Saint - Mezdard, 1994. “El populismo en América Latina”, en Fernando Vallespín (editor), *Historia de la teoría política*. Alianza editorial, Madrid. Pp. 315-353.

Gallino, Luciano. 1995. *Diccionario de Sociología*, Siglo XXI editores, México.

García de León, Antonio. 1994. *Resistencia y Utopía*, Tomos I y II, Ediciones Era, México.

García Aguilar, María del Carmen. 1995. *Las organizaciones de la sociedad civil en Chiapas*, Asociación para el Desarrollo de la Investigación Científica y Humanística en Chiapas, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México.

García María del Carmen, Leyva Xóchitl y Burguete Araceli, 1998. “Las organizaciones campesinas e indígenas de Chiapas frente a la reforma del Estado: una radiografía”, pp. 75 – 94, en *Cuadernos Agrarios 16, nueva época*.

García Aguilar, María del Carmen. 1998. “Las organizaciones no gubernamentales en Chiapas: algunas reflexiones en torno a su actuación política”, en *Anuario 1997*, Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica, UNICACH, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, pp.37-80.

García Aguilar, María del Carmen. 1998. “Sociedad civil y democracia en Chiapas”, *El Cotidiano*, número 87, enero-febrero, UAM-Azcapotzalco, México.

García Aguilar, María del Carmen, 2002. “Reformas electorales, partidos políticos y elecciones. Luces y sombras de la democracia en Chiapas”, *Anuario 2000*, CESMECA-UNICACH, Tuxtla Gutiérrez, México, pp. 11-86.

García Aguilar, María del Carmen. 2003. *Política y sociedad en Chiapas 1970 – 2000. Las utopías, los intereses y las realidades*. Tesis para optar por el grado de doctora en Ciencias Sociales, División de Ciencias Sociales y Humanidades. UAM . Xochimilco. México.

Gledhill, John (2000 [1999] “El poder y sus disfraces”. *Perspectivas antropológicas de la política*. Ediciones bellaterra, Barcelona, España.

González Esponda, Juan. 1989. *Movimiento campesino chiapaneco, 1974-1984*, Volumen I y II, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México.

Greene, Kenneth, 1997. “Complejidad, cohesión y longevidad en un movimiento popular urbano: asamblea de barrios de la ciudad de México”, en *Movimientos sociales e identidades colectivas, México en la década de los noventa*. Sergio Zermeño (coordinador). La Jornada Ediciones – Centro de Investigaciones interdisciplinarias en ciencias y humanidades / UNAM. México.

Guido, Rafael y Fernández Otto. 1989. “El juicio al sujeto: un análisis de los movimientos sociales en América Latina”, *Revista Mexicana de Sociología*, año LI, Núm. 4, octubre-diciembre, 1989, México, pp. 45-76.

Guillén López, Tonatiuh. 1993. *Baja California 1989-1992 Alternancia política y transición democrática*, El Colegio de la Frontera Norte, CIIH/UNAM, México.

Gunder Frank, André y Fuentes, Martha. 1989. “Diez tesis acerca de los movimientos sociales”, en *Revista Mexicana de Sociología*, año LI, núm. 4, Octubre, diciembre, 1989, IIS/UNAM, México, 21-44

Hábermas, Jürgen 1993. *Teoría de la acción comunicativa: complementos y estudios previos*. Red Editorial Iberoamericana, México.

Harvey, Neil. 1990. “La lucha por la tierra en Chiapas: estrategias del movimiento campesino”, en Zermeño, Sergio y Cueva, Aurelio (coordinadores). 1990. *Movimientos sociales en México*, UNAM, México, pp.187-202.

Harvey, Neil. 2000. *La rebelión de Chiapas. La lucha por la tierra y la democracia*, Ediciones Era, México.

Ibarra, Pedro y Tijerina, Benjamín (editores). 1998. *Los movimientos sociales. Transformaciones políticas y cambio cultural*, Editorial Trotta, Madrid.

Jelin, Elizabeth. 1996. “La construcción de la ciudadanía: entre la solidaridad y la responsabilidad”, en *Construir la democracia: derechos humanos, ciudadanía y sociedad en América Latina*. Jélin/Eric Hershberg (coords). Ed. Nueva Sociedad, pp. 113-130.

Laclau, Ernesto y Mouffe, Chantal, 1987. *Hegemonía y estrategia socialista. Hacia una radicalización de la democracia*, Siglo Veintiuno de España Editores, Madrid.

Lenkersdorf, Gudrun. 1986. “Contribuciones a la historia colonial de los tojolabales”, en Mario Humberto Ruz (Ed). *Los Legítimos Hombres*. Aproximación antropológica al grupo tojolabal, Volumen IV. UNAM, Instituto de Investigaciones Filológicas. Centro de Estudios Mayas, México. pp. 13 - 102.

Lomnitz, 2000. “La construcción de ciudadanía”, en *Revista Metapolítica*. Volumen, 4 julio/septiembre 2000 pp. 128-149.

López Monjardín, Adriana (1986). *La lucha por los ayuntamientos. Una utopía viable*, Siglo XXI-Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM., México.

Lujambio, Alonso, 1996. “Estudio introductorio”, en Lujambio Alonso (editor), *Poder legislativo, gobiernos divididos en la federación mexicana*. Congreso Nacional de Ciencia política y Administración pública, pp. 9- 13. UAM/IFE, México.

McAdam, Doug. 1998. “Orígenes conceptuales, problemas actuales direcciones futuras”, en Ibarra, Pedro y Tijerina, Benjamín (editores). *Los movimientos sociales. Transformaciones políticas y cambio cultural*, Editorial Trotta, Madrid, pp.89-100.

Melucci, Alberto, 1995. “El conflicto y la regla: movimientos sociales y sistemas políticos”, *Sociológica*, año 10, número 28, Actores, Clases y Movimientos Sociales II, Mayo-agosto de 1995. pp. 225-233.

Melucci, Alberto, 1999. “Acción colectiva, vida cotidiana y democracia”. El Colegio de México.

Morales Bermúdez, Jesús, 1992. “El Congreso Indígena de Chiapas. Un testimonio”, en *Anuario 1991*. Instituto Chiapaneco de Cultura. Departamento de Patrimonio Cultural e Investigación. Tuxtla Gutiérrez,, Chiapas.

Mouffe, Chantal. 1999. *El retorno de lo político. Comunidad, ciudadanía, pluralismo, democracia radical*, editorial Paidós, España.

Muro, Víctor Gabriel y Canto Chac, Manuel.1991 *El estudio de los movimientos sociales*, El Colegio de Michoacán, UAM-Xochimilco, México.

Nohlen, Dieter. 1995. *Sistemas electorales y partidos políticos*, Fondo de Cultura Económica, México.

Ocampo, Alcántar, Rigoberto, comp. 1992. *Teoría del neocorporativismo*, Universidad de Guadalajara, México.

Offe, Claus. 1988. *Partidos políticos y nuevos movimientos sociales*, editorial Sistema, Madrid., México.

Olvera J., Alberto (coordinador). 1999. *La sociedad civil. De la teoría a la realidad*, El Colegio de México, México.

Osorio, Jaime, 2001. “Fundamentos del análisis social”, en *La realidad social, su conocimiento*. FCE/UAM, México.

Pansters G., Wil. 1997. “Ciudadanos con dignidad. Oposición y gobierno en San LuisPotosí, pp. 15-54, en Zermeño, Sergio. *Movimientos sociales e identidades colectivas (México en la década de los noventa)*, La Jornada Ediciones/CIICH-UNAM., México.

Pereyra, Carlos y Woldenberg, José. 1988. “El proceso democratizador en México”, *Argumentos*, Número 5, UAM-Xochimilco, México, pp.33-50

Pontigo Sánchez, José Luis. 1985. *Dinámica social y movimiento campesino en Simojovel y Huitiupán, Chiapas*. Tesis profesional de licenciatura en economía, Área de Ciencias Sociales, UNACH, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.

Ramos Maza, Roberto, 2000. *Comitán y la región de los llanos*” guía para el viajero. CONECULTA, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Ramos Maza, Roberto, 2004. “Chiapas Geográfico”. *Lecturas para entender a Chiapas*. Secretaría de Educación, Gobierno del Estado de Chiapas.

Renard, María Cristina. 1998. *Los llanos en llamas: San Bartolomé*, Chiapas, Universidad Autónoma Chapinto/Claves Latinoamericanas, México.

Ruz Mario H. 1992, “Savia india, floración ladina”. “Apuntes para una historia de las fincas comitecas” (S. XVIII y XIX). CNCA, México.

Schmitter, C. Philippe. 1992. “A dónde ha ido la teoría del neocorporativismo hacia dónde puede ir su práctica. Reflexiones”, en Schmitter, C. Philippe, Streeck Wolfgang, Lehbruch, Gerhard (coordinadores). *Neocorporativismo II. Más allá del Estado y el Mercado*, Alianza Editorial, México, pp.125-148.

Serrano Gómez, Enrique. 2002. “Reflexiones en torno al concepto de lo político”, en Avalos Tenorio, Gerardo (coord). *Redefinir lo político*. UAM Xochimilco. México D.F. Pp. 25 – 42.

Suárez Farías, Francisco. 1991. *Elite, tecnocracia y movilidad en México*. UAM – Xochimilco, México.

Tello Díaz, Carlos. 2000 [1995]. *La rebelión de Las Cañadas. Origen y ascenso del EZLN*. Cal y arena, México.

Tilly, Charles. 1995. “Los movimientos sociales como agrupaciones históricamente específicas de actuaciones políticas”, en *Sociológica*, año 10, número 28, mayo – agosto, pp.13-36. UAM Iztapalapa. México.

Tilly, Charles. 1998. “Conflicto político y cambio social”, en Ibarra, Pedro y Tijerina, Benjamín (editores). *Los movimientos sociales. Transformaciones políticas y cambio cultural*, Editorial Trotta, Madrid, pp. 21-42.

Touraine, Alain, 1986 [1984]. “Los movimientos sociales” pp. 101-126 en Touraine en *Touraine y Hábermas, ensayos de teoría social*, compilado por Francisco Galván Díaz, Universidad Autónoma de Puebla – UAM Azcapotzalco.

Touraine, Alain. 1994 [1992]). *Crítica de la modernidad*. FCE. Buenos Aires, Argentina.

Touraine, Alain. 1994 *¿Qué es la democracia?* F.C. E. México. 1994 cuarta reimpresión, 1999.

Touraine, Alain, 1997 *Podremos vivir juntos? Iguales y diferentes*. México: FCE

Vallespín, Fernando (editor). 1994. *Historia de la teoría política*. Alianza editorial, Madrid.

Villafuerte Solís, Daniel, et. al., 1999a. Sistema de Ciudades de Chiapas, Un enfoque socioeconómico y demográfico. UNICACH; Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Villafuerte Solís, Daniel, Salvador Meza Díaz, Gabriel Ascencio Franco, María del Carmen García Aguilar, Carolina, Rivera Farfán, Miguel Lisbona Guillén y Jesús Morales. 1999b. “La tierra en Chiapas”. Viejos problemas nuevos. UNICACH, Plaza y Valdés.

Viqueira, Juan Pedro y Willibald Sonnleitner, (cords), 2000. *Democracia en tierras indígenas. Las elecciones en los Altos de Chiapas(1991-1998)*. CIESAS, COLMEX,

Weber, Max, 1983. *Economía y sociedad*, FCE, México.

Zapata, Francisco. 1992. “Premisas de la sociología accionalista”, en *Estudios sociológicos*, 10, pp. 469 – 487. Colegio de México.

Zapata, Francisco. 2001 [1997]. *Ideología y política en América Latina*. Jornadas 115, El Colegio de México, México.

Zebadúa, 1998. “Elecciones en conflicto”. La Jornada, *Masiosare*, 22 marzo, México.

Zémelman, Hugo, 1993. “Historia y coyuntura en el análisis social de América Latina. Comentarios acerca de las ponencias de Jeffrey Alexander y Norbert Lechner”, en *Modernización económica, democracia política y democracia social*. Centro de Estudios Sociológicos. El Colegio de México.

Zermeño, Sergio. 1989. “El regreso del líder: crisis, neoliberalismo y desorden”, *Revista Mexicana de Sociología*, número 4, UNAM, México

Zermeño, Sergio y Cuevas, Aurelio (compiladores). 1990. *Movimientos sociales, democracia emergente y sistema político en México*, CIIH/UNAM, México.

Zermeño, Sergio. 1996. *La sociedad derrotada. El desorden mexicano del fin de siglo*, UNAM-Siglo XXI, México.

Zermeño, Sergio (coordinador). 1997. *Movimientos sociales e identidades colectivas (México en la década de los noventa)*, La Jornada/Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Humanidades, UNAM., México.

Zermeño, Sergio. 2005. *La desmodernidad mexicana y las alternativas de la violencia y la exclusión en nuestros días*. México D.F. editorial Océano.

Documentos:

Diagnóstico regional. Región III fronteriza, Chiapas, octubre de 1987. Secretaría de Programación y Presupuesto. Delegación Regional. Comitán, Chiapas.

Agenda Estadística Chiapas, 1989. SPP, Gobierno del Estado de Chiapas, TGZ

Agenda Estadística Chiapas, 1991. SPP, Gobierno del Estado de Chiapas, TGZ.

Agenda Estadística Chiapas 1993. Secretaría de Programación y Presupuesto

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR). *La integración de refugiados guatemaltecos en Chiapas*. Noviembre de 2001. Resumen Ejecutivo final. Comitán, Chiapas.

Agenda Estadística 2002. Secretaría de Planeación, Gobierno de Chiapas, 2003.

Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), delegación Chiapas, Concentrado de población correspondiente al mes de octubre de 2003.

Desarrollo social en cifras. Secretaría de Desarrollo Social, Gobierno del estado de Chiapas. Tuxtla Gutiérrez Chiapas, 2003.

Plan de Desarrollo Municipal 2002-2004, Ayuntamiento constitucional de Comitán

Propuesta de microregionalización para el municipio de Comitán de Domínguez, Chiapas. H. Ayuntamiento municipal constitucional 2002-2004. Secretaría Técnica.

INEGI, 2004. *Estadísticas de los servicios en la localidad y municipio de Comitán*.

IEE. *Resultados de las elecciones municipales en Comitán y en los municipios de la región fronteriza, 2001*.

IEE. *Resultados de las elecciones municipales en Comitán y en los municipios de la región fronteriza, 2004*.

Perfiles Demográficos y Socioeconómicos. Secretaría de Planeación y Finanzas, 2004. Gobierno del Estado de Chiapas.

Hemerografía

Diario El Mundo, 2 de marzo de 2004. Comitán, Chiapas.

Diario El Mundo, 4 de marzo de 2004. Comitán, Chiapas.

Diario El Mundo, 13 de marzo de 2004. Comitán, Chiapas.

Diario El Mundo, 28 de abril de 2004. Comitán, Chiapas.

Diario El Mundo, 24 de junio de 2004. Comitán, Chiapas.

Diario Nuevo Milenio, 12 de julio de 2004, Comitán, Chiapas

Diario Nuevo Milenio, 2 de agosto de 2004, Comitán, Chiapas

Páginas de internet:

<http://cee-chiapas.org.mx/estadísticas/ayum91.htm>

<http://cee-chiapas.org.mx/estadísticas/ayum95.htm>

<http://cee-chiapas.org.mx/estadísticas/ayum98.htm>

GLOSARIO DE SIGLAS UTILIZADAS

CTM	Confederación de Trabajadores de México
CNOP	Confederación Nacional de Organizaciones Populares
CNC	Confederación Nacional Campesina
CROM	Confederación Regional Obrera de México
OCEZ	Organización Campesina “Emiliano Zapata”
OCEZ UMOI	Organización Campesina “Emiliano Zapata”, Unidad del Movimiento de Organizaciones Independientes
OCEZ - DI	Organización Campesina “Emiliano Zapata”, Democrática Independiente
UNOPI	Unión Nacional de Organizaciones Populares de la Izquierda Independiente
UGOCP	Unión General Obrero, Campesina y Popular
COAO	Coalición de Organizaciones Autónomas de Ocosingo
OPEZ – BPP	Organización Proletaria “Emiliano Zapata”, Bloque Poder Popular
RAP	Regiones Autónomas Pluriétnicas
MPC	Movimiento Popular Comiteco
ODIC	Organización Democrática Independiente de Comitán
CEOIC	Consejo Estatal de Organizaciones Indígenas y Campesinas
FRELUM	Frente de Locatarios Unidos de los Mercados Públicos y Central de Abasto
PRI	Partido Revolucionario Institucional
PRD	Partido de la Revolución Democrática
PT	Partido del Trabajo
PVEM	Partido Verde Ecologista de México
EZLN	Ejército Zapatista de Liberación Nacional
CANACINTRA	Cámara Nacional de la Industria de la Transformación
CONCANACO	Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio
FSTSE	Federación de Sindicatos de los Trabajadores al Servicio del Estado
SNTE	Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación

CNPP Confederación Nacional de la Pequeña Propiedad
CNG Confederación Nacional Ganadera
ISSSTE Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
ISSSTECH Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Chiapas
IMSS Instituto Mexicano de Seguridad Social
CFE Comisión Federal Electoral
CLCH Coordinadora de Lucha de Chiapas
PSUM Partido Socialista Unificado de México
PMS Partido Mexicano Socialista
PARM Partido Auténtico de la Revolución Mexicana
PPS Partido Popular Socialista
PAN Partido Acción Nacional
PDM Partido Demócrata Mexicano
PCM Partido Comunista Mexicano
PST Partido Socialista de los Trabajadores
PRT Partido Revolucionario de los Trabajadores
PMT Partido Mexicano de los Trabajadores
PFCRN Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional
FDN Frente Democrático Nacional
IEE Instituto Estatal Electoral
IFE Instituto Federal Electoral
PREP Programa de Resultados Preliminares
UNCAFAECSA Unión Nacional de Crédito Agropecuario, Forestal y de Agroindustria de Ejidatarios, Comuneros y Pequeños Propietarios Minifundistas
CNPA Coordinadora Nacional Plan de Ayala
CIOAC Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos
OID Organización Ideológica Dirigente
UU Unión de Uniones Ejidales y Grupos Campesinos Solidarios de Chiapas

CEB Comunidades Eclesiales de Base
ACNUR Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados
COMAR Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados
PROSECO Promoción de Servicios Comunitarios
ONG Organización No Gubernamental
INI Instituto Nacional Indigenista
CIAM Centro de Investigación y Acción para la Mujer
CCESC Centro de Capacitación en Ecología y Salud para Campesinos
PRODUSSEP Promoción y Desarrollo de Servicios de Salud y Educación Popular
CISC Centro de Investigaciones en Salud de Comitán
DESMUNI Desarrollo de la Mujer y la Niñez
CADECO Capacitación en Desarrollo Comunitario
CIREFCA Confederación Internacional sobre Refugiados Centroamericanos
CAMADDS Capacitación, Asesoría, Medio Ambiente y Defensa del Derecho a la Salud, AC.
URNG Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca
CONAPO Consejo Nacional de Población
PEA Población Económicamente Activa
INEGI Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática
COBAINCO Coordinadora de Barrios Independientes de Comitán
CLOC Coordinación Latinoamericana de Organización del Campo
MOICAM Movimiento Indígena y Campesino Mesoamericano
UPC Unión Popular Comiteca
OMC Organización Mundial de Comercio
COAPAM Coordinación de Agua potable y Alcantarillado Municipal
TOJ TZOT ZE Li Maya. Tojolabal, Tzotzil, Tzeltal
SOCAMA Solidaridad Campesino Magisterial